

33ª REUNION — SESION ESPECIAL

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y señor Roberto Dri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Gustavo Trombetta

MINISTRO PRESENTE:

del Interior,

señor Angel G. Borlenghi;

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrieu, Oscar E.
 Alvarez Pereyra, Manuel
 Allub, Rosendo
 Aráoz, Ricardo E.
 Astorgano, José
 Atala, Luis
 Ayala López Torres, Francisco
 Bagnasco, Vicente
 Balbin, Ricardo
 Beretta, Eduardo
 Bernárdez, Manuel
 Bonazzola, Romeo E.
 Bonino, Alberto C.
 Brugnerotto, Juan N. D.
 Bustos Fierro, Raúl
 Butterfield, Humberto
 Cámpora, Héctor J.
 Camus, Eloy P.
 Candiotti, Alberto M.
 Cané, José
 Carreras, Ernesto A.
 Casas Noblega, Armando
 Cleve, Ernesto
 Colom, Eduardo
 Conte Grand, José Amadeo
 Cooke, John William
 Cufre, Orlando H.
 Cursáck, Roberto Enrique
 Dávila, J. Aníbal
 Decker, Rodolfo A.
 Degreef, Juan Ramón
 De la Torre, Juan
 Del Carril, Emilio Donato
 Del Mazo, Gabriel
 Dellepiane, Luis

Díaz, Carlos A.
 Díaz, Manuel M.
 Díaz de Vivar, Joaquín
 Dri, Roberto
 Erro, Saturnino S.
 Estrada, Angel C.
 Fajre, José Benito
 Fernández, Hernán S.
 Ferrando, Manuel P.
 Ferrer, Modesto
 Filippo, Virgilio M.
 Forteza, Eduardo Julio
 Fregossi, Luis J.
 Frondizi, Arturo
 Garaguso, Bernardino Hipólito
 Garay, Marcelino S.
 Garcia, Manuel
 Gil Flood, Mario
 Giménez Vargas, Francisco
 González Funes, Tomás
 Haramboure, Horacio
 Ibaguren, Prudencio M.
 Lagraña, Héctor D.
 Lareo, Ricardo
 Lasciar, Guillermo F.
 Leloir, Alejandro H.
 Lema, Manuel E.
 Letamendi, Balbino (h.)
 Liceaga, Félix J.
 López Serrot, Oscar
 Lucini, Raúl Felipe
 Mántaras, Manuel J.
 Mariategui, Angel S.
 Marini, Angel C.
 Marotta, José
 Martínez Luque, Enrique
 Mercader, Emir E.
 Messina, Humberto
 Miel Asquía, Angel J.
 Monjardín, Federico F.
 Montes, Juan Manuel

Montes de Oca, Carlos
 Montiel, Alcides E.
 Moreno, José Luis
 Noriega, Juan J.
 Novellino, Francisco
 Osinalde, Rafael
 Ottonello, Benito J.
 Palacio, Ernesto
 Pasquali, Juan Domingo
 Pereyra, Luis Alberto
 Pérez Martín, José
 Pirani, Antonio S.
 Pontieri, Silverio
 Rabanal, Francisco
 Repetto, Agustin
 Reynés, Leandro R.
 Ricagno, Roberto
 Roche, Luis Armando
 Rodríguez, Manuel
 Rodríguez, Nerio M.
 Rodríguez de la Torre, Raúl
 Rojas, Absalón
 Rojas, Nerio
 Rossi, José
 Rouggier, Valerio S.
 Rudi, Ricardo
 Rumbo, Eduardo I.
 Sánchez, Pedro
 San Millán, Ricardo Antonio
 Santander, Silvano
 Saporiti, Luis
 Saravia, Teodoro S.
 Sarmiento, Manuel
 Seeber, Carlos Manuel
 Silvestre, Adolfo J. B.
 Sobral, Antonio
 Solá, Fernando
 Tejada, Ramón Washington
 Tilli, Pedro
 Tommasi, Victorio M.
 Toro, Ricardo
 Uranga, Raúl L.

Urtiaga Bilbao, Mateo de
 Valdez, Celestino
 Vanasco, Julio A.
 Varea, Isidoro
 Velloso Colombres, Manuel F.
 Vergara, Amando
 Villacorta, Luis René
 Visca, José Emilio
 Vischi, Albino
 Vitolo, Alfredo R.
 Zamudio, Juan Carlos
 Zanoni, Pedro P.
 Zavala Ortiz, Miguel Angel

AUSENTES, CON LICENCIA:

Argaña, José M.
 Bidegain, Oscar E.
 Córdova, J. Salvador
 Pasquini, José P. D.
 Perea, Pedro J.
 Pierotti, Mario
 Villafañe, José María

AUSENTES, CON AVISO:

Benítez, Antonio J.
 Bruno, Domingo
 Guardo, Ricardo C.
 Lavia, Ludovico

AUSENTES, SIN AVISO:

Cattáneo, Atilio E.
 Illia, Arturo U.
 Mac Kay, Luis R.
 Maineri, D. Jacinto
 Martínez Guerrero, Guillermo
 Parry, Roberto
 Pastor, Reynaldo A.
 Ponce, Angel L.
 Rodríguez Araya, Agustin
 Yadarola, Mauricio L.

SUMARIO

- 1.—Convocatoria a sesión extraordinaria.
- 2.—Moción del señor diputado Visca: trámite de proyectos de ley sobre reforma de la Constitución nacional.
- 3.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley sobre reforma de la Constitución nacional. Se sanciona.
- 4.—Apéndice:

I.—Asuntos entrados:

Proyecto de ley del señor diputado Cámpora y otros, sobre reforma de la Constitución nacional.

II.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto de 1948, a la hora 16:

1

CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la sesión extraordinaria con la presencia de 109 señores diputados.

Por Secretaría se dará cuenta del pedido de sesión extraordinaria y de la resolución de la presidencia de la Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — La nota recibida por la Presidencia de la Honorable Cámara dice así:

Buenos Aires, 13 de agosto de 1948.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Héctor J. Cámpora.

S/D.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara, tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente para solicitarle quiera tener a bien convocar a la Honorable Cámara para el día de la fecha, a las 15 y 30, a fin de considerar la revisión de la Constitución nacional, en base a los proyectos presentados en la Honorable Cámara.

Saludamos al señor presidente con la mayor consideración.

Angel J. Miel Asquía. — Luis Atala. — Joaquín Díaz de Vivar. — José Emilio Visca. — Bernardino Hipólito Garaguso.

Con motivo de la nota precedente, la Presidencia de la Honorable Cámara ha dictado la siguiente resolución:

Vista la nota precedente, en la que varios señores diputados solicitan se convoque a la Honorable Cámara a una sesión extraordinaria a las 15 y 30 horas del día de la fecha para considerar los proyectos de ley a estudio de la Honorable Cámara, por los cuales se declara necesaria la revisión de la Constitución nacional, y estando la petición encuadrada en los términos del reglamento (artículos 30, 35, 36 y 39, inciso 9º), como asimismo la hora que se solicita permite que llegue a conocimiento de los señores diputados la citación correspondiente, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Primero. — Cítese a los señores diputados a fin de realizar sesión extraordinaria el día de la fecha a las 15 y 30 horas para considerar los proyectos de ley a estudio de la Cámara por los cuales se declara necesaria la revisión de la Constitución nacional, debiendo especificarse en la citación el motivo de la misma.

Segundo. — Comuníquese.

Sala de la Presidencia, 13 de agosto (10 horas) de 1948.

HÉCTOR J. CÁMPORA.

Leonidas Zavalla Carbó. — Rafael V. González.

En virtud de esta resolución, se expidieron telegramas con el siguiente texto:

Oficial. Urgente recomendado.

Señor diputado: A solicitud de varios señores diputados, y de conformidad con lo que prescribe el artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara, tengo el agrado de invitar al señor diputado a concurrir a la sesión extraordinaria especial a celebrarse en el día de la fecha, a las 15 y 30 horas, con el objeto de considerar los proyectos de ley a estudio de la Cámara, por los cuales se declara necesaria la revisión de la Constitución nacional.

Saludo al señor diputado muy atentamente.

HÉCTOR J. CÁMPORA.

Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Leonidas Zavalla Carbó. — Rafael V. González.
Secretarios.

Sr. López Serrot. — ¿A qué hora fueron expedidos los telegramas?

Sr. Presidente (Cámpora). — La Secretaría informará.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En el expediente existe la siguiente constancia:

Sucursal 43 (Congreso Nacional), 13 de agosto de 1948.

En la fecha se ha recibido de la Secretaría de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la cantidad de 151 telegramas oficiales dirigidos a los señores diputados, citándolos para la reunión a efectuarse

en el día de hoy, a las 15 y 30 horas, impuestos a las 11 horas.

Martín Muñoz, jefe sucursal 43 (Congreso Nacional).

Sr. López Serrot. — La hora de despacho es 11 y 50. He recibido el telegrama a la hora 15 en mi domicilio, situado a ocho cuadras del Congreso.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Vítolo. — Quería aclarar a la Presidencia...

Sr. Presidente (Cámpora). — No tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vítolo. — El señor diputado por Entre Ríos me permite.

Quería señalar que he venido a la reunión porque he tenido conocimiento extraoficial de la misma, pues hasta las 15 y 20, hora en que me he retirado de mi domicilio habitual en la Capital —el que he denunciado al incorporarme a esta Honorable Cámara—, no había recibido citación para esta reunión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical conoció extraoficialmente la decisión adoptada por algunos señores diputados, de solicitar a la Presidencia la celebración de sesión extraordinaria para considerar esta tarde los proyectos de reforma a la Constitución.

Como ya lo han expresado algunos diputados, comentando el informe de la Secretaría, no puede tratarse de una medida más anormal, anormal en sí, por su trámite, y extraordinaria, desusada, por el propósito que persigue.

Las autoridades superiores del partido nos han encomendado concurrir hoy a la Cámara, precisamente, porque ellos también participaron de nuestra alarma, de que la mayoría se proponía iniciar hoy el trámite de la ley de declaración de la necesidad de reformar la Constitución nacional.

La ausencia de la oposición, determinada por la necesidad de poner en manos del partido las renunciaciones...

Sr. Visca. — Las palabras del señor diputado no tienen nada que hacer con la convocatoria.

Sr. Uranga. — No sabe lo que voy a decir...

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — La ausencia del sector de la oposición ha servido para que el bloque de la mayoría, para que el partido gobernante, dé una prueba al país de cómo se gobierna sin control de la minoría; cómo a hurtadillas y clandestinamente se sancionan leyes...

Sr. Decker. — No permitimos eso, señor presidente; y exigimos que el señor diputado se concrete a la cuestión!

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado está faltando al reglamento contrariando las disposiciones del artículo 149. Concrétese a la cuestión el señor diputado; si no, voy a tener que poner a consideración de la Cámara la determinación de si está, o no, en la cuestión.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Miel Asquía. — Que se vote si está o no en la cuestión.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia tendrá que poner a consideración de la Cámara...

Sr. Uranga. — Primero tiene que invitarme. No puede proceder en esa forma, sin invitarme primero a que me concrete a la cuestión.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Uranga. — Tiene que invitarme a que me concrete a la cuestión.

Sr. Presidente (Cámpora). — He invitado al señor diputado.

Sr. Uranga. — Recién en este momento me invita.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia invita nuevamente al señor diputado por Entre Ríos a que se concrete a la cuestión.

Sr. Uranga. — Le hago la advertencia al señor presidente de que ésta es la primera vez que me invita.

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado. Continúe con la palabra.

Sr. Uranga. — Nosotros vamos a solicitar que se difiera esta reunión; y para ello apelamos a la cordura, a la sensatez y a la responsabilidad del grupo de la mayoría.

Evidentemente no puede hacerse un debate sobre la reforma de la Constitución argentina —la que ha soportado la prueba de casi un siglo, manteniéndose prácticamente intacta— en una reunión de esta naturaleza.

Tengo sobre mi banca uno de los telegramas cursados por la Secretaría, donde consta que fué despachado a las 11 y 30 horas, dirigido al señor diputado Zavala Ortiz y recibido a las 14 y 15. ¿Es posible que esta reunión se realice con esos antecedentes formales? ¿Es posible que entremos a discutir parcial o totalmente la necesidad de la reforma de la Constitución de esta manera?

A pesar de lo que prevén los artículos 35 y 36 del reglamento, esta sesión no está normalmente convocada, y voy a demostrarlo si tienen paciencia los señores diputados.

No se trata de una reunión común. Nuestra Constitución establece diversas hipótesis de quórum; algunos son estrictos, otros son variables.

La Constitución establece que esta Cámara no puede funcionar sino con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 80 diputados; cualquiera sea el número de quórum real, se refiere siempre al quórum legal, es decir, sobre 158 diputados. El año pasado tuve oportunidad de hacer la pregunta concreta al señor presidente, el doctor Guardo, en ese momento, respecto de si para el quórum se computaban también los diputados fallecidos y los renunciantes, y concretamente me dijo que sí, que el quórum era siempre invariable de 80 miembros.

Sr. Visca. — No está eso en discusión.

Sr. Uranga. — Ahora, para poder reformar la Constitución —y esto ya interesa—, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Sr. Visca. — Tampoco está eso en cuestión. Está en discusión la convocatoria. Se está curando en salud el señor diputado.

Sr. Uranga. — Piensen los señores diputados en la extensión de nuestro país, en las dificultades de comunicarse con los diputados que residen en distintos lugares, incluso, como lo hemos demostrado, la comunicación aun dentro de la ciudad. ¿Cómo es posible este apresuramiento para reformar la Constitución, clandestinamente!

Sr. Miel Asquía. — Esta mañana hubo sesión y el señor diputado no se hizo presente.

Sr. Uranga. — Usted tampoco. Ese discurso se lo van a leer en el año 2006.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene que referirse a la convocatoria la exposición del señor diputado...

Sr. Uranga. — Estoy fundando la necesidad de diferir la reunión, dada la gravedad inusitada que tiene este acto que ha de producir el Congreso.

Fijense los señores diputados que se requieren los dos tercios de los miembros del Congreso, porque la Constitución ha querido que sobre tan trascendental problema se pronunciara la soberanía total de la Nación, que tuviera ella la ocasión de discutir las reformas a la Carta Magna, los representantes de todas las provincias, los diputados de los lugares más alejados del país, y al propio tiempo tuvieran oportunidad de reflexionar sobre el asunto, y no resolverlo así repentina y caprichosamente.

¿Acaso no recordamos las palabras del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando, a propósito de una moción

del señor diputado Colom de tratar su proyecto de reformas, manifestó que no podía fijarse una fecha precisa para la discusión de este asunto tan grave y fundamental como se pretendía, sin despacho de comisión, y que no era un procedimiento aceptable aun en el caso de acordar dos o tres semanas de plazo como lo proponía el señor diputado Colom?

En estas condiciones, ¿cómo es posible que en el plazo de horas, en ausencia oficial de la oposición, pueda resolverse proponer la necesidad de la reforma? La historia será implacable con quienes sancionen una disposición de esa naturaleza, quitando a la representación popular en esta Cámara y a la opinión pública la oportunidad de realizar un examen exhaustivo respecto de un problema tan importante como el de la reforma de la Constitución, la que a nuestro juicio, como lo hemos propuesto en la comisión respectiva, debía hacerse previa consulta a todos, a universitarios, a juristas, a los sindicatos, a los partidos políticos, e invitar a los diarios a que abran sus columnas al gran debate sobre este tema central que hace a las garantías de la vida espiritual, jurídica y económica de la Nación. Y todo esto hecho sin límites de ninguna especie.

Y, en cambio, frente a la realidad que observamos, debemos preguntarnos de qué modo y en qué ocasión este asunto puede ser discutido en el recinto, si hoy mismo se le pondrá la losa de una votación que recaerá en uno de los habituales pedidos de cerrar el debate, antes de que se halle agotado, y sin que se lean siquiera los artículos, como lo hemos visto consignado en las crónicas periodísticas.

La mayoría debe recapacitar. No es la propietaria de la Cámara, no dispone de su destino de manera despótica y absoluta. Esta es la representación popular; debe escucharse la voz de la minoría; debe darse oportunidad a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que yo mismo integro y a la cual hago el honor de reconocerle que estaba estudiando el asunto con toda seriedad y dispuesta a que se lo considerara en este período—, a formular su dictamen previo análisis a fondo de todo lo que ha sido propuesto.

No es posible que después de haber fracasado la sesión de esta mañana por falta de quórum la reacción se manifieste convocando a la Cámara para una hora inhábil, según la norma adoptada, para el viernes por la tarde, contrariando la costumbre, a fin de decidir la reforma de la Constitución que ha costado al pueblo argentino muchas lágrimas y muchos sacrificios. Por esta Constitución del 53 se desangró una generación. El país había soportado una larga dictadura. Fué preciso que se movilizaran todos los hombres y que en los campos de Caseros fuera abatida la tiranía, para lograr que se abriera el camino de la libertad,

la justicia y la democracia y se estructurara este régimen jurídico que hizo adquirir a la República una posición internacional que la enaltece.

Por nuestra responsabilidad —y ya fuera de los partidos—, si es que se considera necesaria la reforma de la Constitución, pedimos que la sesión sea diferida. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Las palabras del señor diputados tienden a justificar las actitudes de los señores diputados, que exclusivamente les pertenecen; las nuestras pueden haber sido modificadas como consecuencia de las tomadas por la representación de la Unión Cívica Radical y sus organismos partidarios: por las nutridas informaciones de los diarios, el país estaba en la casi absoluta seguridad de que esa representación no volvería más al recinto.

Estamos ahora ante un planteamiento nuevo.

Esta mañana, en tanto el sector de la mayoría contaba con setenta y tantos diputados en su sala de reuniones y algunos en el recinto, la sesión fué sorpresivamente levantada.

Sr. Mercader. — Reglamentariamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa el señor diputado por Buenos Aires al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Visca. — Digo sorpresivamente, porque tan inesperada como el incendio del Graf Zeppelin fué la aparición del señor diputado en el recinto. Concedor a fondo del reglamento, aprovechó la circunstancia de que en ese instante no hubiese quórum, e impidió que, como en tantas otras oportunidades, se esperara un poco más para lograrlo. Si hubiéramos tenido la seguridad de que íbamos a contar con la presencia de los señores diputados en el recinto, hubiéramos tratado de que los miembros de nuestro sector estuvieran aquí y no en el bloque.

El reglamento de la Cámara —que no hemos redactado nosotros— permite estas sesiones de carácter extraordinario. La sola presencia de los señores diputados es prueba más que suficiente de que están enterados de éste como de todos los asuntos que la Cámara tiene a tratar. Por lo tanto, vamos a seguir debatiendo y asumiremos la responsabilidad que los señores diputados quieran darnos.

Lo hacemos en la absoluta seguridad de que no serán los señores diputados con respecto a nosotros —ni tampoco nosotros con respecto a ellos— quienes escribirán la página definitiva de la historia del país sobre éste o sobre cualquier otro asunto a consideración del Parlamento.

La opinión de ellos será muy respetable, la nuestra lo es igualmente; pero el país dirá si

la actitud que toma hoy la mayoría, como la que tomó ayer de sancionar leyes sin la presencia de la oposición, es la que corresponde o no. Desde luego que la ausencia de la oposición no es causa para que discutamos sobre cosas en que estamos perfectamente de acuerdo.

De manera que nosotros vamos a votar en el sentido de que la convocatoria a sesión extraordinaria ha sido hecha reglamentariamente y que en ejercicio de nuestros mandatos y en función de Cámara vamos a tratar todos los proyectos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Después de los informes a cargo de los diputados responsables, que se darán no para que ilustren a la oposición, que ya tiene su posición fijada, sino para ilustración de los diputados peronistas, que estamos unidos por una solidaridad total, asumiremos la responsabilidad que la historia nos señala, porque ésta será la única que pueda decir quién tiene razón.

La opinión que sobre esto tengan los señores diputados puede valer mucho; para nosotros quizá no valga nada. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — El texto del reglamento y los precedentes abonan la citación ordenada por la Presidencia a solicitud de cinco señores diputados; pero como ha sido objetada, se va a someter a votación de la Honorable Cámara la determinación de si ha sido hecha normalmente, dentro del reglamento y de las prácticas parlamentarias.

Sr. Visca. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar, nominalmente, si la citación a sesión extraordinaria ha sido hecha reglamentariamente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 127 señores diputados, han votado 95 por la afirmativa y 32 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garagus, Garay, García, Giménez Vargas,

Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N.M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Bonazzola, Candiotti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, González Funes, Liccaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vitolo, Zanoní y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Cámara resolverá si se consideran inmediatamente los proyectos a que se refiere la presente convocatoria.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — En nombre del grupo parlamentario de la Unión Cívica Radical me voy a oponer a que se traten sobre tablas los proyectos que motivan esta convocatoria.

El telegrama que algunos diputados hemos recibido menos de una hora antes de iniciarse la sesión y la resolución de la Presidencia que nos convoca para ésta, dicen que debemos «considerar los proyectos de ley a estudio de la Cámara por los cuales se declara necesaria la revisión de la Constitución nacional».

Este propósito de considerar en forma imprevista la reforma de la Constitución no se plantea por primera vez en este recinto. Pero ya se han escuchado voces de ambos sectores que han fijado sus criterios sobre la forma como debemos encarar, con toda nuestra responsabilidad de diputados de la Nación Argentina, este hondo problema de la revisión de nuestra Carta Magna.

Esta convocatoria, esta sesión ya iniciada, este planteo de tratar sobre tablas proyectos que no cuentan con despacho de las comisiones respectivas, encuentran al bloque de la Unión Cívica Radical en el mismo terreno de profundo respeto a la Constitución y de decisión inquebrantable de afrontar este asunto con seriedad y con tranquilidad en que nos hallábamos cuando se formularon por diputados de la mayoría mociones relacionadas con el mismo asunto, con anterioridad al día de hoy.

Es necesario decir —para que quede establecido en el Diario de Sesiones de esta jornada,

de esta sesión en la que, como lo ha dicho el señor diputado por Buenos Aires, estamos asumiendo una enorme responsabilidad ante la historia—, para que nos juzguen los que nos sucedan, que el criterio de tratar sobre tablas no es el que se ha enunciado otras veces haciendo mérito de la representación del bloque de que forman parte los diputados de la mayoría.

En las sesiones del día 18 de junio y 29 de julio últimos, el diputado por la Capital, señor Eduardo Colom, pidió, en la primera de ellas, pronto despacho para los distintos proyectos a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en la segunda solicitó que se consideraran el miércoles siguiente al de su moción —es decir, una semana después—, con o sin despacho de comisión, todos los proyectos relacionados con este asunto y que obraban en el seno de dicha comisión.

En la primera oportunidad, cuando el diputado Colom pidió en la sesión del 23 de junio próximo pasado el pronto despacho de este asunto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Bagnasco, dijo algunas palabras que me permitiré leer para que quede de ellas plena constancia en el Diario de Sesiones de la presente reunión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante del sector de la mayoría, diputado Bagnasco, manifestó: «Se trata de un proyecto que, por su trascendencia, requiere un estudio analítico, a fondo, que lógicamente va a demandar un tiempo relativamente considerable.» «El proyecto del señor diputado implica la modificación de más de diez artículos de la Constitución nacional. Además, entiendo que una comisión que tiene a estudio un proyecto de tan extraordinaria importancia no debe concretarse a la iniciativa del autor, sino estudiar todos los antecedentes que obran en la comisión, así como la opinión de los tratadistas, como también otros proyectos que han caducado por imperio de la ley Olmedo, pero que deben tenerse en cuenta para el estudio del asunto.»

«Por otra parte, y personalmente —añadió—, creo que es de sumo interés conocer la opinión del Poder Ejecutivo de la Nación respecto de algunas modificaciones que se vinculan al poder administrador, pues éste, durante los cien años de aplicación que tiene nuestra Carta Fundamental, ha tenido oportunidad de conocer muchas situaciones creadas por la evolución natural del tiempo. En ese sentido me he dirigido al señor ministro del Interior recabando un informe sobre el proyecto del señor diputado Colom.»

Más adelante agregó el diputado Bagnasco: «Pero es indiscutible que la Comisión de Asuntos Constitucionales no puede expedirse sobre el proyecto del señor diputado Colom en una forma apresurada, sin agotar el estudio de todos

los antecedentes que obran en el seno de la comisión y de los proyectos que ya no tienen instancia parlamentaria por imperio de la ley Olmedo, y sin consultar también la opinión de los distintos sectores que integran este cuerpo, porque extraoficialmente yo sé que algunos señores diputados van a presentar proyectos de reformas a la Constitución.»

Por último, afirmó «que era un deber ineludible agotar el estudio de la materia en forma exhaustiva, para después venir a este recinto cumpliendo con el deber de asesorar a la Cámara en asunto de tanta trascendencia. No podemos creer que este proyecto de ley pueda ser tratado sin un estudio analítico, profundo y amplio».

Como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales no tengo noticias de que a su seno hayan llegado los informes requeridos al Poder Ejecutivo de la Nación, que el diputado Bagnasco estimaba indispensables para afrontar la consideración de este problema.

En la sesión del 29 de julio, el diputado Colom pidió que en la del miércoles siguiente se tratara ese mismo asunto con despacho de comisión o sin él. El diputado Manuel García, también integrante del bloque de la mayoría, manifestó lo siguiente: «La Comisión de Asuntos Constitucionales, por la unanimidad de los miembros que la integran, en este caso está dispuesta a hacer un planteamiento de fondo. Este asunto de la reforma constitucional tendrá que venir al recinto con los dictámenes en mayoría y minoría de la comisión.

«En consecuencia, por la magnitud del asunto a debatirse, lamento estar en opinión divergente con el compañero de sector señor diputado Colom.» Y terminó diciendo: «Reitero que es criterio de la comisión analizar y dictaminar a conciencia sobre este asunto, que indudablemente ha de ser de trascendente repercusión nacional.»

El señor diputado Visca, integrante también del sector de la mayoría, manifestó en esa misma oportunidad lo que voy a leer: «Esta importante cuestión vamos a debatirla con toda la intensidad que desea el señor diputado Colom y con todo el acopio de antecedentes que ha requerido el señor diputado de la Unión Cívica Radical López Serrot, por ser de excepcional importancia.» Y concluyó con estas palabras: «El amplio planteamiento de este asunto ha de dar lugar a que todos y cada uno de nosotros, autores o no de iniciativas en este sentido, exponamos nuestra particular preocupación. Pero siempre hemos de seguir una línea, un punto de mira, un programa de acción paralelos a la discusión amplia que ha de hacerse en todo el territorio de la República por intermedio de los órganos a cuyas directivas nos debemos como representantes peronistas»

Sr. Visca. — Estamos respondiendo a esas directivas.

Sr. López Serrot. — «Los partidos políticos adversarios —añadió el diputado Visca— en sus convenciones locales, provinciales o nacionales, discuten este tema. Nosotros también vamos a agitarnos en ese ambiente; nosotros también vamos a auscultar —debemos hacerlo, subrayó el señor diputado Visca— a nuestros electores, a las autoridades de nuestro partido, a fin de mantener en el recinto una total disciplina parlamentaria.»

Nada de esto ha ocurrido, señor presidente. Ni han llegado al seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales los informes que se requirieran al Poder Ejecutivo de la Nación, ni se ha traído al recinto un despacho de mayoría y minoría como quería el señor diputado García, ni se ha hecho el profundo debate político a que aludió, en las palabras que he leído, el señor diputado Visca.

Mientras tanto, los señores diputados que en aquellas sesiones —hace poco más de un mes algunas de ellas— formulaban tales manifestaciones, hoy se disponen a considerar sobre tablas este grave y fundamental problema, sin informes previos, sin tener noticias sobre lo que piensa el Poder Ejecutivo de la Nación acerca del particular, y sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Insistiendo en las manifestaciones de mi compañero de sector el señor diputado por Entre Ríos, yo también, frente a este propósito de tratar este asunto sobre tablas, llamo a la reflexión a los señores diputados de la mayoría.

Procuramos en nuestro paso por este recinto —interpretando algunos quizá en el error y otros en la verdad los problemas nacionales— servir los grandes intereses nacionales, cuya custodia y defensa nos ha confiado el electorado que nos trajo a estas bancas. Pero debemos meditar serenamente antes de afrontar este problema y remitirnos a algunas expresiones que, desde lejos, nos deben llamar a la serenidad y a medir los pasos que vamos a dar.

Story, en su *Comentario sobre la Constitución de los Estados Unidos*, al hablar de las reformas de la Constitución dice: «El objeto importante en esta materia es hacer prácticos los cambios, pero no demasiado fáciles, y seguir las lecciones de la experiencia más bien que las deducciones de la teoría.»

El ex diputado Vedia dijo en su hora estas bellas palabras: «La Constitución es cofre precioso, depósito sagrado que debe abrirse lo menos posible y abrirse con cautela, con respeto, y con la firme resolución de cerrarlo pronto.»

Y el magistral Estrada en su *Curso de Derecho Constitucional* —en el que hemos bebido muchos las pocas o muchas noticias que sobre la Constitución argentina podamos tener

y volcar en este instante— nos dijo estas palabras, como una profunda a la vez que serena advertencia: «El día en que la Ley Fundamental sea alterada para servir los intereses de una fracción, ese día habrán muerto para siempre el derecho y la libertad en la República Argentina.»

Tengo la absoluta convicción, la absoluta seguridad de que la totalidad de los integrantes de este sector pondrá en los votos que emita su profundo amor a la patria y su profundo amor a nuestra Constitución.

En nombre de ese amor, que nadie puede discutirnos, apelo a los señores diputados de la mayoría para que me acompañen, en esta invitación que formulo, de oponerse al tratamiento sobre tablas del asunto que se plantea. Habrán servido así a la gran causa del respeto a la Carta Fundamental de la Nación, y se habrán colocado frente a la historia en una posición y en una estatura como para merecer de ella honor y respeto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Ya a consideración de la Cámara la proposición de tratar sobre tablas los proyectos sobre reforma a la Constitución, como autor de uno de ellos y como promotor, en el presente año parlamentario, de mociones de pronto despacho, me creo en el deber de dar mi opinión.

No traemos nada nuevo a este Parlamento, ya que desde 1865 los antecedentes parlamentarios sobre reforma a la Constitución son abundantes. En efecto; en 1865 la promovió Valentín Alsina en el Senado y en base a ese proyecto se dictan las leyes 171 y 172. Le sigue en 1877 José M. del Campo y Guillermo San Román; posteriormente le siguen: en 1881, Estanislao S. Zeballos; en 1882, Sánchez de Bustamante; en 1890, Pascual D. Berascoechea; en 1897, Lucas Ayarragaray; en 1903, Carlos Olivera; en 1909, Juan Argerich; en 1913, Carlos Conforti, radical; en 1916, Joaquín Castellanos, también radical; en 1917, Carlos F. Melo; en 1918, Enrique del Valle Iberlucea, socialista; en 1919, José María Salazar Altamira; en 1920, el diputado Roberto Parry, de la Unión Cívica Radical; en 1923, Matías G. Sánchez Sorondo, conservador; en 1923, el presidente Alvear, radical, dirigió un mensaje al Congreso propiciando la reforma, y en ese mismo año de 1923 —propició la reforma— Francisco Correa, demócrata progresista, y el diputado Adrián C. Escobar; en 1924 el diputado de la Unión Cívica Radical doctor Leopoldo Bard; en 1925 los señores senadores Juan B. Justo y Mario Bravo; en el mismo año el señor senador Alejandro Ruzo; en 1926 el diputado radical por Tucumán Horacio Sánchez Loria; en 1927 el actual senador nacional doctor Diego

Luis Molinari; en el mismo año el diputado Joaquín Coca; en 1928 el diputado nacional Leopoldo Bard; en 1931 lo hace el Poder Ejecutivo defacto, en virtud de un mensaje del general Uriburu; en 1932 el diputado nacional Adrián C. Escobar; en 1934 el senador José Nicolás Matienzo; en 1935 el diputado nacional Marcial Zarazaga; en 1936 el diputado Manuel Besasso y otros; en 1938 el diputado Reynaldo A. Pastor; en 1939 los diputados Justo y Medina; en el mismo año el diputado Pérez Leirós; en 1946 el diputado Pérez de la Torre; en el mismo año el diputado Jofré y otros; en los años 1947 y 1948 el diputado Colom; en el mismo año 1947 el diputado Valdez; en 1948 el diputado Cooke; en el mismo año el diputado Visca.

Estoy probando, con esto, que no se ha traído al recinto una cuestión nueva.

Sr. Rojas (A). — ¿Llegaron a despacharse esos proyectos?

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvasse no interrumpir al orador el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Colom. — Muchos de ellos fueron despachados.

He mencionado estos antecedentes para evidenciar a la Honorable Cámara que no hay nada nuevo en debate.

En oportunidad de discutirse el proyecto de ley relativo a los derechos políticos de la mujer, también citamos gran cantidad de antecedentes que evidenciaban que durante cuarenta años se clamó estérilmente ante esta Honorable Cámara a fin de obtener importantes reformas. Pero, en definitiva, la reforma constitucional no es una cuestión nueva. Cuando el señor diputado López Serrot citaba las frases de Vedia en el debate histórico de 1897, en virtud del cual se introdujo una reforma parcial de la Constitución, yo releía mis apuntes. Es por ello que me voy a permitir citar una expresión de Vedia con relación a Sarmiento, que sostenía, y lo evidenciaba, que la Constitución madre de la nuestra es la americana, y que ésta se había modificado muchas veces bajo la denominación de enmiendas. Así Sarmiento nos dice: «La paz inalterable del pueblo más movable del mundo estriba en esa seguridad y facilidad de corregir los defectos de sus constituciones fundamentales. En los Estados Unidos se lleva a tal grado esta práctica que en las planillas del censo se pregunta a cada ciudadano, individualmente, si cree necesario corregir la Constitución, procediéndose inmediatamente a convocar una convención si resulta una mayoría por la afirmativa.

«La Constitución de los Estados Unidos fué enmendada inmediatamente después de promulgada y continuó reformándose cada diez años. Nueva York se ha dado cuatro o cinco constituciones, y todos los estados cambian las suyas a medida que la experiencia demuestra los de-

fectos, imperfecciones u omisiones de sus primeros ensayos.»

Sr. Rojas (A.). — Hagamos, entonces, ese plebiscito.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvase no interrumpir al orador el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Colom. — En realidad, repito, no traemos nada nuevo a este debate, y es por eso...

Sr. Santander. — Nuevo es el precedente.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Colom. — Recuerdo que en un diálogo que mantuve con el señor diputado Frondizi el año pasado donde adelanté que la Constitución sería reformada, el señor diputado Frondizi me interrumpió diciéndome que «lo haríamos sólo para dar la posibilidad de reelegir al actual presidente». Yo le contesté desde esta banca que sí, pero como la reforma que propicia el despacho que consideramos abarcará varios artículos, no creo que hayan sido sorprendidos los señores diputados de la oposición.

Sr. Presidente (Cámpora). — Diríjase a la Presidencia el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — El 3 de mayo de este año solicité pronto despacho, y el 18 de junio convertí en una solicitud de pronto despacho un pedido de preferencia, fijando fecha cierta para el tratamiento de este asunto.

Por estas razones, entiendo que podemos tratar con toda la tranquilidad de espíritu, sobre tablas, los proyectos que están a consideración de la Honorable Cámara desde hace tiempo y estimo que debemos tratarlos porque estamos en mora. No sé si terminará en el día el debate de la reforma; no sé si habrá necesidad de realizar una, dos o tres sesiones más; pero es preciso que nos aboquemos a su estudio sin más demora, pues la reforma de la Constitución ha sido y es uno de los primeros objetivos del gobierno de la revolución.

Señor presidente: he sostenido que las revoluciones deben ser trascendentes y nuestra Constitución —como lo saben los señores diputados y toda la Cámara— necesita ser modificada. ¡Hay cosas que el pueblo las reclama, y el pueblo es la voz de Dios!

Durante la campaña electoral nosotros hemos hecho de la reforma una bandera; la oposición ha levantado otra bandera, la de oponerse a la reforma.

Sr. Santander. — Porque nosotros entendemos —fundamentalmente— que hay que comenzar por cumplir la Constitución en vigencia, que no se cumple, que se viola escandalosamente todos los días y en todos los aspectos de la vida nacional.

Sr. Colom. — Felizmente los hechos están probando que no se viola la Constitución. En

cambio, hemos visto cómo se la ha violado anteriormente. Los señores diputados de la oposición saben que estamos gobernando con el concurso de la voluntad libre de la República, porque nadie puede objetar los actos comiciales de febrero y de marzo, que refirman el respeto a la actual Constitución.

Al referirme a que los partidos opositores han hecho una bandera política de la defensa de la Constitución, recuerdo que anda por ahí una carta invitando a la formación de un nuevo frente popular para defender la Constitución.

¿Cómo se puede decir hoy que este asunto no se conoce, que se ignora, que es sorpresivo?

Sé bien que la Constitución está guardada en un cofre inviolable, pero es que esta revolución no podrá llenar sus fines substantivos, como, por ejemplo, el de poder llegar a que la tierra pertenezca a quien la trabaja, si no se reforma el concepto vetusto y arcaico del artículo 17 de nuestra Constitución.

Porque este asunto tiene estado público es que no podemos llamarnos a engaño. El debate de la Constitución no ha sido anunciado hoy sorpresivamente en esta Cámara, sino que tiene estado parlamentario desde hace muchísimos años. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Rumbo. — La elección del 7 de marzo fué un pronunciamiento...

Sr. Presidente (Cámpora). — No está en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital. Se va a poner a votación si se consideran inmediatamente los proyectos a que se refiere la convocatoria a sesión extraordinaria.

Sr. Mercader. — ¿Cuáles son?

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se va a dar cuenta.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Los proyectos presentados a la Honorable Cámara, sobre reformas a la Constitución, son los siguientes: del señor diputado Colom, entrado con fecha 3 de mayo del corriente año; del señor diputado Visca, entrado el 18 de junio; del señor diputado Cooke y otros, entrado el 23 de junio; del señor diputado Atala, entrado el 2 de julio; del señor diputado Villafañe, entrado el 4 de agosto del corriente año.

Sr. Mercader. — ¿Algunas de esas iniciativas tienen despacho de comisión?

Sr. Presidente (Cámpora). — Ya se ha informado, señor diputado, que no tienen despacho.

Sr. Mercader. — No tienen despacho. ¿Importan gastos? Pido que se lea el artículo 116, in fine, del reglamento.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a leer.

—Se lee:

Artículo 116. — Ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión, a no mediar resolución adoptada por las dos terceras partes de los votos emitidos, sea que se formule moción de sobre tablas o

de preferencia. Exceptuáanse de esta disposición los proyectos que importen gastos, que no podrán ser tratados, en ningún caso, sin despacho de comisión.

2
MOCION

Sr. Visca. — Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — De acuerdo con el reglamento, propongo que se autorice a la Presidencia a dar entrada al proyecto suscrito por varios diputados a que he hecho referencia, y que la Cámara pase a cuarto intermedio por quince minutos, a fin de que las comisiones correspondientes produzcan despacho, y la Cámara reanude su sesión para considerarlo.

Sr. Presidente (Cámpora). — En primer término, la Presidencia pondrá a votación si se tratan inmediatamente los proyectos que han sido presentados a la Honorable Cámara. Sirvanse marcar sus votos los señores diputados.

Sr. Mercader. — No puede ponerse eso a votación, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se trata de una sesión extraordinaria y la Cámara debe resolver si se ocupa en ella de los asuntos que han motivado la convocatoria. Esa votación es indispensable y previa, después la Cámara deberá resolver el procedimiento que la coloque dentro de la disposición reglamentaria que se ha leído a pedido del señor diputado por Buenos Aires.

—Se vota, y resulta afirmativa de 90 votos; votan 125 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración la moción del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Uranga. — Esa votación es violatoria del reglamento.

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado. Es indispensable que la Cámara ratifique por votación el propósito de considerar los asuntos a que se refiere el pedido de convocatoria extraordinaria.

Sr. Mercader. — No puede ponerse eso a votación. No puede considerarse el proyecto sobre tablas.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Buenos Aires: en el momento oportuno, la Cámara resolverá si es procedente, o no, la votación.

Sr. Mercader. — La Presidencia debe aplicar el reglamento.

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración la moción del señor diputado por Buenos Aires de que se dé entrada al proyecto suscrito por varios señores diputados, sobre reforma a la Constitución, y de que se pase a un breve cuarto intermedio a fin de que sea despachado por la comisión respectiva, juntamente con los proyectos existentes.

Sr. Rojas (A.). — ¿Por qué tiempo es el cuarto intermedio que se solicita?

Sr. Vítolo. — ¡Se pide un cuarto intermedio de quince minutos para proponer la reforma de la Constitución!

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — No tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Se va a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Uranga. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si la indicación del señor diputado por Entre Ríos está suficientemente apoyada.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Rojas (N.). — ¿A qué comisión corresponde pasar el proyecto?

Sr. Presidente (Cámpora). — Tengo la seguridad de que el señor diputado por la Capital sabe a cuál corresponde.

Sr. Rojas (N.). — Debe decirlo la Presidencia.

Sr. Presidente (Cámpora). — A la Comisión de Asuntos Constitucionales a la cual se giraron los anteriores, sin reclamo de ningún señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Corresponde a Presupuestos y Hacienda. Importa gastos.

Sr. Presidente (Cámpora). — No todos los asuntos que importan gastos se destinan a esa comisión. Se va a votar, nominalmente, la moción del señor diputado por Buenos Aires.

—Se practica la votación nominal (1).

Sr. Secretario (González). — Han votado 95 señores diputados por la afirmativa y 32 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, De-

(1) Véase en el apéndice el texto del proyecto presentado.

greef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Bonazzola, Candioti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vitolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 17 y 5.

—A la hora 18 y 20.

3

REFORMA DE LA CONSTITUCION

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará lectura al despacho producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así:

Honorable Cámara:

La Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría ha estudiado los proyectos de ley sobre reformas a la Constitución nacional presentados por los señores diputados Eduardo Colom, José Emilio Visca, John W. Cooke y otros, Luis Atala, José María Villafañe, Héctor J. Cámpora y otros, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del proyecto mencionado en último término.

Firman los señores diputados Albrieu, Bagnasco, Cooke, Lema y García. En disidencia total firman los señores diputados Uranga, López Serrot y Vitolo.

El texto del proyecto despachado es el siguiente:

Artículo 1º — Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución nacional, a los efectos de

suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación.

Art. 2º — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promulgada la presente.

Art. 3º — La Convención se instalará en la Capital Federal.

Art. 4º — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de convencionales igual al de diputados que envía al Congreso y en igual proporción.

Art. 5º — La elección de convencionales se hará con arreglo a las disposiciones electorales vigentes en el orden nacional y sobre la base del Padrón Nacional de Elecciones.

Art. 6º — Para ser convencional se requiere ser argentino nativo o por opción y reunir las calidades que exige el artículo 40 de la Constitución nacional.

Art. 7º — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de cualquiera de los poderes de la Nación.

Art. 8º — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 90 (noventa) días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato.

Art. 9º — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de legislador de la Nación y quien lo ejerza percibirá, en concepto de compensación de gastos, la suma de doce mil pesos moneda nacional (\$ 12.000), por todo el término de su actuación.

Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional, comuníquese al Poder Ejecutivo.

El despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales de que acaba de darse cuenta tiene por antecedentes los proyectos de ley que a continuación se enuncian:

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución nacional en los siguientes puntos:

Primero: Adicionar el capítulo único de la primera parte relacionada con las declaraciones, derechos y garantías con principios sociales que reconozcan los derechos del trabajador.

Segundo: Modificar el artículo 37, a fin de dar representación en la Cámara de Diputados a los territorios nacionales.

Cuarto: Modificar el artículo 77, en lo relativo a la forma de elección de senadores nacionales,

estableciéndose la elección directa por el pueblo.

Cuarto: Modificar el artículo 77, en lo relativo a la inelegibilidad del presidente y vicepresidente de la Nación.

Quinto: Modificar el capítulo 2º, de la sección segunda, del Poder Ejecutivo (artículos 81 a 85) en cuanto a la forma de elección de presidente y vicepresidente de la Nación, estableciéndose la elección directa por el pueblo.

Sexto: Adicionar el inciso 10, del artículo 86, consignándose que los empleados de la administración gozarán de sus empleos mientras dure su buena conducta e idoneidad, debiendo ajustarse su remoción a la ley.

Séptimo: Modificar el artículo 87, eliminándose el número y la denominación de los ministros secretarios, dejándose al Congreso Nacional la facultad de fijar dicho número y denominación.

Art. 2º — La convención a que se refiere el artículo 30 de la Constitución nacional será elegida el primer domingo de octubre del corriente año y se instalará treinta días después, debiendo funcionar en la Capital de la República.

Art. 3º — Las elecciones de convencionales se regirán por las disposiciones de las leyes nacionales de formación del padrón electoral y de elecciones nacionales.

Art. 4º — Para ser convencional se requieren las condiciones exigidas por la Constitución para ser diputado nacional.

Art. 5º — El número de convencionales será de 158, debiendo elegir la Capital Federal y las provincias tantos convencionales cada distrito como número de diputados elige al Congreso Nacional.

Art. 6º — La convención deberá terminar su cometido a los sesenta días después de su instalación.

Art. 7º — Los convencionales gozarán de inmunidades durante el tiempo de su mandato y sus servicios serán remunerados con una compensación total de siete mil pesos moneda nacional a cada convencional.

Art. 8º — La convención funcionará en las dependencias del Congreso Nacional y podrá utilizar el personal administrativo del mismo.

Art. 9º — Destinase la cantidad de \$ 100.000 m/n. para sufragar los gastos de la convención.

Art. 10. — Anticipase, por esta vez, la elección de senador nacional que debe realizarse en el distrito electoral de la Capital en el año próximo para el primer domingo de octubre del corriente año.

Art. 11. — Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo Colom.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase necesaria la reforma de la Constitución nacional en sus artículos 46 y 48, que deberán quedar redactados en la siguiente forma:

Artículo 46. — El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia y dos por la Capital Federal, elegidos directamente por el pueblo de las mismas a simple pluralidad de sufragios. Cada senador tendrá un voto.

Artículo 48. — Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará cada bienio.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José Emilio Visca.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución nacional, en lo relativo a las cláusulas siguientes:

1ª Artículos 4º y 67, incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, en lo relativo a la formación del Tesoro nacional y a las contribuciones que se faculta a imponer al Congreso Nacional;

2ª Artículos 12 y 67, incisos 1º y 9º, en cuanto no permiten conceder franquicias a un puerto con respecto a otro;

3ª Artículos 15, en materia de amparo y garantías a los derechos del trabajador;

4ª Artículo 18, en materia de recurso judicial de amparo y de garantía a la libertad individual;

5ª Artículos 20 y 21, en lo relativo a nacionalización de extranjeros y obligaciones militares de los ciudadanos por naturalización;

6ª Artículos 26 y 67, inciso 9º, en lo relativo a la libre navegación de los ríos interiores de la Nación;

7ª Artículos 37, 40 y 43, en lo relativo a la composición de la Cámara de Diputados;

8ª Artículos 37 y 39, en lo relativo a la vinculación del censo general con la representación parlamentaria;

9ª Artículo 45, en lo relativo a las causas de responsabilidad que se intenten contra los tribunales inferiores de la Nación;

10. Artículo 46, en cuanto a la forma de la elección de senadores.

11. Artículo 47, en cuanto a la renta de dos mil pesos fuertes como requisito para ser elegido senador;

12. Artículo 48, en lo relativo a la duración del mandato de los senadores y renovación del Senado;

13. Artículo 67, inciso 11º, en materia de atribuciones del Congreso para dictar leyes generales para toda la Nación, sobre trabajo y su remuneración;

14. Artículo 71, en lo relativo a la mayoría requerida para la insistencia en segunda revisión;

15. Artículos 75 y 86, inciso 21º, en lo relativo al permiso previo al presidente de la Nación para ausentarse de la Capital Federal;

16. Artículo 77, en lo relativo a la reelección del presidente y vicepresidente de la Nación;
17. Artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 87, inciso 18º en lo relativo a la forma de elección del presidente y vicepresidente de la Nación;
18. Artículos 87, en la parte que fija el número de ministros secretarios;
19. Artículo 100, en materia de jurisdicción y competencia de la Corte Suprema.

Art. 2º — A los fines de esta ley el Poder Ejecutivo convocará una Convención, que se reunirá en la ciudad de Buenos Aires. Se compondrá de 158 miembros elegidos por las provincias y la Capital Federal en la misma forma y proporción que los diputados nacionales.

Art. 3º — La elección deberá verificarse el 14 de noviembre de 1948, debiendo quedar instalada la Convención el 1º de enero de 1949.

Art. 4º — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los noventa días de su instalación. No podrá prorrogar su mandato ni abocarse a la consideración de otras reformas que aquellas cuya necesidad se declara en el artículo 1º de esta ley.

Art. 5º — Los convencionales deberán reunir las calidades exigidas por el artículo 40 de la Constitución nacional para los diputados nacionales. Mientras dure su mandato gozarán de las mismas dietas e inmunidades que estos últimos, así como la Convención de los fueros y privilegios del Congreso Nacional.

Art. 6º — Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, con imputación a la misma.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

John William Cooke. — Ricardo C. Guardo. — Oscar E. Albrieu. — Joaquín Díaz de Vivar. — Ernesto Palacio. — Antonio J. Benítez. — Manuel E. Lema. — Alejandro H. Leloir. — Alcides E. Montiel. — Eduardo I. Rumbo.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase necesaria la reforma de la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 67, inciso 11, que deberá ser redactado en la siguiente forma:

Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, Agrario y de Minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como sobre bancarrota, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Atala.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A los efectos del artículo 30 de la Constitución nacional declárase necesaria la reforma de los artículos 37, 41, 46 y 81, relacionados todos con la elección de legisladores nacionales y presidente y vicepresidente de la Nación, modificando el texto de cada uno de ellos en la siguiente forma:

Artículo 37 — La Cámara de Diputados de la Nación se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, Capital Federal y territorios nacionales, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado. El número de representantes será de uno por cada cuarenta y nueve mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Artículo 41. — Para hacer efectiva la elección de diputados, senadores y presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso dictará una ley general de elecciones, en que se establezca la seguridad de la identidad del elector, la universalidad, obligatoriedad y secreto del voto; la representación de las minorías en la elección de diputados nacionales, la publicación del escrutinio, la organización de tribunales electorales integrados por funcionarios judiciales que tendrán a su cargo la depuración de los padrones, el nombramiento de los miembros de las mesas receptoras de votos, la organización, funcionamiento y control de los comicios y escrutinios y la represión de los delitos electorales. Las provincias en sus respectivas jurisdicciones dictarán leyes electorales conforme a estos principios.

Artículo 46. — El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia y dos de la Capital, elegidos directamente por el pueblo de los respectivos distritos, a simple pluralidad de sufragios. Cada senador tendrá un voto.

Artículo 81. — El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo en un mismo acto y a simple pluralidad de sufragios, formando a este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un distrito único. La elección deberá efectuarse seis meses antes de terminar el período del presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los organismos que establezca la ley.

Art. 2º — Suprímense los artículos 82, 83, 84 y 85.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a rentas generales.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José María Villafañe.

VI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución nacional, a los efectos

de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación.

Art. 2º — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la República a fin de elegir la Convención que ha de reformar la Carta Fundamental, dentro de los 180 días de promulgada la presente.

Art. 3º — La Convención se instalará en la Capital Federal.

Art. 4º — Cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de convencionales igual al de diputados que envía al Congreso y en igual proporción.

Art. 5º — La elección de convencionales se hará con arreglo a las disposiciones electorales vigentes en el orden nacional y sobre la base del Padrón Nacional de Elecciones.

Art. 6º — Para ser convencional se requiere ser argentino nativo o por opción y reunir las calidades que exige el artículo 40 de la Constitución nacional.

Art. 7º — Es compatible el cargo de convencional con el de miembro de cualquiera de los poderes de la Nación.

Art. 8º — La Convención deberá terminar su cometido dentro de los 90 (noventa) días de su instalación y no podrá prorrogar su mandato.

Art. 9º — El convencional gozará de las prerrogativas e inmunidades de legislador de la Nación y quien lo ejerza percibirá, en concepto de compensación de gastos, la suma de doce mil pesos moneda nacional (\$ 12.000) por todo el término de su actuación.

Art. 10. — Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios que demande la ejecución de esta ley, tomando los fondos de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Registro Nacional, comuníquese al Poder Ejecutivo.

Héctor J. Cámpora. — Angel J. Miel Asquía. — José Emilio Visca. — Luis Atala. — Roberto Dri. — Raúl Bustos Fierro. — Luis Armando Roche. — Pedro Tilli.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — He solicitado la palabra para plantear una cuestión previa.

En el seno de la comisión hemos requerido en representación de la Unión Cívica Radical informes que hace algún tiempo fueron solicitados al Poder Ejecutivo y que todavía no han llegado.

Entendemos que éste es un asunto de tanta importancia que el Congreso necesita conocer la opinión del Poder Ejecutivo; y por eso solicito que la Cámara resuelva, con carácter previo, requerir la presencia del señor ministro del Interior, para ver si podemos obtener verbalmente los informes que hasta la fecha, a pesar de haber sido pedidos por nota, no hemos podido lograr.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la indicación del señor diputado por la Capital, de invitar al señor ministro del Interior a concurrir a la sesión.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se hará la invitación correspondiente.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Señor presidente: el proyecto que considera esta Honorable Cámara contiene como disposición fundamental la que declara necesaria la reforma de la Constitución nacional. Enunciado este concepto, surge de inmediato una cuestión previa, digna de ser aclarada antes de entrar en materia: es la que se refiere al procedimiento que debe seguirse en el tratamiento de este proyecto, a la naturaleza del proyecto y a las exigencias que su aprobación requiere para su legal y definitiva sanción.

De la sola enunciación de estos aspectos de la cuestión se desprende la necesidad de su perentoria dilucidación, ya que la discrepancia en este aspecto formal traería aparejada una duda sobre la posterior sanción, en grado tal que la misma se vería revestida de un carácter de precariedad incompatible con la extraordinaria trascendencia del asunto en debate.

Con ese concepto, debo declarar paladinamente que considero que la Constitución nacional, al expresar en su artículo 30 que la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, ha querido establecer que esa necesidad debe ser declarada por ambas Cámaras reunidas en Asamblea.

Ante su sola enunciación, este principio puede parecer una concepción audaz, reñida con todos los precedentes existentes en los anales parlamentarios; pero a poco que se ahonde en el análisis puede observarse la claridad meridiana de la disposición de nuestra Carta Fundamental. Ella se refiere expresamente al Congreso y no a las Cámaras, como se expresa en otra parte de nuestra Constitución, verbigracia en el capítulo III, al referirse a las atribuciones de ambas Cámaras.

En rigor de verdad, es menester tener presente que los constituyentes del 53 empleaban la palabra Congreso para expresar dos actividades bien definidas y diferenciadas de la función de este poder. Así, cuando en el capítulo IV se establecen las atribuciones del Congreso, al igual que en otras disposiciones, como por ejemplo en la del artículo 75, se refiere a la función específica de dictar la ley. En cambio, emplea también la palabra Congreso con otro significado específico, con referencia al ejercicio de una función distinta, en cuyo ejercicio no se

sanciona la ley. Uno de esos casos es, por ejemplo, cuando se reúne en asamblea para escuchar el mensaje del presidente de la República, según lo dispone el inciso 11 del artículo 86; otro, cuando se reúne para elegir presidente de la República, en el caso de lo dispuesto en el artículo 83. Lo mismo sucede, en mi modesto entender, cuando al referirse en el artículo 30 habla de una situación especial, refiriéndose al Congreso y no a ambas Cámaras.

En efecto, la declaración del Congreso no puede ser una ley, ya que esta sanción que va a prestar la Honorable Cámara se refiere meramente a un proyecto de declaración. Tanto es así, que él carece del requisito esencial de la norma jurídica, desde que le falta el carácter de la obligatoriedad. No concibo la existencia de una ley sin este elemento esencial.

Además, en los anales de nuestras instituciones parlamentarias no ha habido, tampoco, ninguna disposición de este carácter que haya sido objeto del veto por parte del Poder Ejecutivo. Es que posiblemente no haya ningún fundamento jurídico serio para sostener con éxito la posibilidad de que eso ocurra. A este respecto, el tratadista González Calderón dice que el Congreso cuando declara la necesidad de reformar la Constitución ejerce una función particular que no tiene estrictamente el carácter de una ley. Este concepto no deja de tener cierta importancia y si se atribuye a la declaración del Congreso el carácter de una ley, el Poder Ejecutivo, como poder colegislador, según nuestro sistema constitucional, podría ejercer la facultad del veto. Esta última doctrina, señor presidente, se halla abonada por todos los tratadistas que han estudiado nuestra Carta Fundamental y de ella surge, precisamente, el argumento más sólido en apoyo de la tesis que sostengo, desde que no siendo una ley no es admisible que para su tratamiento los Constituyentes hayan presupuesto el mismo procedimiento fijado para la sanción de las demás leyes.

Sin embargo, debo reconocer que ningún antecedente parlamentario apunala esta teoría; por el contrario, en las dos ocasiones en que anteriormente el Parlamento argentino declaró la necesidad de la reforma, lo hizo siguiendo el procedimiento que ha comenzado a imponerle esta Honorable Cámara al iniciar este debate. No he encontrado tampoco en los autores que consulté adherentes entusiastas a esta teoría, con excepción de uno que la comparte en un libro aparecido recientemente en el país; me refiero al doctor Carlos Sánchez Viamonte, que acaba de publicar su obra *Derecho constitucional*. En ese tratado podrá hallarse perfectamente documentada, y en un planteo limpio, esta doctrina, por cierto en forma mucho más brillante que la que yo pueda exponer en esta modesta disertación.

Si analizamos los antecedentes constitucionales se advierte la evolución que ha sufrido a través de los sucesivos estatutos el procedimiento para la reforma constitucional, evolución que, a la luz de la sana hermenéutica, confirma la tesis que vengo sosteniendo.

En el proyecto de constitución de carácter federal para las Provincias Unidas de América del Sud, de 1813, el artículo 62 disponía que «el Congreso, todas las veces que las dos terceras partes de ambas salas lo juzguen necesario, propondrá reformas a esta Constitución, o por solicitud de las legislaturas de dos terceras partes de las diversas provincias, convocará a una convención para proponer reformas, las cuales en uno y en otro caso serán válidas para todos los intentos y fines como parte de esta Constitución, si se ratificase por los pueblos de las tres cuartas partes de las diversas provincias o por convención de las tres cuartas partes de ellos, según pueda ser propuesto por el Congreso, el uno o el otro modo de ratificación».

En cambio, nada dice respecto al procedimiento y sistema de la reforma; el Estatuto Provisional para la dirección y administración del Estado dado por la Junta de Observación el 5 de mayo de 1815; ni tampoco el texto del Estatuto reformado del 9 de marzo de 1816; ni el Estatuto Provisional dado por la Junta de Observación el 22 de noviembre de 1816; ni el Reglamento Provisorio dictado por el Congreso de Tucumán para las Provincias Unidas de Sud América el 3 de diciembre de 1817.

Es recién, señor presidente, en el proyecto de constitución, redactado por la Comisión Especial del Congreso de Tucumán de 1818, cuando aparecen en la sección sexta las disposiciones relativas a la revisión y reforma de la Constitución, que constituyen el antecedente inmediato de las disposiciones idénticas, insertas en la Constitución posterior del año 1819. Esta Constitución disponía que: «en cualquiera de ambas Cámaras del Congreso puede formularse la moción de la reforma. Esta debe referirse a uno o más artículos de la Constitución y la necesidad de la reforma debe declararse con dos tercios de cada sala. El Poder Ejecutivo puede aceptar u observar la reforma aprobada por la Cámara, pero la insistencia requiere las tres cuartas partes de cada sala. El mismo procedimiento adopta la Constitución de 1826».

Si hacemos un breve examen de estos antecedentes, ellos nos muestran las diferencias entre el artículo 62 de la Constitución del año 1813 y los correlativos de las constituciones de 1819 y 1826. El primero tiene palpable similitud con el artículo 59 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Tanto es así, que la Constitución de 1813, siguiendo su modelo norteamericano, crea un doble procedimiento o sistema: la proposición de reforma por decisión

de las dos terceras partes de ambas cámaras o por solicitud de las legislaturas de las dos terceras partes de los Estados provinciales para la convocatoria a una convención, cuyas resoluciones estén sujetas a una ratificación. Pero de este sistema se apartan las constituciones de 1819 y 1826, que eliminan el procedimiento de las legislaturas provinciales y la ratificación por las mismas de las reformas, así como la convención, para adoptar otro sistema; el de la ley, con intervención del Poder Ejecutivo y con requisitos minuciosos de mayoría de dos tercios o tres cuartos, según se trate de sanción o de insistencia.

Si vamos a la Constitución de 1853, vemos que el artículo 30 dispone que: «La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasados diez años desde el día en que la juran los pueblos. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto.» Este sistema se completa con la disposición contenida en el artículo 51 de esa Constitución, que establece que sólo el Senado inicia la reforma de la misma.

Como se advierte, los constituyentes de 1853 adoptan un régimen ecléctico, que resulta enteramente distinto de los antecedentes examinados: adoptan la declaración de la necesidad de la reforma con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Ya no se habla de cada Cámara, ni se atribuye intervención al Poder Ejecutivo, ya que al parecer omite referirse a la comunicación, a la observación y a la insistencia. Contrariamente a las constituciones de 1819 y 1826, no es el Congreso el que realiza la reforma, sino una convención, y además no exige que la declaración de necesidad de la reforma esté circunscrita a uno o varios artículos, dejando un amplio margen entre la reforma total y la reforma de cualquiera de sus partes, en lo que se acerca al modelo norteamericano; pero los constituyentes introducen en el artículo 51 una disposición enteramente original: «Sólo el Senado inicia las reformas de la Constitución.» Esta cláusula aparece en contradicción con la disposición del artículo 30, ya que no se refiere a las cámaras sino al Congreso cuando requiere los dos tercios de los miembros. Y es por demás sugestiva la reforma introducida en el año 1860, pues al suprimirse el artículo 51, se eliminó precisamente esa contradicción, quedando establecido que es el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el que decide la necesidad de la reforma; no tiene intervención el Poder Ejecutivo en el tratamiento, ni puede ejercer la facultad del veto; no pertenece la iniciativa a ninguna de las cámaras en forma exclusiva.

A través de la evolución de esta institución es claro, a mi juicio, que la Constitución ha considerado, al emplear la palabra «Congreso», que ambas cámaras deben reunirse en asamblea, estableciendo así un procedimiento particular y completamente distinto del que determina para la sanción de las leyes.

¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si la Cámara de origen, que en este caso podría ser esta Cámara, sancionase la declaración de necesidad de determinada reforma y la Cámara revisora acepta en principio la sanción, pero modificando, agregando o suprimiendo parcialmente la misma? Los dos tercios requeridos para la sanción excluyen el régimen normal de la sanción de las leyes, puesto que los artículos 71 y 72 recurren a los dos tercios sólo para la insistencia, y, en cambio, el artículo 30 los requiere en todas las etapas de la decisión.

Por otra parte, el Congreso en asamblea constituye un cuerpo único, en cuyo seno desaparecen las diferencias de intereses o de puntos de vista, que sin duda existen como ramas del Poder Legislativo. Si suponemos que existe un interés superior en modificar las prerrogativas particulares de una u otra de las Cámaras, o de sus respectivos miembros, es evidente que librada la sanción al procedimiento normal de las leyes ordinarias, se deja librada a la voluntad de la Cámara interesada en evitar la reforma, la solución reclamada.

Si la Constitución, en los artículos 82, 84 y 86 inciso 11, ha creado la asamblea como institución, al disponer que determinados actos deberán realizarse en presencia de ambas Cámaras, presididas por el presidente del Senado, ¿por qué no aceptar que para la reforma constitucional será el Congreso reunido en asamblea el que con dos tercios de votos de sus miembros declarará la necesidad de la reforma? Es evidente que en el caso reglado por el artículo 30 no se trata de una ley propiamente dicha, desde que no interviene el Poder Ejecutivo, que no tiene el derecho de veto. El artículo 30 no habla de los dos tercios de ambas cámaras, sino de los miembros del Congreso, señalando así marcada diferencia con el léxico usado en los artículos 71 y 72. Y, por otra parte, la decisión es meramente declarativa, siendo la convención la que debe decidir si se realiza o no la reforma, o sea, teniendo en forma exclusiva la facultad de transformar la sanción declarativa del Congreso en norma dispositiva.

Bien, señor presidente: dejo en estos términos expresada mi opinión personal en este aspecto del problema que considera la Honorable Cámara, reconociendo que no es la interpretación que han seguido los precedentes parlamentarios y que adopta en su texto el proyecto, sin que deba juzgarse que el asunto afecta la legitimidad de la solución que se adopte, pues el Parlamento es soberano en la elección de

uno u otro procedimiento. Pero he cumplido con lo que considero un deber: el de expresar mi personal opinión en este aspecto de la cuestión.

Para terminar con esta fase procesal voy a referirme a la exigencia de los dos tercios de votos.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro del Interior, don Angel Gabriel Borlenghi.

Sobre este aspecto hay tres teorías: la primera sostiene que la Constitución exige para declarar la necesidad de la reforma dos tercios de los votos de los miembros del Cuerpo; es decir, que estando compuesta la Cámara de 158 diputados, los dos tercios lo constituyen 106. Es de advertir que la representación peronista cuenta con 108 representantes en este recinto.

La segunda teoría es la que sostiene que la Constitución se refiere a las dos terceras partes de los miembros existentes, vale decir, que esta Honorable Cámara, que se compone actualmente de 152 diputados, los dos tercios lo compondrían 101 representantes. Esta tesis es sostenida por el doctor González Calderón, quien la abona con estas palabras: «Volviendo al procedimiento prescrito por el artículo 30, debe tenerse en cuenta que las dos terceras partes de votos requeridos por esta cláusula tienen que referirse al total de los miembros existentes en cada Cámara en el momento en que la reforma se decide. Esta conclusión surge espontáneamente de los mismos términos empleados en el texto. Así, si en la Cámara de Diputados, de 158 miembros, hubiera 8 vacantes, las dos terceras partes serían 100; si en el Senado, de 30 miembros, hubiera tres vacantes, los dos tercios serían 18. Exigiendo estas mayorías extraordinarias, la Constitución se ha propuesto —como lo he dicho antes—, imposibilitar las iniciativas reformistas que no sean realmente apoyadas por la voluntad nacional.»

La tercera teoría es la que afirma que la Constitución sólo exige las dos terceras partes de los miembros presentes en cada Cámara.

Yo creo, señor presidente, que ésta es la buena tesis. En efecto, la Cámara forma quórum, según el artículo 56 de la Constitución, con la mayoría absoluta de sus miembros y es desde ese momento que pasa a funcionar, y nada puede impedir que sus sanciones tengan la fuerza que surge del ejercicio de sus facultades.

Si aceptáramos que al existir los dos tercios se refiere a los miembros del cuerpo se alteraría, sin causa que lo justifique, la disposición constitucional del artículo 56, ya que no se concibe que en la sesión en que la Cámara trate un proyecto de reforma constitucional, se re-

quieran dos tercios del cuerpo para dar sanción a ese proyecto y sólo la mitad más uno para sesionar. Habría en ello una incongruencia mayúscula que es impropia de la sabiduría de los Constituyentes del 53.

Por otra parte, como bien dice Hamilton, «puede con propiedad mencionarse aquí lo que se ha indicado con el número que se ha considerado competente para los asuntos legislativos. Se ha dicho que debió haberse exigido más de la mayoría de votos para el quórum y, en casos particulares, si no más de la mayoría de un quórum para su decisiones. No puede negarse que habrían resultado algunas ventajas de una precaución semejante; ella habría sido un escudo más para algunos intereses particulares y, por lo general, otro obstáculo a las medidas impremeditadas y parciales. Pero estas consideraciones son superadas por los inconvenientes que hay del lado contrario. En todos los casos en que la justicia, o el bien general, pudieran exigir la sanción de leyes nuevas o la prosecución de medidas activas, el principio fundamental del gobierno libre resultaría trastornado. Ya no sería la mayoría la que diera la regla. El poder sería transferido a la minoría».

Es decir que con una interpretación errónea una minoría infama podría detener la voluntad de una gran mayoría, lo que es contrario al concepto puro de la democracia.

De lo que vengo exponiendo puede deducirse que la tesis que sustento, de que el artículo 30 requiere únicamente las dos terceras partes de los miembros presentes, se basa en serios fundamentos jurídicos, despoblados de todo apasionamiento político y de todo interés partidario, desde que nuestro sector está en condiciones, por su número, de llenar los requisitos de todas las teorías existentes en esta materia.

Ahora, señor presidente, entrando al fondo del asunto, debo decir que el proyecto de ley que estoy informando y que se halla sometido a la consideración de la Honorable Cámara, posee una característica poco común: no determina ni enumera los artículos o cláusulas de la Constitución vigente, cuya reforma se declara conveniente.

Entre los numerosos proyectos presentados a este cuerpo o al Honorable Senado, desde 1860 hasta hoy, sólo reconoce un precedente; pero, desde luego, no es una pretensión de vana originalidad la que rigiera u orientara la redacción de su texto. Más sólidos y trascendentes motivos he de expresar en respaldo de esa característica, al propugnar el voto aprobatorio que lo sancione.

Los antecedentes reformistas que nos ofrece la historia constitucional del país entre las dos fechas precitadas son un fiel trasunto de los problemas institucionales que han agitado, cronoló-

gicamente, a sus masas o a sus oligarquías dirigidas. Son siempre específicos, limitados en su extensión y casi siempre también limitados en el tiempo. Son necesidades concretas de la Nación, o de los grupos sociales más influyentes en conflicto con las trabas que les crea una o más cláusulas determinadas de la Constitución nacional. No pocas veces el proyecto de reformas sólo ha traducido un rencor de desplazados o una veleidad publicitaria. Casi nunca el proyecto, noble y elevado, o bajo y deleznable en sus fines, ha encontrado el respaldo de opinión y de fuerzas sociales suficientes para poner en marcha el mecanismo del artículo 30 de la Constitución nacional.

En 1866 un problema financiero reviste la gravedad imprescindible para provocar la reforma. Las condiciones económicas, políticas e internacionales que condicionaron el economismo ultraliberal de los Constituyentes de 1853, no son las mismas que agarrotan las finanzas del Estado en 1866. Las cláusulas librecambistas que, en prenda de progreso, prometía la liberación impositiva del comercio de exportación, a partir de aquel año encontró creadas necesidades que le hacían gravosa al marcarse el umbral de su vigencia.

Dos cortes precisos sobre dos cláusulas que, ya derogadas, subsisten «en bastardilla» en el texto constitucional vigente, bastaron para dar solución a un claro y sencillo problema de recaudaciones.

En 1898, signo de los tiempos, el problema y el conflicto se enmarcan en lo políticoinstitucional. El traje es todavía nuevo, pero el niño ha crecido y le ajustan las costuras: se reforma la base electoral de los representantes que componían la Cámara de Diputados, y se deja el necesario dobladillo previsor de futuros estirones: en lo sucesivo, el Congreso fijará la representación después de cada censo.

Paralela y simultáneamente se eleva a ocho el número de los ministros secretarios. En cambio, privó el concepto federalista a ultranza del 53, quedando intacto el principio de igualdad aduanera, victorioso aun sobre la realidad angustiosa del desierto y la penuria patagónica.

No ha sido arbitrario el jalón cronológico fijado al comienzo de esta parte de mi discurso: «de 1860 hasta hoy». De 1853 a 1860 es otra historia. En ese lapso no es de problema aislado o de sector el conflicto. Está en juego nada menos que la unidad nacional.

Las Provincias Unidas del Río de la Plata habían conocido ya todas las vicisitudes de la anarquía, los dolores y desgarramientos de la invasión y del desmembramiento, la angustia y el dolor de la guerra civil y del odio entre hermanos. Pero no habían tenido aún dos capitales.

De la unión se podía desertar, eso era ya sabido. Pero la secesión, después de todo aque-

llo ya vivido, era inconcebible. La Constitución del 53, «ley suprema de la Nación», no podía ni pudo privar sobre el convenio de noviembre de 1859: en 1860, la Constitución nacional es reformada por una convención ad hoc que acepta las reformas propuestas por una convención provincial. No decía eso la cláusula suprema respectiva y ni la historia ni la posteridad han abierto —con justicia— proceso recriminatorio.

El proyecto de ley que estamos considerando no es repugnante a la Constitución nacional. Se aparta sí de los precedentes inmediatos. El artículo 30 de la Constitución nacional no instituye expresamente la obligatoriedad de la determinación del artículo sujeto a reforma, y debe, por lo tanto, ser interpretado: lo fué en un sentido en 1866 y 1898; lo es hoy en otro.

Como los hombres del 60, nuestra interpretación responde a una realidad nacional: esta reforma no es un producto de laboratorio, de seminario. No, señor presidente; ella nace en la calle, caldeada en el fervor de masas que la reivindican como suya, que piden ver sus derechos reconocidos y garantizados en el presente y asegurados en el porvenir.

Un gran movimiento revolucionario llena el escenario nacional. Entroncado y nutrido por nuestra historia, aleccionado en la experiencia foránea, enfrenta con franqueza y sin desmayo los problemas del mundo, el país, de la clase trabajadora. Innova y replantea. Rompe y edifica. Mira al pasado, para otear el porvenir. Nuestra Constitución que fué y es instrumento del progreso —«para nosotros, para nuestra posteridad»— no puede convertirse en implacable freno de una insurgencia renovadora nacional que quiere mantener intacto el ordenamiento jurídico y social. No podrá promoverse el bienestar general si imprescindibles medidas de gobierno destinadas a actuar frente a problemas nuevos se ven constreñidas dentro del texto generoso pero anticuado de un texto legal añejo.

El señor presidente de la República al inaugurar el actual período parlamentario expresó: «La evolución es para los pueblos un agente de rejuvenecimiento indispensable y permanente, y si bien la estabilidad constitucional debe imponer un espíritu de prudencia ante toda reforma, es menester también, en favor de la perfectibilidad constitucional, no aferrarse o excederse en el mantenimiento de prescripciones arcaicas o inconducentes, por haber sido sobrepasadas por el tiempo y por los hechos, al solo efecto de mantener un respeto y una prudencia que pueden ser perjudiciales para el pueblo y para la República.»

Estanislao S. Zeballos, al proyectar la revisión y reforma de la Constitución en 1881 —el año siguiente al de la honda convulsión nacional que provocara la cuestión Capital—, sentaba conceptos claros y precisos en esta materia: «Es una regla universal, señor presidente —de-

cia—, en armonía con los progresos políticos, que después de las grandes evoluciones por que pasan las sociedades, y después de la realización de grandes acontecimientos como los que han tenido lugar en nuestro país durante los últimos años, las constituciones escritas en épocas cuyas aspiraciones y necesidades eran diversas, sufran modificaciones adaptándose a las exigencias de las nuevas situaciones.»

La clase media y la burguesía élite directora del 53 reflejaron en el texto legal su concepción de la realidad nacional e incluyeron en él la declaración de sus derechos y el reconocimiento de sus reivindicaciones. No fueron más allá y no puede tachárselas de egoísmo porque no fueron profetas. El mismo imperativo de consecuencia política hace que nuestra revolución, arraigada y respaldada en la masa de los trabajadores, de los desheredados y de los postergados, asegure y reconozca sus derechos, los garantice y afiance y los proteja y ampare contra cualquier posibilidad, presente o futura de desconocimiento o preterición. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Cuando ya no hay quien discuta la existencia autónoma de un derecho obrero, separado de las demás divisiones del derecho privado, ¿puede ello ser ignorado en el texto constitucional, que tan amplia, generosa y eficientemente estatuye sobre derechos civiles?

Mientras el país planifica su grandeza en base al interés y a la conveniencia colectiva, ¿puede continuar prevaleciendo el concepto de la propiedad romana frente al concepto de su función social?

La economía y las finanzas de un país moderno, o que quiere serlo, en un mundo cuyas distancias han sido abreviadas, ¿pueden ser las mismas que contemplara el régimen rentístico alberdiano?

Cláusulas limitativas de mandatos, magistraturas y responsabilidades dictadas por la reacción contra la dictadura, la perpetuación en el poder o la anarquía, ¿pueden ser obcecadamente mantenidas cuando son reconocidos y puestos en vigencia todos los derechos inherentes a la soberanía popular y garantizada efectivamente su libre expresión?

Cuando vagos conceptos de bien común son substituídos por claros preceptos de utilidad social dentro de una solidaridad nacional, que implica derechos y obligaciones, cargas y beneficios, ¿puede mantenerse una postulación basada en un individualismo romántico, anacrónico y suicida?

A este respecto quiero recordar, citando unas palabras de Ortega y Gasset, la necesidad indispensable de distinguir dos situaciones completamente distintas: la situación social y política que atravesaba el país en el siglo pasado y la que atraviesa actualmente. Son dos períodos

bien diferenciados en nuestra historia: el ambiente en que se dió la Constitución del 53 y el ambiente en que se va a operar la reforma de 1948.

Ortega y Gasset sostenía que el temperamento racionalista imperante en las instituciones del pasado siglo pretende que el cuerpo social se amolde, cueste lo que cueste, a la cuadrícula de conceptos que la razón pura ha forjado. El valor de la ley aparece preexistente a su congruencia con la vida. La ley es buena por sí misma, como pura idea.

El intento racionalista habría menester, para su éxito, la perfección de los hombres sometidos a la ley concebida por el intelecto dentro del campo de la idea y sin congruencia con la realidad de la vida, caracterizada por la natural imperfección humana. Pero la política es realización y resulta contradictorio y en desarmonía con ella esa forma de utopismo cultural, que revela su interno formalismo, su pobreza, su sequedad, en comparación con el raudal jugoso y espléndido de la vida.

A la política de ideas sucede una política de cosas y de hombres. Se acaba por descubrir que no es la vida para la idea, sino la idea, la institución, la norma, para la vida, o como dice el Evangelio, «el sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado».

En el choque de ideas y realidades vividas, acaba la política por perder toda presión, desaparece del primer plano de las preocupaciones humanas y se convierte en un menester, como tantos otros que son ineludibles, pero que no atraen el entusiasmo, ni se sobrecargan de un patetismo solemne y casi religioso.

Ese es el resultado final de la falta de congruencia entre los regímenes jurídicos impuestos por el racionalismo y la realidad que en definitiva forma la conciencia social.

Nuestra Constitución, del año 1853, trasunta fielmente las directivas racionalistas. Venerada con sagrado respeto por las generaciones que se sucedieron en el lapso corrido hasta el presente, ha merecido sin duda esa veneración como homenaje a la patriótica inspiración de los Constituyentes.

Durante mucho tiempo parecía un sacrilegio mencionar la reforma constitucional, pero entretanto la vida del pueblo argentino no lograba amoldarse a las concepciones teóricamente aceptables, pero que en numerosos casos eran utilizadas como instrumentos del privilegio para mantener un estado de cosas dentro del cual podría manejar en su provecho los resortes institucionales, que sin duda habrían sido benéficos en manos cristianas y generosas. Pero el resultado final ha defraudado la esperanza de lograr por su medio la felicidad del pueblo y no tengo duda de que si los Constituyentes hubieran sobrevivido a los resultados de su obra, habrían de reconocer la necesidad de buscar

una mejor adecuación entre la organización institucional y la vida de la Nación, posibilitando la armonía indispensable a la felicidad.

Esta Cámara, señor presidente, no ha de marcar con un tilde los artículos cuya reforma declare conveniente. No puede hacerlo. Declara conveniente la reforma de todas aquellas cláusulas o disposiciones que estén en pugna con la defensa de los derechos del pueblo o con la prosperidad y bienestar de la Nación. Ello sólo puede resultar de un conjunto ambiental —si se me permite esta palabra poco jurídica— y no de un texto expreso. La caducidad reside en la doctrina señera y no en el estatuto resultante. El anacronismo y la lesión están en el numen inspirador y no en la letra. La obra reparadora debe ser de conjunto, de forja y no de buril.

Nosotros, aquí, daremos el presupuesto legal necesario para esa tarea. Lo hacemos bajo la saludable presión de un pueblo cuyas convicciones son las nuestras y cuyos afanes son nuestra consigna. El dará directamente su mandato a quienes han de realizar la obra.

La convención no solamente estará en condiciones de consultar y satisfacer las necesidades del pueblo de la República en lo económico, lo político, lo social y lo institucional en el momento de la reforma constitucional, sino que también ha de incorporar a sus disposiciones las conquistas que la ciencia política ha enseñado en esta etapa trascendental de la vida de los pueblos en el universo entero.

Vendrán convencionales elegidos con el noble propósito de dotar al país de las instituciones mejores y más avanzadas, sin intenciones preconcebidas o prejuicios partidistas que los desvíen de su objeto y sin que se mezclen en su labor discusiones ajenas a los fines más elevados y trascendentales que determinen su designación, convirtiendo los anhelos del presente en realidades del futuro.

He pretendido, señor presidente, expresar en una apretada síntesis algunos de los conceptos que me sugiere el proyecto sometido a esta Honorable Cámara. Lo he hecho con fe, con profunda fe. Desde mis años de estudiante de derecho fué agitándose en mi espíritu la necesidad de la reforma constitucional, no por cierto como una irrespetuosidad a los prohombres que con su acción inteligente y patriótica hicieron posible la estructuración de nuestra nacionalidad, sino como una aspiración de renovación, a fin de que nuestra querida Carta Magna siguiera el incesante ritmo progresista emprendido por la Nación, cuyas riquezas materiales y espirituales hacen felices a los nuestros y ayudan a sobrellevar la desgracia de todos los hermanos del mundo.

Así debe ser la Argentina, grande para sí y generosa para los demás. Así la concibieron nuestros próceres. Así la concibe nuestro pue-

blo. Así la quiere nuestro presidente el general Perón, su gran intérprete. Para que ello siga siendo posible, aprobemos este proyecto y roguemos a la divinidad que ilumine a los ilustres convencionales, a fin de que nuestra Constitución nacional sea el estatuto legal de un pueblo rico en posibilidades, capaz de concretarlas a poco que las circunstancias lo permitan. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vítolo. — Señor presidente: esta Cámara integra el Parlamento argentino; en él está representada la soberanía popular; en la otra Cámara están representados los Estados que integran la Nación Argentina.

Una Cámara de Diputados no es sólo la expresión de la soberanía; es también un cuerpo deliberativo, que debe llenar una función en representación del pueblo: deliberar en nombre de él.

El país ha de ver con asombro, con estupor, cómo se ha realizado el proceso de la reforma constitucional. Pareciera que hubiese un propósito de desprestigiar la vida parlamentaria. Hace un instante, cuando el señor diputado por Buenos Aires hizo la moción inconcebible de pasar a un cuarto intermedio de quince minutos para que la comisión despachara el proyecto de reforma de la Constitución, no pude menos que llevar con pena mi pensamiento hacia aquellos países de Europa que sufrieron el proceso de la destrucción del prestigio de sus parlamentos, al que Mussolini llamaba «el cadáver putrefacto de la libertad».

Nosotros comprendemos con responsabilidad histórica el papel que debemos jugar en esta hora. La mayoría nos ha colocado en la situación de enfrentar un debate, improvisándolo. De todos modos no hacemos ninguna concesión desde estas bancas. Nosotros estamos defendiendo principios, permanentemente, a través de toda una vida recta, limpia, de modo que tenemos la gimnasia continua de esta lucha en resguardo de las libertades.

Se va a realizar una reforma constitucional invocando un poder revolucionario, emanado del movimiento del 4 de junio. Lo ha dicho el señor diputado miembro de la mayoría de la comisión y yo pregunto: ¿Qué es y qué significa la revolución del 4 de junio? ¿Cuál fué su ideario, su programa, su doctrina? ¿Dónde se proclamó, dónde estuvo estructurado el día que los representantes de ese movimiento ocuparon la Casa Rosada en la ciudad capital de la República?

Por el contrario, allí no se habló de programas de reformas, sino sólo del respeto y acatamiento a la Constitución nacional. Esta revolución tiene su ideario formado a tumbos, improvisándolo todos los días. Así vamos cono-

ciendo la doctrina revolucionaria. Esta Cámara de Diputados, a través de numerosas sanciones, ha ido produciendo actos revolucionarios. Cada día, un acto defacto: cuando incorporó a un diputado que no tenía las condiciones constitucionales; cuando le otorgó al Poder Ejecutivo facultades judiciales que no le podía otorgar; cuando aceptó la vigencia de decretos con carácter de leyes; cuando excluyó a un diputado de la oposición.

Esa es la doctrina que va demarcando el partido político que representa la revolución del 4 de junio. Se va produciendo una revolución algo así como por mensualidades.

El 4 de junio o el 17 de octubre —como los señores diputados prefieran— pudieron realizar su verdadera revolución. Pudieron establecer entonces la transformación de las instituciones, porque, en síntesis, una revolución es un cambio de tipo de gobierno, una modificación de la organización política y social de una nación. Las revoluciones tienen el derecho de crear un nuevo estado jurídico. Sin embargo, no lo hicieron y proclamaron el acatamiento a la Constitución nacional, para realizar el día de mañana la reforma por los procedimientos legales.

Hoy esta Cámara, improvisadamente, va a tratar la reforma constitucional. Yo he puesto toda mi atención en el informe del señor miembro de la mayoría de la comisión para saber en qué consiste la reforma y cuál es la doctrina que inspira la estructuración del programa revolucionario.

Una constitución es, antes que nada, una limitación al poder, un conjunto de restricciones a los que tienen la fuerza y el mando. En cambio, estamos viviendo el proceso inverso de concentración de poderes en el Poder Ejecutivo. Por eso, nosotros que no consideramos intangible la Constitución, que no tenemos el fetichismo de la Constitución, que no vivimos alejados de la realidad social, sino en contacto con ella; nosotros, que sabemos que hay una reforma necesaria, tenemos que oponernos dando una señal de peligro frente a un estado de cosas que significa la absorción de todos los poderes por parte del Ejecutivo.

Todo poder tiende a una concentración mayor de sus facultades. El clima que vive la Nación —lo hemos dicho y lo repetimos con autoridad— no es el más propicio para una reforma constitucional. Ella necesita la elaboración a través de un proceso de libre discusión, y el panorama que ofrece la República no es el que posibilita mejor esa deliberación del pueblo a través de todos sus sectores y organismos representativos. Lo hemos repetido aquí todos los días: no existe la libertad de prensa; la libertad de expresión por la radio; la libertad de reunión; la libertad de tribuna parlamentaria.

El reglamento que se aplica en esta Cámara, en verdad de doctrina, es un instrumento de defensa de las minorías con respecto a las mayorías prepotentes; no es un instrumento en manos de la mayoría para acallar la voz de la oposición. La tribuna parlamentaria también está restringida con las mociones de cierre del debate, con las mociones de que el orador se encuentra apartado de la cuestión, con la manera como hoy y como desde hace más de dos años que está deliberando este Parlamento llamado de la revolución.

Frente a esta situación de discrecionalismo que señalamos, frente a esta situación de falta de publicidad de los actos públicos y de acallamiento de la voz de la oposición, decimos: no es el instante más propicio para la realización de una obra fundamental cual es la de la reforma constitucional.

De todos modos, la mayoría ha resuelto realizarla y nosotros tenemos el derecho, como el resto del país, de preguntar qué clase de reforma se intenta, qué es lo que se procura cambiar en las disposiciones constitucionales. Debemos preguntarnos si después de un 4 de junio, de un 17 de octubre, no tendrá también el país un 18 brumario. Nosotros debemos preguntarnos también si el régimen federal de gobierno se ha de mantener íntegro y robustecido, si se han de mantener los principios del derecho de patronato que la Nación ejerce, si se ha de mantener la integridad de todas las facultades provinciales, si se ha de mantener la organización legal que sintetiza un régimen representativo, republicano, democrático federal de gobierno.

Hasta ahora nada se ha dicho. No es exacto, señor presidente, que exista una conciencia pública favorable a la reforma constitucional. No ha llegado aquí y no se ha expresado en ninguna parte un movimiento de opinión popular acerca de reformas fundamentales. Sólo en dos aspectos se ha concretado esa opinión popular, en algún sentido: el uno, es la incorporación al texto constitucional de los Derechos del Trabajador que sintetizara el presidente de la República en su conocido decálogo...

Sr. Velloso Colombes. — Eso es mucho.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Vítolo. — ...y que tampoco es original; también figuran casi a la letra en el fuero del trabajo de Francisco Franco, como figuraban también en la Carta del Lavoro, de Mussolini. El otro, la reelección presidencial.

Nosotros creemos que hay una realidad social que debe ser contemplada en la Constitución de la Nación.

No hacemos de la reforma un problema técnico, sino el trasunto de una necesidad, de una aspiración y de un ideal colectivos. Lo com-

prendemos perfectamente; no somos retardatarios; tenemos el sentido de la evolución y del progreso. Estamos sentados aquí, no para defender principios caducos, sino para empujar hacia adelante el país, a través de una reforma y de una transformación que concreten un nuevo estado de realidad social; pero esa expresión tendrá que ser la expresión fiel de un clima de absoluta legalidad, de ejercicio de todos los derechos y de vigencia de todas las garantías constitucionales.

El señor miembro informante de la mayoría no ha concretado en ningún aspecto esas reformas, y se ha referido a cuestiones procesales, que ya habían contemplado los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales pertenecientes a nuestro partido.

Yo pregunto a esta mayoría, que hoy ejerce un acto de prepotencia trayendo justamente el problema de la reforma constitucional como un desafío, como una afirmación de fuerza, si esto es algo así como una reacción frente a la actitud de la bancada radical. Nosotros, señor presidente, aceptamos el desafío en el terreno parlamentario; pero también lo acepta el país, para poder deslindar perfectamente las responsabilidades. Hemos ido a la Comisión de Asuntos Constitucionales; hemos planteado allí, en primer término, la necesidad de conocer los antecedentes que existen en el Parlamento argentino; hemos encarecido más de una vez la necesidad de hacer un gran debate alrededor de la reforma constitucional, para que el pueblo argentino, por medio de sus más destacados órganos: la universidad, la prensa, la masa trabajadora, a través de sus sindicatos, los elementos de la economía mediante sus organizaciones, los partidos políticos, etcétera, hicieran llegar sus sugerencias para elaborar una reforma que no fuera artificial, ni al servicio de un partido, sino un nuevo derecho en defensa y al servicio de la Nación.

Sr. Velloso Colombres. — En eso estamos.

Sr. Vítolo. — Nosotros no queremos una reforma peronista, ni radical; aspiramos a una reforma argentina de la Constitución, realizada al cabo de un limpio debate, señalándonos unos y otros nuestros ideales, nuestros propósitos, nuestros anhelos, en un examen libre de prevenciones y mirándonos como diputados de la Nación y como representantes del pueblo argentino. Pero la reforma que se trae hoy a la Cámara, donde vibra aún el eco de las últimas sesiones, se realiza justamente —¡qué garantía, señor presidente!— en momentos en que se está dando al país, con la exclusión inconstitucional e injustificada de un diputado, la prueba acabada de que hay una mayoría que no se detiene ante nada.

Frente a esto señalamos el peligro de la reforma constitucional los diputados radicales, que

luchamos permanentemente por estos principios tal vez bajo el signo de la adversidad. Hay hombres en esta bancada, señor presidente, que llevan muchos años de lucha continua en la oposición. Yo mismo, que no soy ya un hombre joven, pues estoy llegando a los cuarenta años, llevó más de veinte combatiendo desde la oposición, y no es que lo hagamos por temperamento, sino por fidelidad a nuestras ideas y por devoción a nuestras profundas convicciones democráticas. ¡Muy bien! Con nuestra obra de ayer, de hoy y de siempre estamos también elaborando nuestro mensaje para el año 2006, o para que cualquiera otra generación sepa de nuestra lucha y que el principio de libertad no estuvo indefenso en la tierra de los argentinos; que la llama de la argentinidad la mantenemos siempre viva, y que la bandera de las mejores tradiciones argentinas no será jamás arriada.

Señor presidente: hemos vuelto a esta bancada para señalar una actitud, para decir al pueblo argentino que se va a reformar la Constitución en momentos en que la Constitución actual no tiene plena vigencia. Estamos en la lucha por los principios, defendiendo la libertad, que es nuestra bandera, y que la hemos de agitar en todo el ámbito de la argentinidad, con brazo firme y con espíritu esforzado, sin cobardía y, sobre todo, con la certeza de que servimos a una causa noble. Esta mayoría peronista de hoy, que así sanciona una reforma constitucional, realiza con este proceder un acto ilegítimo, como lo marqué en una sesión pasada, un nuevo golpe de Estado, cual significa la sanción de la reforma constitucional tras una deliberación breve e improvisada, y sobre todo, sin decir qué es lo que piensa o quiere reformar. Un partido político responsable, que se cree revolucionario, tiene la obligación absoluta de expresar en qué consiste su reforma, cuál es su doctrina y qué fines con ella se persigue. No creemos que sea posible una reforma siniestra, a escondidas, ni admitimos que vengan aquí los representantes del pueblo a reunirse en una convención constituyente sin que antes se haya dicho qué es lo que se piensa o lo que debe reformarse.

Sr. Velloso Colombres. — El artículo 1º...

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvase no interrumpir al orador el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Vítolo. — Vivimos una época de expresiones generalizadas, de palabras huecas y grandilocuentes que nada significan.

Sr. Rojas (A.). — ¡Epoca de palabrería!

Sr. Vítolo. — Al señalar nuestra oposición a la reforma constitucional lo hacemos en el sentido con que nos hemos expresado.

Nuestra convención nacional, organismo máximo del partido, con justeza, con precisión, ha

fijado la posición del radicalismo. Algún día habrá que introducir la reforma necesaria para dar un paso hacia adelante. Lo que tenemos y combatimos es la posibilidad de una reforma regresiva, es decir, de un paso hacia atrás. Siempre nosotros miramos hacia adelante.

Otros representantes de mi sector han de concretar la opinión y profundizar el análisis de la exposición del señor miembro informante de la mayoría. Pero ahora concluyo mi exposición señalando que la reforma constitucional no la anhela el pueblo argentino; no es imperativo de la hora en los aspectos a que se ha referido el señor diputado, porque el imperativo del momento es el retorno a la legalidad. Lo que el pueblo argentino quiere no es una reforma constitucional, sino que los diarios puedan emitir sus ideas sin censura previa, que las radios estén al alcance de todos los ciudadanos, y que las tribunas parlamentaria y pública puedan ser usadas sin restricciones por los hombres de mi partido y de todos los partidos políticos.

El problema de hoy es de seguridad del derecho, de legalidad, como lo decimos con insistencia en este recinto los diputados radicales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Colom. — Reglamentariamente corresponde usar de la palabra a los autores del proyecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 106 del reglamento.

Hago la cuestión, y pido que se lea el artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ya ha sido concedida la palabra al señor diputado por Corrientes.

Sr. Colom. — Aclaro que, de acuerdo al orden establecido en el artículo 106 del reglamento, corresponde prioridad a los autores del proyecto.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia concederá la palabra al señor diputado por la Capital cuando haya concluido su exposición el señor diputado por Corrientes.

Sr. Colom. — He de ser muy breve.

Sr. Balbin. — Se podría hacer la excepción.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia no puede hacer excepción, señor diputado.

Sr. Balbin. — Obsérvese que los permisos que se solicitan perjudican a quienes tenemos pedida la palabra. O se aplica la teoría del señor diputado Colom...

Sr. Presidente (Cámpora). — Aclaro al señor diputado por Buenos Aires que si el señor diputado por Corrientes accede al pedido del señor diputado por la Capital, ocupará después su orden un diputado del sector de la minoría.

Sr. Balbin. — Muy bien, entonces.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia es ecuaníme, señor diputado.

Sr. Díaz de Vivar. — Solicito de la Presidencia me haga respetar en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia sugiere al señor diputado por la Capital que solicite le ceda el turno el orador del mismo bloque al que le haya correspondido en orden: ocupará su lugar, y en esa forma se respetará el reglamento.

Sr. Colom. — Entonces, hablaré después.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Señor presidente: me siento abrumado por la responsabilidad de intervenir en un debate de este linaje y considero, concordando con el señor diputado por Entre Ríos, doctor Uranga, que esta jornada ha de ser histórica. Asimismo, comparto el juicio del señor diputado Visca en el sentido de que no somos nosotros, hombres, actores de este episodio, constreñidos por la dureza fundamental del combate, quienes estemos en mejores condiciones para ensayar, con plena objetividad, un juicio de valor sobre este hecho. Es la historia la que habrá de decidir en definitiva quién acertó el camino que ha de conducir al pueblo argentino hacia una jornada de prosperidad.

La revolución nacional peronista, señor presidente, tiene plena conciencia de su destino, y por eso mismo conoce perfectamente la parábola que quiere cumplir. Es osada sólo en apariencia, en cuanto está forzada a ello por la magnitud de su sino y siente victoriosamente, como gustaba a Fichte, que se afirmara que la historia debe ser concebida como hazaña y la política como un proceso de hechos que exhibe el destino de una comunidad.

Es por ello, señores, que si nosotros aceptamos con Hegel que en la idea jurídica del Estado se despierta el espíritu del mundo que está adormecido en la naturaleza; si decimos con el filósofo teutón que el Estado es la actuación de la idea ética, entonces podemos afirmar con evidencia que lo que importa, lo que está llamado a tener vigencia, es la preocupación por traducir la realidad viva, el nítido retorno a normas jurídicas, que al mismo tiempo que recoge las vibraciones auténticas del momento da plena unidad a la vida nacional.

Tal es, señor presidente, el tremendo problema, henchido de interrogantes y lleno de responsabilidades, que hoy nos toca afrontar.

La Constitución nacional, nuestra Constitución nacional, es ya casi centenaria, y por ello y porque en la historia aparece como un reducto inabordable de un mundo que se va, tiene el sentido de un símbolo y la categoría egregia de un mito que los turiferarios desplazados de ese mundo al que antes se hiciera alusión, se niegan tercamente —yo casi diría heroicamente— a que pueda desaparecer.

Comprendo, señor presidente, toda la angustia y el enojo que una típica mentalidad liberal tiene que sentir ante esta decisión nuestra, de modificar la fisonomía jurídica de ese cuerpo ya vetusto de normas de nuestro derecho público; y me explico esa angustia y justifico ese enojo porque para esa visión en anquilosis del mundo contemporáneo, las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales pasan inadvertidas o, cuando más, tienen el sentido efímero de la anécdota. Y me explico también, señor presidente, esa angustia y ese enojo, porque el destino de toda innovación fundamental fué ser estimada siempre como un gesto agresivo para el orden constituido, como un intento injustificado de mutilar la vida jurídica o, quizá, como un deseo desaprensivo e irresponsable de sofisticar la propia fisonomía jurídica de un país.

La historia está llena de ejemplos semejantes; pero yo, señor presidente, me niego a hacer debate sobre tema tan manido. Sólo quiero afirmar que no nos guía en la emergencia una pasión rencorosa contra el orden constituido, sea él económico o jurídico. Ciertamente, una cosa podemos afirmar en puridad, y es que la revolución nacional peronista no está constituida por resentidos sociales; antes al contrario, porque somos detentadores del poder, ratificado en su ejecutoria por dos gloriosas jornadas electorarias que demuestran la voluntad obstinada del pueblo argentino de hacer de nuestra revolución un alto instrumento político de dignificación de la vida argentina; por todo ello, digo, nos aprestamos jocundamente, casi con inocencia espiritual, a afrontar la brava empresa de la total reestructuración del Estado argentino, que estimamos indispensable, para que nuestro pueblo continúe su trayectoria ejemplar.

Pero no lo hacemos, señor presidente, con actitudes airadas, sino con transparencia espiritual, pues sentimos el estímulo del jefe de nuestra revolución que, como el Zoroastro nietzscheano, puede ufanarse de tener pura la mirada y de que sus labios no encubran todavía el gesto de ningún hastío. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Decisión valerosa, decisión máscula en verdad la tarea que nos proponemos cumplir: la reforma de nuestra Constitución. Yo lamento que por falta de tiempo y por la precipitación con que he debido construir los elementos de mi exposición, no haya podido hacer una enunciación científica de toda su problemática; que no haya podido extenderme en consideraciones sobre el concepto de Constitución como problema abstracto, que no haya podido historiar con amplitud suficiente la evolución histórica de esta institución que aparece como una exigencia aneja a la naturaleza humana aun en su más primitiva expresión tribal; que no haya podido,

en suma, anotar ni siquiera desde el esquicio, el hecho más expresivo del derecho público del pasado siglo, referido al proceso constitucional del Estado de derecho liberal. Propósito tan pretencioso —yo lo comprendo— acaso hubiera excedido mis modestas posibilidades intelectuales. Pero al menos, el planteo panorámico del problema hubiera llevado en sí la impronta inconfundible de una actitud inquieta, responsable y anhelosa.

Como lo reconoce Karl Schmitt, existen cuatro actitudes intelectuales posibles frente al problema jurídico de la Constitución. Puede, en efecto, ser tomado éste como un concepto absoluto: la Constitución como un todo unitario; puede ser tomado como un concepto relativo: la Constitución como una pluralidad de leyes particulares; puede ser tomado desde el punto de vista del derecho positivo, y entonces tenemos la Constitución como decisión de conjunto sobre modo y forma de la unidad política. Podemos, por último, avocarnos al estudio del concepto ideal de Constitución, en pleno terreno ya de la abstracción intelectual.

Por lo demás, puede decirse que una Constitución surge de manera diversa. Puede nacer por decisión unilateral: un monarca de derecho divino que concede graciosamente una carta, puede nacer como consecuencia de un convenio pluripersonal; puede nacer como pacto social, no en el sentido del pacto primigenio de Rousseau, sino en el sentido de organizar la convivencia de los distintos estamentos; puede nacer bajo el prestigio mítico del postulado que traduce la sentencia latina *pacta sunt servanda*. Puede nacer también de un poder constituyente gestado por la voluntad política del ente colectivo llamado Nación.

Pero todo esto constituye problemas cuyo tratamiento yo me propongo eludir después de haberlos apenas insinuado. Aspiro, sí, señor presidente, a afrontar la dilucidación de un solo aspecto de esta cuestión, mostrando cómo una Constitución es el trasunto de la conciencia jurídica del momento de su gestación y que, por ello, responde a exigencias imponderables de la formación económica y social del pueblo en cuyo seno se gesta.

Quiero señalar, pues, que una carta constitucional se propone garantizar siempre una determinada ordenación económica, política y social; y cuando los factores determinantes de esa gestación cambian substantivamente, la carta política deja de tener vigencia, deja de ser un reflejo vivo, para transformarse en un tronco añoso y sin savia que puede todavía mantenerse erecto, pero sólo por inercia, sólo cuando el pueblo que la gestara carece de resortes históricos y de pulso político nacional.

Quiero, pues, mostrar —y a eso fundamentalmente voy a reducir mi faena— que nuestra Constitución, hija del siglo liberal, nació res-

pondiendo a las urgencias de la hora; pero si se estima ese siglo liberal definitivamente periclitado, nuestra Carta Magna hallaríase también afectada, desde ese punto de vista, de total caducidad.

Intentaré en un breve y exiguo paralelismo con la famosa Carta de Filadelfia, mostrar cómo estas hermanas gemelas se vieron forzadas a tener un destino dispar, ya que la carta americana nació bajo las urgencias de un estado políticamente organizado como una plutocracia y por ello y en puridad, resulta hasta natural su supervivencia. Porque así como en sus comienzos iniciales la Constitución americana se organizó exclusivamente, como dije, para garantizar un orden plutocrático, hoy, ante los epígonos de ese liberalismo económico, sirve también magníficamente como instrumento de innegable valor a la actual economía *holding* americana.

En cambio, señor presidente, la revolución nacional peronista repudia el supercapitalismo...

Sr. Dellepiane. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Presidente (Cámpora). — No le permite.

Sr. del Carril. — ¿Cómo lo sabe?

Sr. Presidente (Cámpora). — Porque el señor diputado sigue su exposición.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Díaz de Vivar. — En cambio, la revolución nacional peronista repudia el supercapitalismo, fautor de funestos crímenes en política internacional y aspira a estructurar un estado social que vele por el destino del hombre, que exalte la personalidad humana, que diga todo lo que vale el hombre por el solo hecho de serlo y, como muchas veces lo dije, por el solo hecho de ser una criatura bendita de Dios.

Afirmo, señor presidente, que a la transformación de nuestro *ethos* nacional debe corresponder la transformación del *ethos* de nuestra Constitución; es decir, que a nuestra cosmovisión actual debe responder una estructuración de nuestro derecho público, que sea su consecuencia.

Si estimamos que los factores sociales, políticos y económicos que gestaron el Estado de derecho liberal han hecho crisis y que hoy asistimos con mirada entristecida a sus epígonos crueles, debemos admitir también que una concepción política basada en una economía liberal, exclusivamente liberal, tiene que ser innegablemente modificada, cuando un complejo de factores humanos nos impone ese viraje esencial.

Sr. del Carril. — En este momento...

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado por Buenos Aires.

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Rojas (N.). — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Díaz de Vivar. — Sí, señor diputado.

Sr. del Carril. — Queremos decir...

—Suena la campana.

Sr. Rojas (N.). — El señor diputado me concede la interrupción.

Sr. del Carril. — No me explico por qué tiene privilegio el señor diputado Rojas.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Díaz de Vivar. — Le voy a conceder también al señor diputado.

Sr. Dellepiane. — Y a mí también.

Sr. Rabanal. — Hasta ahora no hemos podido escuchar la defensa del federalismo argentino.

Sr. Gil Flood. — Va a tener que consultar al señor presidente, porque va a conceder muchas interrupciones.

Sr. Rojas (N.). — No dispongo del micrófono.

Evidentemente el sector de la mayoría recurre a una de las maniobras más pueriles, como la de interceptar el micrófono. No hay duda que alguien lo intercepta.

Sr. Díaz de Vivar. — Yo no tengo el micrófono.

Sr. Rojas (N.). — No me refiero al señor diputado; pero lo ha de tener alguno de sus inocentes compañeros. Por otra parte, no es la primera vez que se hace. Desde hace rato, el señor diputado por Corrientes me tiene como nunca desconcertado, y como no concedía interrupciones a mis compañeros, no se la pedí. Le agradezco que me la haya concedido.

Sr. Díaz de Vivar. — No había escuchado el pedido del señor diputado. Voy a conceder la interrupción a todos los señores diputados.

Sr. Rojas (N.). — Rogaría al señor diputado por Corrientes que en este jeroglífico de la doctrina peronista nos aclare cómo concilia él, que es el orador de este momento, las discordancias de este movimiento que se dice revolucionario y que tiene por jefe a Zoroastro Perón y que se habría de conciliar con el espíritu colonial de Rosas...

Sr. Visca. — Eso no está en discusión.

Sr. Rojas (N.). — ... que el señor diputado defiende.

Sr. Rumbo. — No ha tocado ese aspecto el señor diputado por Corrientes.

Sr. Visca. — No está en discusión.

Sr. Rumbo. — No ha hecho ninguna referencia...

Sr. Rojas (N.). — No la ha hecho hoy.

Sr. Rojas (A.). — Pero está latente en todo lo que ha dicho.

Sr. Rojas (N.). — El rosismo, señor presidente...

Sr. Visca. — No está en discusión.

Sr. Rojas (N.). — ... está conviviendo con el peronismo.

Sr. Visca. — ¡Es intolerable lo que dice el señor diputado!

Sr. Rumbo. — El señor diputado no puede hacer críticas sobre la base de lo que no ha dicho el señor diputado por Corrientes.

Sr. Rojas (N.). — Habrá algunos peronistas que no son rosistas, pero en la calle viven a Rosas y viven a Perón y jamás el presidente de la República los ha desautorizado.

Sr. Tilli. — Son incoherencias las que dice el señor diputado.

Sr. Rumbo. — No puede hacerse ese tipo de interrupciones.

Sr. Rojas (N.). — ¿Cómo concilia el señor diputado el criterio renovador que dice tener con su admiración por Franco, que tiraniza a España?

Sr. Rumbo. — Es una interrupción que no tiene sentido.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia no va a conceder interrupciones, porque desordenan el debate.

Sr. del Carril. — Es una pequeña interrupción.

Sr. Dellepiane. — Yo quiero preguntar...

—Suenan la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Afirmando, luego de esta pequeña tormenta que no he buscado, pero que la excuso, según es notorio, que todo el proceso constitucional del siglo XIX nace bajo la advocación del enciclopedismo que compartía la cosmovisión de Juan Jacobo. Pero admito también que aunque haya diferencias entre la estructuración del derecho político americano, la estructuración del derecho político francés y la estructuración del derecho público argentino, esas diferencias son simplemente anecdóticas, porque esas formaciones jurídicas pueden explicarse perfectamente a través de un mismo *ethos* esencial.

La potestad jurídica que convierte en soberana a una constitución puede ser explicada, por ejemplo, como proveniente de la voluntad del príncipe, como la Restauración en Francia lo

insinuaba; o puede serlo como expresión de la voluntad popular, como lo deseaba la Revolución jacobina del 89; o puede ser también explicada por medio de un artificio conceptual, como lo quería la Revolución Francesa del 48, que declaraba que la potestad soberana radicaba no en el pueblo ni en el príncipe, sino en esa abstracción jurídica que se llama Constitución, asumiendo así una actitud elusiva frente al problema de decidir la cuestión política de si era soberano el príncipe o el pueblo, lo que hizo exclamar a Schmitt que ésa era una respuesta típica de los liberales del Estado burgués de derecho, para los cuales tanto la monarquía como la democracia debían limitarse en interés de la libertad burguesa y de la propiedad privada. Ya antes, Tocqueville, el dogmático de la Constitución francesa de 1830, había señalado la inmutabilidad de la Constitución y que de ella derivaban las atribuciones del pueblo, del rey y del Parlamento, expresando que fuera de la Constitución, todos éstos —rey, pueblo y Parlamento— no son nada.

Pero estos distintos sentidos en los que pretende fundamentarse la plenitud jurídica de una constitución, resultan en verdad anecdóticos frente al propósito substancial de crear el Estado que se ha denominado Estado de derecho liberal, que respondía a la necesidad de defender un tipo de libertad, la libertad burguesa, y un tipo de propiedad, la propiedad privada, con sus clásicos atributos del derecho romano.

Para asegurar el desarrollo de este tipo de propiedad determinado y para resguardar ese tipo de libertad burguesa, todas las constituciones nacidas en el siglo XIX estructuraron el típico Estado liberal, prescindente, policíaco y en perpetuo estado de expectativa. Esa cosmovisión liberal tenía naturalmente una posición en economía, que se expresó primero, según es muy conocido, a través de los fisiócratas y, después, a través de la escuela de Mánchester.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ha vencido el plazo de que dispone para su exposición el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Hablo en nombre del bloque.

Sr. Presidente (Cámpora). — Puede continuar entonces el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — Esta cosmovisión liberal tenía también una posición estética, pero por sobre todas las cosas había elevado a la categoría de símbolo la lucha por la riqueza material.

Este problema que acaso se debe al triunfo en el mundo del poder de la secta protestante sobre la religión católica ha sido indagado luminosamente por un gran filósofo y economista, Max Weber, a cuyas conclusiones también prestó plena adhesión intelectual Sombart y el historiador y pensador católico inglés Belloc.

Este triunfo, digo, ha asegurado el predominio de la ética protestante en la formación del espíritu capitalista, que es el fenómeno más expresivo del siglo XIX. Queda, pues, formulada una primera aseveración, en el sentido que todo el proceso constitucional del siglo aludido tendía a crear una ordenación típicamente liberal con un Estado defensor de una clase de propiedad privada con sus ya clásicas facultades de gozar, de percibir los frutos y aun de abusar del derecho de que se era titular.

Así, la Constitución americana fué ante todo el más sagaz, el más prodigioso esfuerzo intelectual de la minoría plutocrática de las ex colonias inglesas, para organizar en su favor reglas de derecho que se inspiraron en apariencia en los grandes mitos políticos del siglo liberal.

Por eso decía con verdad Carlos Pereira que la sociedad americana tenía en 1787 material y factores para dos movimientos revolucionarios: uno, el plutocrático, y otro, el democrático. Una de esas dos revoluciones, prosigue Pereira, se desarrolló con felicidad y sus resultados aparecen incorporados en la Constitución de los Estados Unidos. La otra revolución, la democrática, fué dominada primero en el terreno militar y después en el terreno político al adoptarse las resoluciones de la Convención de Filadelfia.

Sr. Santander. — Si me permite el señor diputado, está argumentando con un autor comunista.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Díaz de Vivar. — Con mucho gusto le concederé la interrupción al señor diputado si se me descuenta el tiempo.

Sr. Presidente (Cámpora). — No permite la interrupción la Presidencia.

Continúa con la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — El Congreso de Filadelfia, ostensiblemente al menos, no fué convocado en un comienzo con facultades de poder constituyente. Surgió, simplemente, de una asamblea comercial reunida en Annápolis para proyectar una reforma a los artículos de la Confederación. Pero Alejandro Hamilton, que fué realmente el forjador de la Nación americana, casi diría el demiurgo de la misma, al menos en sus momentos iniciales, transformó una asamblea que tenía un cometido menguado en su comienzo, en un sanedrín próspero e ilustre, autor de la más maravillosa creación intelectual en materia de derecho público. Hamilton, de quien dijo Talleyrand que era el más maduro hombre de Estado de su tiempo, murió prematuramente en un funesto lance en manos del impío Aarón Burr.

Los asambleístas de Filadelfia eran realistas que no perseguían idealidades quiméricas; esos forjadores del futuro imperio no se deleitaban con tropos o vanas metáforas altisonantes.

Sr. Rojas (A.). — Pero creían en la libertad.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado.

Sr. Díaz de Vivar. — De los cincuenta y cinco delegados que asistieron a la Junta de Filadelfia, cincuenta y cuatro eran ciudadanos prominentes y de gran fortuna personal, acaso con la conocida excepción de William Pierce, que era pobre. Esa asamblea no fué precedida de una campaña previa; no fué consultada siquiera la opinión pública sobre el verdadero cometido a cumplir. Sigilosamente fueron elegidos por las legislaturas locales los representantes en la asamblea, con el propósito modesto, confesado por lo menos, de revisar solamente algunos artículos de la Confederación. No se hizo debate, ni el pueblo, en el sentido moderno de la expresión, tuvo participación alguna en el proceso; por el contrario, pareceme transparentado el propósito de excusar su intervención en ese asunto, como lo prueba el enorme esfuerzo que hicieron después para obtener la ratificación de la carta.

Sr. Rojas (A.). — «El Federalista» se hizo para divulgar la Constitución.

Sr. Díaz de Vivar. — Ya voy a contestar al señor diputado.

Pero lo curioso es que muchos de los Estados rechazaron la Constitución, es decir, rechazaron el cambio de *status* jurídico de la Confederación, por esos nuevos artículos pergeñados un poco en la sombra, aunque muy luminosamente para el propósito perseguido por esa minoría tan altamente calificada para esa tarea. Digo que algunos Estados rechazaron la Constitución porque esa actitud asumieron California del Norte y Rhode Island; y en lo que respecta a Carolina del Sur, Pensylvania, New Hampshire, Massachusetts, Nueva York y Virginia, la opinión estaba tan dividida que no pudo obtenerse de ellos ninguna decisión. Cabe hacer notar que estos últimos seis Estados representaban entonces más de las seis octavas partes de la población.

No es mi propósito, señor presidente, vituperar los medios de que se valió este conjunto de brillantes estadistas para imponer su construcción política, que resultó la verdadera espina dorsal de la futura gran nación del Norte. Sólo quiero señalar que en esa tarea constitucional el pueblo fué el perpetuo ausente y, además, que la única preocupación de esa minoría americana, con mentalidad, en mi opinión, liberal pero antidemocrática, fué la de consolidar la ordenación económica de la clase que ellos representaban de manera tan expresiva, y por eso comparto el juicio de Pereira cuan-

do afirma que el clásico libro de Hámilton, Madison y Jay, escrito con fines propagandísticos, para la campaña de ratificación de la Constitución, tiene como rasgo peculiar el ser una interpretación económica de los hechos de orden político y, además, que a pesar de que fué escrito para una campaña circunstancial, dirimida con pasión, llegó a ser una cumbre en el pensamiento político universal. Dos cosas salen fundamentalmente aseguradas de ese sagaz instrumento político: la propiedad privada, aun en sus consecuencias extremas, y un Estado limitado en sus posibilidades jurídicas, pero constituido especialmente para formar el gran edificio en provecho de las clases propietarias.

La monarquía personalista de Jorge III, coetáneo de los asambleístas de Filadelfia, fué el modelo que sirvió para crear la institución del presidente constitucional, creándose un ejecutivo todopoderoso frente a un Poder Legislativo que debía conformarse con un segundo plano dentro de la efectividad del poder. Con poderes cuyos límites no fueron en un principio muy bien definidos, como lo prueba el lato alcance que le dió Lincoln a sus poderes de guerra cuando el conflicto sudista, muy claramente expuesto en el divulgado libro de Chambrun sobre el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Un Poder Judicial constructor de un orden jurídico, en consonancia con las ideas de la época.

Claro está que como el sistema creado estaba regido por la Carta, la Corte Suprema, que era la vestal en cuyas manos impolutas se confiaba la intangibilidad del texto constitucional, vino a ser un poder de compensación muy grande, aunque para mí no está claro si esta finalidad fué premeditada en toda su dimensión.

Lo cierto es que cuando el presidente Roosevelt, en la primera época —me refiero al Franklin Roosevelt de la primera presidencia—, asfixiado por la economía *holding* que padecía el país, quiso socializar un tanto la política de su patria, se encontró con que el gran obstáculo que debía vencer para la aplicación de su revolucionario *New Deal* se hallaba precisamente en la Suprema Corte de Justicia, debiendo intervenirla y modificarla ilegalmente en un supremo esfuerzo por superar, dentro del orden constituido, el resultado tremendo de la economía supercapitalista, hija putativa de la economía liberal.

La dramática lucha emprendida por Roosevelt contra Hughes fué la incidencia culminante del proceso que se halla relatado en el ya clásico libro de Henry Wallace, *Las Nuevas Fronteras*. A pesar de todo, la Constitución americana sigue siendo un monumento liberal, pero no democrático, que pervive con efectividad en ese país, porque, como dije antes, es un ins-

trumento político apto para amparar las grandes formaciones económicas supercapitalistas.

Pasando al tema de nuestra Constitución diré que la etiología de la Constitución argentina ha sido, en mi opinión, brillantemente comprendida en un pequeño y jugoso ensayo del doctor Arturo E. Sampay, titulado *La Filosofía del Iluminismo y la Constitución Argentina de 1853*. Dice Sampay, que también es autor de otro libro, en el que se halla ínsito el problema de nuestra consideración, titulado *La Crisis del Estado Burgués-Liberal*, que la filosofía del iluminismo infunde el espíritu a la Constitución del 53, interferido en sus principios por las fuerzas morales relapsas en el tradicionalismo hispánico, que en ese momento encontraron un clima favorable en el sentimentalismo teísta del romanticismo.

Desde el punto de vista intelectual el Estado de nuestra Constitución del 53 adopta una posición agnóstica, consagra expresamente la neutralidad cultural del Estado y hasta cuando algunos representantes de la tradicionalidad argentina, como Díaz Colodrero, por ejemplo, o el mismo padre Lavaysse, ensayaron muy tímidamente quebrantar esa neutralidad imponiendo una confesión determinada al primer magistrado de la Nación, Gorostiaga sólo la aceptaba como un compromiso, y ofrecía una explicación altamente escandalosa para la ortodoxia, aunque completamente consecuente con su posición mental.

Todo el espíritu de la Constitución es un canto al progresismo liberal, es una exaltada manifestación de fe en las posibilidades de la razón, que acaso en los dramáticos días contemporáneos se haya averiguado ya cuánto tuvo esa actitud de jactancia vanidosa.

Pero el ilustre congresal Gorostiaga, como sus corifeos no menos ilustres Gutiérrez y Seguí, eran fieles y lógicos, lo que habla muy elocuentemente de la alta calidad intelectual de que estaban dotados; eran fieles y lógicos con el presupuesto fundamental de la cosmovisión del liberalismo progresista que, borracho de júbilo y orgullo, creía que hasta la propia existencia de Dios podía ser objeto de una indagación intelectual recusando el medio sobrenatural de la revelación.

Por lo demás, el capítulo de la declaración de los derechos y garantías de la Constitución es altamente expresivo de lo que dejo dicho.

A esta altura de mi exposición apenas necesito decir cuán respetable me parece el esfuerzo de los prohombres del 53 por dotar de un estatuto jurídico al país argentino. Reverencio ese esfuerzo como una magnífica expresión de nuestra voluntad nacional, y al hacer el análisis no lo hago in ánima vili, sino tratando de explicar y aun de justificar, el esfuerzo ejemplar de esos nuestros ilustres mayores; pero a

la vez que formulo este juicio, que deseo sea laudatorio, a mi turno deseo expresar que un cuerpo de normas políticas, concebido para garantizar una ordenación jurídica del pasado siglo, no puede tener vigencia, en mi opinión en la actualidad.

Una Constitución que imposibilita la intervención estatal en los problemas de la economía, como factor equilibrante y regulador, como factor compensador de los excesos individualistas; una Constitución que protege la propiedad privada con todos sus perfiles clásicos, es inepta —como apuntó con toda propiedad el señor diputado Bagnasco— para erigir a esa propiedad en función social. Una Constitución que sólo es expresión de un sector de la población no puede satisfacer las ansias de una profunda renovación; una Constitución, en suma, que cumplió brillantemente su destino al servir a una democracia política, resulta ya, en mi opinión, angosta e inadecuada para proteger y dar vigencia a una democracia social.

La cartilla de los «derechos del trabajador», por ejemplo, parecería extranjera dentro del espíritu indiferente, por omisión, del problema social que exhibe nuestra Carta Fundamental.

Señor presidente: yo comprendo cuán casuística aparece esta breve incursión que hice en el área constitucional; pero, urgido por el tiempo, no puedo sino aludir apenas a algunos de los problemas fundamentales.

Digo así que desde un punto de vista muy general, y en resumen, puede decirse que hay dos conceptos acerca del proceso constitucional: uno que yo llamaría estático y que concibe la Constitución como un sistema y una unidad de normas jurídicas estratificado —valga la expresión— en el tiempo y en el espacio. Otro concepto, que yo denomino dinámico, concibe a este cuerpo jurídico no como un ente que es, sino como un ente que deviene, no como una forma, sino como una exteriorización, casi diría como un funcionamiento del complejo de normas jurídicas creadas por la vida de relación.

A este concepto dinámico adhiero plenamente al fundamentar la reforma constitucional.

La plutocracia —entendiendo este vocablo no con el sentido peyorativo que le imprimiera el brillante Wilfredo Pareto y después de él sus epígonos menores—, la plutocracia, empleando el término en el sentido que Renán dió a esta palabra, un poco olvidado ya por la resonante alacridad de los debates antifascistas; la plutocracia, es decir un estado de sociedad en que la riqueza es el nervio principal de todas las cosas, ha creado las grandes formaciones económicas contemporáneas, tan bien amparadas por la Constitución americana y, en el mismo sentido, aunque no con idéntico resultado, por la nuestra. Pero esta concepción del mundo es recusable para nosotros, hombres del siglo XX, que bus-

camos ansiosamente otro ideal social. Que creemos en la necesidad de acentuar las conclusiones de nuestra política masiva, y que por ello procuramos una reestructuración de nuestra Carta Fundamental.

Yo siento la crueldad fundamental de los días que nos toca vivir; me inclino reverente, como ante una instancia fatal y suprema, ante la necesidad de procurar esta reforma que yo califico como un viraje substancial de la vida argentina.

Sr. Rojas (A.). — Pero no ha concretado ninguna fórmula.

Sr. Díaz de Vivar. — Necesito, antes de terminar, formular, a manera de epítome, como síntesis final, una afirmación fundamental que implica al mismo tiempo una profesión de fe. Desde esta tribuna, la más alta, la más calificada de nuestro país, yo digo, señores diputados, invocando la representación moral del señor presidente de la República, que ayer en un discurso notable, que ha de perdurar, dijo sus verdades al respecto, yo afirmo, invocando también la representación del bloque mayoritario, que la revolución nacional peronista cree que deben mantenerse incólumes las esencias de nuestra vida republicana, en su triple aspecto que la califican como masiva, como representativa y como federal. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Digo también que creemos fervorosamente en el supremo designio de la voluntad popular, porque es en el pueblo donde, en última instancia, habrá que buscarse el *pathos* de todo proceso histórico. Sólo aspiramos a ensanchar los cauces de nuestra vida republicana, transformando la democracia política argentina en una democracia social. A eso —pero a eso sí— quedará reducido lo que he denominado el viraje substancial del destino argentino. Que nadie nos vea, señor presidente, renegando de nuestro pasado por las críticas que alguna vez éste nos suscitara; por el contrario, nos sentimos orgullosos de él y niego que nuestra patria argentina deba sumergirse como comunidad nacional, en las aguas del mítico Leteo.

Quiero, para concluir, afirmar solemnemente que hay en nuestro gesto un ansia auténtica de afrontar con dignidad y con denuedo el destino argentino, que lo sentimos henchido de grandeza porque lo sabemos definitivamente triunfal. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados se aproximan y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Es de responsabilidad la actitud de un legislador que debe intervenir en un debate acerca de la necesidad de reformar la Constitución; y es honrosa la circunstancia de que yo deba hacerlo en representación del

bloque de la Unión Cívica Radical, e invocando la doctrina de mi partido.

El señor diputado Uranga ha explicado las circunstancias por las cuales el sector de la Unión Cívica Radical, en este instante y para este asunto, ha ocupado sus bancas.

Los señores diputados del oficialismo, en varias oportunidades, dijeron que antes de llegar a la reforma habrían de consultar la voluntad y el deseo de su agrupación. Nosotros nos habíamos anticipado, y nuestra convención nacional pronunció su palabra al respecto. Nuestro máximo organismo ha dicho que no es extraño al partido el deseo de reformar la Carta Fundamental. Entiende que hay que adecuarla a la vida actual económica y social del país, pero considera poco apropiado el momento para encarar esa reforma.

Teníamos también la obligación de decir cuál era el punto de vista radical a ese respecto. Nuestros legisladores venían preparados, pero han sido sorprendidos por este proyecto que malogra todo debate sobre los aspectos de la Constitución.

Nos hubiera alegrado, en suma, que se hubiesen considerado las iniciativas presentadas por los propios diputados de la mayoría, que aludían a reformas concretas. Este proyecto coloca al país en el vacío, frente a la reforma de la Constitución. Por eso tienen el tono que han tenido los discursos pronunciados hasta ahora por los señores diputados de la mayoría. Ellos se refieren en general a la necesidad de la reforma y han soslayado, en la medida de su capacidad y de su ilustración —porque no está en sus propias manos determinarlo—, en qué forma habrá de resolverse.

Este proyecto impide toda ilustración al país sobre la reforma; impide la consulta honrada al pueblo de la República, a quien se le solicitará el voto para reformar la Constitución y no se determinará el sentido de esa reforma.

Hubiera agradado que de modo claro y prolijo se dijera, con honor y con orgullo, en qué medida sirvió la Constitución del 53, en qué medida sirve, y en qué medida hemos progresado tanto, como para rectificar el pasado y dar el paso hacia el porvenir. Pero nada: silencio de incapacidad, declaración de reforma de la Constitución sin decir dónde está la virtud y dónde está el defecto de esta Constitución; consulta de tipo totalitario al pueblo de la República, por sí o por no, para poner la reforma al servicio de una mayoría que no ha expresado cuál es el alcance de ella.

Necesariamente, entonces, cambia el rumbo del debate, cambia la fisonomía de la ilustración del legislador, dirigida a definir con precisión dónde está lo modificable, dónde está lo que debe mudar. Por lo tanto, debemos, lógicamente, colocarnos en la realidad argentina actual, en lo que ocurre en la actualidad, para de ahí

sacar las conclusiones de cómo ha de hacerse, de cómo será esta reforma constitucional.

Por otra parte, la fisonomía actual del país permite suponer que no ha de diferir la personalidad del constituyente de la actual personalidad del legislador peronista, lo que es tanto como decir que la nueva fisonomía de la constituyente será parecida a la fisonomía del actual sector de la mayoría.

Sr. Visca. — ¿Quiere decir que no tenemos capacidad?

Sr. Balbin. — Quiero decir que la identidad de propósitos en el concepto revolucionario que ustedes defienden, la convicción que demuestran ustedes de esa revolución, acredita plenamente y permite asegurar que la fisonomía y la orientación que marca actualmente el sector de la mayoría será la fisonomía y la orientación que marque la nueva convención.

Sr. Bustos Fierro. — Si ganamos la elección; porque si la ganan ustedes será distinto.

Sr. Balbin. — Sí, pero para mi argumento acepto la jactancia de ese sector, que se atribuye la mayoría de la República.

Sr. Bustos Fierro. — No es jactancia.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador, el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balbin. — Quiere decir que debemos analizar los hechos y tomar la reforma como viene —porque se ha repetido en la Cámara tantas veces por el señor diputado Colom cuando bregaba por la inmediata ley de reformas de la Constitución, y tantas veces por los señores diputados en la actualidad y en el debate de hoy— bajo el signo de la revolución peronista y del jefe virtual de la revolución.

Si estuviéramos a la palabra, a la expresión verbal, a las múltiples expresiones de orientación que ha dado el jefe de esa revolución, podríamos en cierta manera pensar que la reforma se haría bajo el signo del mensaje de la paz, por ejemplo, bajo las expresiones verbales dirigidas a destacar el respeto de la personalidad humana que se encuentra en varios discursos del señor presidente de la República. Podría suponerse que puede ser bajo el signo de colocar la economía argentina al servicio del pueblo, porque también ésas han sido expresiones del primer magistrado de la República. Podría suponerse por los hombres de trabajo que está orientada y se afianza en el concepto de libertad en la organización de los sindicatos obreros. Podría afirmarse que tiene el signo de lo republicano, de lo representativo y de lo federal, a estar también a las expresiones del presidente y de los líderes del peronismo.

Pero es que tenemos que manejarnos con la realidad actual, señor presidente, con los hechos producidos, con la legislación dada por este cuerpo y entonces puede suponerse con verdad que la reforma constitucional está inspirada en la conferencia del señor presidente de la Re-

pública que diera al inaugurar los cursos de la cátedra de defensa nacional, ratificada por desgracia en los hechos y en la legislación.

Puede suponerse con verdad que puede estar inspirada en el decreto ley que reprime los delitos contra la seguridad del Estado, rompe el hábeas corpus y crea una barrera dentro del país, que llega hasta a declarar delito la huelga.

Podría suponerse también —porque son hechos producidos— que la nueva reforma constitucional está inspirada en la ley que ayer dictó esta Cámara, la del servicio civil de la defensa nacional, que reitera el concepto de la preinscripción y otorga al primer magistrado de la República facultades exageradas. Tan rápido se hizo ese debate, tan pronto la mayoría otorgó ese instrumento, que hasta fastidiaba el informe del miembro informante, y lo apremiaron.

Puede suponerse que esta reforma está inspirada en un absurdo concepto nacionalista que surge de este proyecto que acaban de presentar y que establece que es imprescindible ser nativo para ser convencional, contradicción de la mayoría que ayer, con un discurso de un diputado de su sector y violando la Constitución, incorporaba a un hombre que no reunía las calidades constitucionales ni la antigüedad requerida, y hoy nos sorprenden con este artículo que impone al nacionalizado al margen de la constituyente: le otorga el voto y le impide legislar en una Nación que tiene los brazos abiertos a la inmigración del mundo.

Sr. del Carril. — Los brazos y las cárceles.

Sr. Balbin. — ¿Inspira esta reforma para estructurar el Poder Legislativo del futuro la expulsión de Sammartino? Ese es otro hecho que condiciona la conducta de la revolución.

¿Puede estar la modificación en la condición económica de la nueva Constitución por lo que se declara o por esta conducción totalitaria de la economía argentina?

La intimidación pública: otro signo de la época. Si el Parlamento dijera cuáles son las disposiciones constitucionales que habrán de modificarse, esta inquietud desaparecería porque habría de suponer que la nueva constituyente estaría a tono con las declaraciones de reforma que diera este Congreso; pero esta disposición que le somete sus facultades extraordinarias permite suponer que la reforma tendrá el signo de estas arbitrariedades argentinas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Reforma y revisión de la Constitución: sin decir una palabra en la letra, ni que pueda surgir del espíritu de la exposición del señor diputado por Corrientes, que sea republicana, representativa, federal. Podría, por lo menos, en resguardo de esta magnífica organización argentina, haber dicho que dentro de esas formas se hará la reforma constitucional.

No se dice en este instrumento que se entregue a la nueva constituyente que tendrá facultades de poner en quiebra el Pacto Federal y hasta tendrá las facultades de establecer en el país una monarquía con calidad hereditaria para los cónyuges, pero no lo impide el Parlamento de la democracia argentina en el momento preciso de declarar la necesidad de la reforma. Jamás se ha hecho cosa igual. Jamás se ha puesto al país en trance tan difícil.

¿Subsistirá o no el federalismo argentino? No hay garantías en esta disposición. Todo hace suponer que se pondrá en quiebra el federalismo argentino porque a la expresión de mantenerlo se oponen los hechos realizados. Más de una vez en esta Cámara, frente a leyes vinculadas con la organización impositiva nacional; más de una vez cuando de modo arbitrario se legislaba para la Nación tomando facultades de las provincias, nosotros, en nombre de la buena doctrina federal levantamos nuestra protesta y defendimos el derecho de las autonomías provinciales. No sé si por omisión o por complacencia, la mayoría fué sorda a ese reclamo.

La nueva Constitución se va a hacer bajo el signo de la Policía Federal en todo el territorio del país, vulnerando la autonomía provincial; bajo el signo de la organización de Trabajo y Previsión que ha arrebatado a las provincias el derecho de legislar en esas materias y de aplicar su ley autonómica dentro de los distritos provinciales; bajo el signo del decreto ley que legisla sobre los alquileres y que coloca a la provincia de Buenos Aires y a algunos de sus pueblos dentro de la órbita del gobierno nacional, al margen de los derechos de esa provincia; bajo el signo del avasallamiento de las autonomías en el régimen impositivo, por el cual el país tiene para sus lujos en el orden nacional lo que con sus leyes impositivas roba al hambre de las provincias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Estas manifestaciones no van exclusivamente en tono de crítica. Ustedes hicieron la legislación y han dado tonalidad a la nueva forma de gobierno argentino; y al permitir que se declare la reforma de la Constitución facilitan la posibilidad de una reforma constitucional, que termine con el régimen federal del país.

El centralismo actual del Poder Ejecutivo es innegable. No podrán los miembros del sector de la mayoría hablar con verdad, si no dicen que este Poder Ejecutivo se distingue por ser un gobierno centralista, que ha tomado bajo su égida todas las facultades que la magnífica Constitución otorgada al Poder Ejecutivo argentino, pero que también se ha arrogado facultades que son privativas de las provincias y ejerce un gobierno central de fuerza respecto de las autonomías provinciales.

Frente a la reforma, el país tendrá esas dudas. Pienso que la constituyente nueva hará realizaciones que podrán perdurar. Puede ser que en este momento argentino la constituyente llegue a consolidar el régimen que anuncia el estado actual de cosas del país, pero tengo plena confianza en el interior de la República, tengo completa seguridad en el viejo arraigo de las convicciones federalistas de mi país. Alguna vez frente a la nueva Constitución centralista que se anuncia habrá de sentirse el vigoroso impulso de las autonomías provinciales para derogarla en el hecho con la misma sangre con que los hombres de antes derrocharon generosamente para crear la Constitución del 53. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Se ha dado en decir —y con verdad— que el mundo vive bajo un sistema extraordinariamente evolucionado; que nuevas cosas, nuevos hombres y nuevas teorías permitirán una organización mejor. En algunas partes, se pone en aplicación con justo criterio, haciendo un equilibrio entre lo que podría decirse lo material de la vida y el concepto de la independencia espiritual del hombre. En muchos países, cuando el Estado tomó para sí el derecho de hacer felices a los hombres en la medida que el Estado quería, mediante una legislación de ese tipo, se oyó decir con frecuencia: ¡qué importa que falte un poco de libertad si ahora estamos más satisfechos que antes! Y esos pueblos murieron luego en el hambre, en la miseria y en la desesperación.

Esta reforma constitucional se hace bajo el signo de una falta de libertad argentina innegable; no se puede negar la realidad que se toca casi en el país. No hay voz autorizada que hable de libertad de prensa; los diarios han sido clausurados; no hay posibilidades —no obstante las declaraciones consignadas en decretos por el señor ministro del Interior— de hablar por radio para los hombres que no comparten las teorías peronistas. Es claro que el señor ministro del Interior firma el decreto otorgando el derecho, pero da la contraorden por teléfono y luego dice que se trata de una cuestión personal de las radios.

Sr. Ministro del Interior. — No es exacto, señor diputado.

Sr. López Serrot. — Es exacto.

Sr. Ministro del Interior. — El señor diputado por Buenos Aires ha hecho una acusación que debería probar.

Sr. Rojas (N.). — No se puede probar, pero es cierto.

Sr. Visca. — Lo dice el señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Ministro del Interior. — Solicito la palabra para una aclaración.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Oportunamente concederé la palabra al señor ministro.

Sr. Balbin. — Así vive el país, señor presidente...

Sr. Visca. — Recuerden todo lo que hablaban desde Montevideo.

Sr. Rojas (N.). — Aquél es un país libre.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Balbin. — ... no obstante que las leyes fundamentales están en plena vigencia en la República. Se expulsa a los hombres que no piensan como el gobierno. Alguien ha dicho con jactancia que lo que interesa es que el pueblo vive en felicidad, en abundancia de cosas, aunque estas cosas se den por la ventanilla de los trenes; que el país vive bien porque tiene más dinero que antes, aunque nunca se tenga la explicación cierta de cómo están las cosas financieras de la República.

Así va disminuyendo el concepto de lo libre y de lo democrático. Pero esta lucha no empieza y termina; es eterna. Lo interesante, porque es la vida, es hacer el justo equilibrio de las cosas: dar la libertad, las instituciones libres y otra felicidad al hombre; no hacerle creer que va a vivir mejor en lo material, alejado de lo espiritual y de lo libre.

Temo, con razón, que esta Constitución tenga ese tipo porque no se lo anuncia en el contenido de su reforma, que legisla sobre todas las posibilidades del hombre en el terreno de tener. Es muy posible que se haga la prédica para obtener los votos, que en cuanto al régimen de la propiedad se establecerá que la tierra será de aquel que la trabaje. Eso no basta en la Constitución. Resultará necesario e imprescindible; pero la propiedad ha de ser para un hombre libre y no para un hombre sojuzgado; la propiedad para un hombre espiritualmente dotado y no para un hombre que haya vendido el espíritu por tener la propiedad.

Este es el clima del país. Por eso la Unión Cívica Radical está en contra de la reforma en este instante, porque no está en plenitud la conciencia argentina. No sé, señores diputados, por culpa de quién. Soy generoso hasta en eso. Tal vez sea un estado del mundo y de la humanidad. Nuestro país forma parte del mundo, y parecería que en él se han encontrado quienes se ofuscan con este nuevo estado de cosas de la humanidad, pero seamos suficientemente fuertes, serenos y tranquilos como para que, cuando entre en plenitud la conciencia argentina, recién digamos que está autorizada para hacer la reforma constitucional.

Los hombres del peronismo avalan esta reforma diciendo que se hace en nombre de la revolución, y bajo la conducción del señor presidente de la República, declarado líder del peronismo.

Frente a los enunciados y frente a la realidad, frente a la preocupación del país entero antes del 43, cuando verdaderamente afluía un concepto revolucionario, como dando un paso gigante hacia adelante, porque la oligarquía había detenido con el fraude la evolución natural del país, pienso que bajo el signo de esas convicciones podría decirse que la reforma constitucional se hacía al impulso de una revolución; pero los hechos, la legislación, la forma de conducir el Estado por el señor presidente, autorizan a decir que esta reforma se hace en nombre de la contrarrevolución argentina. (*¡Muy bien!*) No la alienta un concepto revolucionario de gran porvenir, sino un concepto reaccionario de contrarrevolución. El peronismo, por lo que muestra, por lo que hace, y como se comporta, pasará en el tiempo con este lema: fué en su época la contrarrevolución argentina.

Sr. de la Torre. — Recuerde el Decálogo de los Trabajadores, señor diputado.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado por Mendoza.

Sr. Visca. — Son seiscientos mil votos.

Sr. Balbin. — Sí, señor diputado; y muchos más, todos los necesarios y todos los que obtenga en esta época en que vive la República.

Nosotros estamos conduciendo esta posición política con el justo equilibrio que toca a la verdadera felicidad del hombre: afianzamiento de su libertad, recuperación democrática de la República. Sin tener en cuenta la felicidad del hombre, se le dará todo, hasta que un día éste advierta que ha perdido el espíritu.

Este sistema de reclamar el voto a la ciudadanía no es nuevo; es un sistema de actuación peronista, que habla muy bien de su líder, pero que habla muy mal de sus políticos solidarios. Ayer las calles de la República se llenaron de carteles, que decían: «Vote por estos hombres, porque los necesita Perón», y el pueblo no votó a los hombres, sino que votó por Perón.

Sr. Visca. — Como votaron por Yrigoyen a los hombres de la Unión Cívica Radical.

Sr. Balbin. — Con este proyecto que habrá de sancionar la mayoría, se llenarán las calles y las plazas de la República con grandes letreros que dirán: «Vote por estos constituyentes, que los necesita Perón», y nosotros estamos en contra de eso, señor presidente, porque queremos una reforma para el pueblo y no una reforma para uso del presidente de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor ministro, para una aclaración.

Sr. Rojas (N.). — ¿Me permite? Así aclarará...

—Suena la campana.

Sr. Rojas (N.). — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Los diputados del bloque de la minoría han sido respetados en el uso de la palabra; la Presidencia solicita el mismo respeto para el sector de la mayoría.

Sr. Rojas (N.). — Yo no faltó al respeto pidiendo una interrupción.

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — No pretendo hacer un escándalo de una frase pronunciada por el señor diputado por Buenos Aires, pero me parece que conviene que la aclare.

Ha dicho, con toda precisión, que el ministro que habla firmó un decreto y luego habló por teléfono a las radiodifusoras para que no concedieran el uso de las mismas al partido al cual pertenece el señor diputado. Como eso es absolutamente inexacto, rogaría al señor diputado que aclarara las palabras que pronunció.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Señor ministro: Antes de concretarle otro episodio que viví personalmente, me voy a referir a esta circunstancia: para la elección del 7 de marzo la radio de Corrientes recibió un telegrama del jefe de Transmisiones del Interior de la Dirección de Radiocomunicaciones prohibiendo las transmisiones de carácter político no oficiales. Se suspendieron las transmisiones de la Unión Cívica Radical, pero se autorizaron las del Partido Peronista, que monopolizó la radio con su propaganda. Ante la protesta de mi partido, se declaró que el Partido Peronista era un «partido oficial», y que, por lo tanto, estaba comprendido dentro de la circular del jefe de la oficina, que controla el señor ministro.

Sr. Díaz de Vivar. — ¿El 7 de marzo, señor diputado?

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Balbin. — Cuando el señor ministro dictó un decreto estableciendo que las radios del país debían dar tratamiento igual a todos los partidos políticos, personalmente concurrí a varias radiodifusoras. El Partido Comunista había conseguido contrato en varias radios y, para poder hacer eficaz y posible su política, tenía frases angelicales, mucho más simples que las del Partido Peronista: el Partido Comunista, digo, contrató y pagó. Al día siguiente, le fueron impedidas las transmisiones por disposición del señor ministro del Interior.

El señor ministro debe saber que concurrí personalmente a contratar y que no me valí en cierta manera de las propias radios en forma directa, sino de hombres que disponían de espacios, y los contraté. Inmediatamente me informaron que era imposible hacer uso de esos espacios porque el decreto del señor ministro estaba «mal interpretado»: hablaba de igual tratamiento a los partidos políticos, pero para el señor ministro no había más que un partido político, que no era otro que el del señor ministro.

Entonces, ante la protesta de la Unión Cívica Radical, como le es cómodo, el señor ministro llamó a los periodistas, y frente al reclamo de nuestro partido, dijo que el decreto subsistía y que si a la Unión Cívica Radical le impedían o no le proporcionaban espacio en las emisoras, eso era un asunto netamente comercial. Y yo le digo al señor ministro que todas las emisoras me sostuvieron que no había espacio para la Unión Cívica Radical porque estaba en peligro la concesión de esas empresas.

En una de ellas —que no he de citar, porque no está en mi propósito denunciar a nadie— me dijeron: «por este teléfono llega una orden que no sabemos quién la da; por este otro llamamos a un número convencional y ahí nos dicen que es cierta la orden». Esto también se hacía en Alemania. Era la Gestapo, señor ministro del Interior. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Rudi. — ¿Me permite, señor presidente, una aclaración?

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

Sr. Ministro del Interior. — Lamento que el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, por quien siempre he tenido una consideración especial, haya hecho en este momento una pequeña novela para presentar al Ministerio del Interior en una situación que no es la real.

El señor diputado habla de una voz desconocida que aparece por teléfono y, como es desconocida, forzosamente tiene que ser la del ministro del Interior. Si las emisoras no le han querido alquilar los espacios, nosotros, que garantizamos la libertad, no les podemos obligar a que alquilen esos espacios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — El señor diputado no solamente se ha referido a circunstancias de carácter particular o comercial, perfectamente garantizadas por la Constitución que quiere reformar el sector peronista y que tanto defiende el bloque de la Unión Cívica Radical, sino que no ha hecho ningún cargo concreto. Me parece muy lógico que los señores de la oposición sufran las consecuencias del régimen de la propiedad privada que otorga la Constitución que en este momento estamos discutiendo para mejorarla. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — El señor ministro Borlenghi...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Colom. — El señor ministro Borlenghi no es Rawson, como acaba de insinuar el señor diputado por Buenos Aires, pero es el representante del Poder Ejecutivo legítimamente elegido por el pueblo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ruego al señor diputado que se concrete a la cuestión en debate.

Sr. Mercader. — Eso, para el ministro, es puro mostrador.

Sr. Colom. — La preocupación del señor diputado representante del bloque radical no tiene razón de ser, ni explicación lógica posible. El ha dicho que esta constituyente va a colocar en el vacío a las instituciones de la República, y ha olvidado, posiblemente en la precipitación de la lectura del despacho de la comisión, que en su artículo 4º dice que cada provincia y la Capital Federal elegirá un número de convencionales igual al de diputados que envía al Congreso y en igual proporción. Vale decir que habrá diputados constituyentes que se elegirán en la misma forma que los actuales diputados; ¡por mayorías y minorías!

Si los señores diputados confían en la voluntad del pueblo, que es la esencia de nuestro régimen representativo republicano federal, ¿por qué han de suponer que la convocatoria de una constituyente nos precipitará en el vacío? Si

el pueblo los apoya en los próximos comicios, ellos podrán ser mayoría en la constituyente, y no caeremos en el vacío! ¡Y pueden estar seguros que no habrá bajo la égida del general Perón ni la del mandatario que los suceda, un solo voto falso en ninguna urna en toda la extensión de la República! Y reivindicó esta verdad electoral para nuestro movimiento, porque en las elecciones anteriores al 24 de febrero de 1946, sin hacer exclusión de ningún partido político gobernante, el fraude fué sistema de gobierno en unos casos, y en otros, fraude esporádico.

Sr. del Carril. — Hay gobernadores de provincia que no opinan lo mismo.

Sr. Mercader. — Pregúntele a Santillán.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ruego a los señores diputados que no interrumpen al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Colom. — Tampoco puede sorprenderse el señor diputado Balbin porque el despacho de la comisión hable de una reforma sin especificar los artículos a reformar. En 1881, cuando aun no se habían apagado los fuegos de la revolución que trajo por consecuencia la capitalización de Buenos Aires, el doctor Estanislao S. Zeballos, en la sesión del 15 de junio del referido año, presentó un proyecto cuyo artículo 1º se refería a la reforma integral de la Constitución.

Pero, señor presidente, el despacho de nuestra comisión es más previsor, porque establece la necesidad de la reforma, «a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación».

En aquel proyecto de Zeballos se hablaba de la reforma de la Constitución, y aquí se habla de la reforma para un fin superior: «para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación». Se ha hablado en las bancas opositoras de la falta de publicidad de esta reforma. Yo me remitiré a un párrafo del discurso del interventor del peronismo en la Capital Federal, el hoy presidente de la Cámara. El diputado doctor Cámpora, al proclamar nuestros candidatos por la Capital el 6 de marzo del corriente año, dijo: «El restablecimiento de dos tercios en el Poder Legislativo se hace imprescindible ante un hecho de extraordinaria trascendencia mundial, ya que los derechos del trabajador, afirmación del respeto humano por quienes labran la grandeza de la patria, reconocido en su integridad y contenido por la Unión de Naciones y recomendado como parte integrante a todos los países signatarios por este alto organismo mundial, debe ser incorporado a la Constitución nacional de la República». Ello justifica el pensamiento de Alberdi, de que las constituciones, antes que definitivas, son temporarias.

Y en este mismo ejemplar de «La Nación», página 4, puede leerse lo siguiente, que se refiere a lo dicho por un candidato a diputado

nacional por la Unión Cívica Radical por la Capital: «evocó este orador, por efectuarse el acto en la plaza Constitución, a los Constituyentes del 53 y del 60, significando que «precisamente de eso se trata en la jornada comicial de mañana: de salvar la Constitución, que, sabía en todas sus cláusulas, no sólo previó la forma de evitar una continuación dictatorial, sino que buscó proteger al pueblo de una equivocada tentación, al prescribir la necesidad de un período para reelegir al presidente de la Nación».

A ese orador le preocupaba mi proyecto que estaba ya radicado en este cuerpo desde 1947, por el que propiciaba la reforma del artículo 77 de la Constitución.

Como se ve, el debate estaba ya en la calle. Nadie puede afirmar, si no lo hace con mala fe, que estamos ante una improvisación y que entramos con una ganzúa a forzar el cofre sagrado que resguarda a nuestra Carta Fundamental. En la geografía política y social de la Nación se han producido cambios que imponen una revisión de nuestra Constitución.

Sr. Mercader. — Suprimieron la gobernación de Los Andes.

Sr. Colom. — No estamos en un circo, señor diputado.

Sr. Mercader. — Parece...

Sr. Colom. — ¡Yo creo que el problema es de tanta gravedad, que determinó el regreso inesperado de ustedes y el retiro de sus renunciaciones!

Desde 1865 hasta la fecha, cuarenta y un proyectos abonan la necesidad de la reforma, y la comisión, al estudiar los proyectos respectivos y entregarnos este despacho, no ha hecho sino traducir una inquietud de carácter nacional.

Se ha dicho, señor presidente, que no están especificadas las reformas y se olvida que este despacho lo es en base a los proyectos anteriores, de donde resulta indudable que se han tenido en cuenta las reformas concretamente allí especificadas, además de otras que se dejarán al cuerpo constituyente. He propiciado la reforma del artículo 14. ¿Para qué? Para incluir allí los derechos del trabajador, ese decálogo del trabajador que, según dijo equivocadamente un diputado de la oposición, pertenece al régimen español. No interesa, señor presidente, a qué régimen ha pertenecido; lo que interesa es que incorporemos esa garantía básica a nuestra Carta Fundamental para que mañana esos derechos no corran riesgos por cambios futuros de gobierno.

He propiciado la reforma del artículo 37. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos de los territorios que constituyen la tercera parte de la República por su potencial económico y por su población, dejen de ser parias en su propia patria y gocen de los derechos electorales. (Aplausos.)

¿Qué diputado radical podrá oponerse a que los territorios voten, a que los hombres y mujeres argentinos puedan votar en las próximas elecciones? No puede haber nadie que sintiéndose absolutamente argentino desee evitar que nuestros hermanos de los territorios puedan votar. Ellos contribuyen con sus hombres a nuestras filas del ejército y con impuestos a nuestras arcas fiscales, pero cuando hay que elegir diputados o presidente de la República, no pueden votar. Y ocurre que mientras nuestra Constitución consagra el derecho de votar a los extranjeros que tienen residencia y carta de ciudadanía, nos hallamos ante la desgraciada situación de los territorianos sin derechos electorales!

Sr. Dávila. — Es suficiente una ley del Congreso para que puedan votar.

Sr. Presidente (Cámpora). — No tiene el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Colom. — Voy a referirme a otra reforma que quizá sea la que preocupa más fundamentalmente a la oposición, la del artículo 77, disposición que por un anacronismo no permite que el presidente de la República sea reelecto. Digo un anacronismo porque es sabido que desde el año 1853 hasta la fecha, con raras excepciones, el presidente saliente ungía a su sucesor; aunque el sucesor, «mareado en la montaña», le diera la patada histórica; pero la verdad era que imponía su sucesor.

Yo recuerdo que era muchacho aún cuando en 1921 recorría las calles de Buenos Aires pidiendo a gritos la reforma de la Constitución para que fuera reelecto Hipólito Yrigoyen y en esas bancas hay muchos diputados que asumieron igual actitud, y proclamo así mi pensamiento, porque no oculto mi honroso pasado político.

Ahora con franqueza, con lealtad, con patriotismo, digo que no es conveniente continuar engañando al electorado argentino al dar la posibilidad de que el presidente saliente imponga sucesor, por respeto a una anacrónica disposición constitucional.

Desearía que los señores diputados escuchen dos frases que me voy a permitir leer, citadas por el señor diputado Cooke en su proyecto de reformas.

Urquiza terminaba su período presidencial y estaba preocupado con la próxima elección. Sus amigos aspiraban a su reelección. ¿Qué ocurría? Alberdi, consejero dilecto de Urquiza, enterado de sus tribulaciones, contesta a una carta de Urquiza desde París. Corrían rumores entonces de que se pretendía reelegir a Urquiza, y Alberdi expresa que hasta tanto esté asegurada la paz se declara totalmente contrario a la derogación del artículo constitucional. Y así dice Alberdi: «¿Quién podría desear con más sinceridad que yo que vucelencia continuase en la presidencia por uno o dos períodos más?» La continuación por un período más no era sufi-

ciente; Alberdi quería dos períodos. Y agrega: «Baste decir que yo considero una desgracia el que la Constitución no lo permita. Si cuando yo escribí el proyecto en Chile hubiera estado seguro de que vucelencia sería electo presidente no me habría atrevido a proponer el principio de no reelección para aprovechar de una candidatura tan feliz en favor de la organización y de la paz de nuestro país. La adopción de ese principio sólo prueba la completa impersonalidad con que se ha discutido y dado la Constitución; pero una vez dada y sancionada con tanta gloria tenemos que respetarla si queremos que se tenga respeto de nosotros.»

¿Y cómo entiende el inspirador de nuestra Constitución ese respeto? Veamos sus palabras: «Voy a permitirme expresar a vucelencia la combinación que a mi vez sería de preferir en el caso de que los acontecimientos de Buenos Aires se desenvolviesen favorablemente a la integridad de la República Argentina. El influjo de vucelencia podría hacer recaer la elección de presidente en un vecino honrado, militar o civil, aunque no fuese conocido sino como hombre honesto, ya fuese de Entre Ríos (patria de Urquiza) o de otra provincia argentina, y aun de la misma Buenos Aires.»

Alberdi, el autor de *Bases*, el inspirador de nuestra Constitución, se lamentaba de que una cláusula constitucional impidiese la reelección de Urquiza por uno o más períodos!

Sr. Rojas (A.). — Pero no hablaba de reformar la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Colom. — No he querido leer lo de la reforma. A continuación de su carta histórica le aconseja a Urquiza dejar a un tercero, amigo, y proponer la reforma que podría ser hecha antes de los diez años que establecía la Constitución del 53, y de ese modo «podría ser electo una o más veces». Propiciaba la reforma igual que la que estamos haciendo nosotros. La reforma que hemos ofrecido al pueblo y para realizar la cual nos votaron 1.600.000 electores. No lograr la reforma prometida significaría una defraudación total al electorado que nos votó. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Se ha dicho que nosotros hemos omitido especificar qué reformas más se harán y yo voy a comentarlas. Yo voy a significar cuál es la necesidad de la reforma, y ella no sólo se concretará a los artículos enunciados sino que la Convención Constituyente ha de enmendar otros artículos y ha de tener en cuenta esta discusión parlamentaria como fuente de interpretación de esta ley.

Ante el despacho de la comisión yo propongo además la reforma de los artículos 49, 14, 17 y 67, inciso 2º para salvar algunas lagunas en nuestro actual régimen constitucional, y para concretar

esas reformas leeré la opinión de un distinguido autor argentino con respecto a esas lagunas que hemos de llenar con la ley que propiciamos. Este autor dice contestando una consulta mía: «Su reforma a la Constitución tiende a llenar sensibles lagunas del instrumento constitucional, que en materia de régimen de la propiedad responde a un sistema anacrónico y superado en el mundo entero: me refiero al sistema individualista que, unido al falso liberalismo económico y político, dió lugar al capitalismo y a las funestas secuelas que hemos padecido, entre las que se cuenta el desconocimiento de los derechos más elementales de los hombres que trabajan y labran con su esfuerzo la riqueza del país».

La historia parlamentaria presenta escasas iniciativas de este género, hecho que tiene su explicación en parlamentos compuestos por representantes de los sectores adinerados o de partidos capitalistas, no obstante su denominación más o menos izquierdista, aunque nunca realmente obrerista, que se complicaron con aquéllos en el abandono de los derechos de los auténticos trabajadores.

¿Puede tener otra explicación que ninguno de los artículos cuya enmienda propongo hayan sido objeto de proyectos de ley en ese sentido para llenar lagunas tan sensibles? Aspiro, como aspira el partido popular que represento, a que se enuncie en el artículo 4º y en el artículo 67 de la Constitución nacional, entre las contribuciones que puede establecer el Congreso, el impuesto progresivo a la renta y a las herencias y el impuesto a las ganancias excesivas y a todas aquellas que no guardan relación directa con el esfuerzo personal de quienes las perciben; y desearía que la enmienda se hiciera de acuerdo con una fórmula que no dejara duda alguna acerca de que esos impuestos deben emplearse como correctivo del régimen actual de la propiedad, que permite la acumulación de fortunas innecesarias, tendiendo a una mejor y más justa distribución de la riqueza. El ansia de riqueza tendrá un límite de contención, ante la certeza de que el Estado absorberá toda ganancia desmedida, desproporcionada e injusta.

Deseo vehementemente que se complete el enunciado escueto del artículo 14 de la Constitución vigente, según el cual todos los habitantes del país tienen derecho «de usar y disponer de su propiedad», de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio, con la expresión explícita de que el uso y la disposición de los bienes debe hacerse en interés general, consultando la utilidad colectiva; que la ley podrá establecer, en consecuencia, los límites de la disposición y el uso y las reglas del ejercicio de este derecho, individual y social a la vez, como lo han hecho ya las constituciones más modernas y justas, por ejemplo, la de Italia.

Aspiro, por último, a que se añada al artículo 17 una cláusula que excluya de la protección de la inviolabilidad, que dicha disposición constitucional establece, a la propiedad, para facilitar la expropiación de los latifundios y con ello la realización de los postulados de la justicia social que inspiran a nuestro movimiento y que permitan realizar la reforma agraria, tantas veces prometida, al conjuro del lema del general Perón: «La tierra debe dejar de ser un bien de renta para convertirse en un bien de trabajo.»

De este modo la ley reglamentaria podrá establecer normas para que las tierras abandonadas e inexploradas por sus propietarios sean expropiadas a bajo costo para darlas a quienes las hagan producir. Se favorecerá el fraccionamiento de los latifundios con los mismos fines sociales y productivos y se destinará al beneficio de la colectividad la plusvalía adquirida por los bienes, sin esfuerzo ni inversión de parte de sus tenedores.

Sr. Rojas (A.). — ¿Quién le ha manifestado esa opinión?

Sr. Colom. — Es la opinión de un distinguido jurisconsulto argentino, el doctor Dana Montaña, ex profesor en la Universidad del Litoral y actual juez federal en Santa Fe.

Sr. Rabanal. — Todo eso podría concretarse en una ley de expropiaciones.

Sr. Colom. — Estas reformas hacen a la vida misma del movimiento revolucionario que reconocen como único líder a nuestro general presidente. Corresponde, pues, al Parlamento de la revolución la responsabilidad y el honor de sancionar la ley que declara la necesidad de la reforma. Por ello, y para terminar, digo con profunda fe cristiana: ¡Que Dios ilumine a nuestros constituyentes de 1948! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Señor presidente: hubiéramos deseado los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales que este trámite de la ley de calificación para la reforma de la Constitución hubiera dado la oportunidad de un trabajo más profundo, de manera tal que todos los señores diputados hubieran podido desenvolverse con mayor comodidad, no por espíritu de vanidad personal, sino para dejar testimonio en los anales de este Congreso el esfuerzo de los hombres de esta época por la mejora de nuestra ley básica.

He de decir palabras sencillas referidas en forma especial a los argumentos dados por el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Bagnasco.

La argumentación del señor diputado por Buenos Aires se ha referido a tres puntos, los

dos primeros de tipo formal, procesal digamos, y el último de fondo. Expresó su opinión firme acerca de que el trámite que estamos llevando no es el indicado, de acuerdo con su interpretación del artículo 30 de la Constitución, sino que esta discusión y la sanción consiguiente, por las razones que dió, debió haberse realizado en el Congreso reunido en asamblea. Sobre ese punto y para que no persistan dudas en ese aspecto, diré simplemente, que, salvo el doctor Sánchez Viamonte, mencionado, todos los autores argentinos coinciden en que el trámite en este asunto, para generar la reforma de la Constitución, es idéntico al de una ley común. Es decir, debe ser iniciado en una de las Cámaras y consumado en la otra por el sistema de quórum y de la mayoría importante que exige la Constitución.

Cuando la Constitución habla en su artículo 30, del Congreso, no exige —como sostiene el señor diputado Bagnasco— que sea el Congreso el que se reúna en una sola asamblea y con una sola decisión por dos tercios de sus miembros, declare la necesidad de la reforma. En numerosos artículos la Constitución se refiere específicamente al Congreso y siempre se entiende que es el Congreso bicameral con sus dos salas separadas, funcionando para generar la ley.

El artículo 4º de la Constitución, entre las facultades del gobierno federal, establece su facultad impositiva, la define y después dice: «de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general».

El artículo 7º de la Constitución dice: «Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán.»

El artículo 9º de la Constitución dice: «En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, y en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.»

El artículo 17 atribuye al Congreso exclusivamente el derecho de imponer las contribuciones que se expresan en el artículo 4º.

El artículo 21 de la Constitución determina la «obligación de armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional».

El artículo 24 expresa que «el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento de juicios por jurados».

El artículo 29 dice: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma

del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de los gobiernos o persona alguna»; el artículo 86, entre las atribuciones del presidente de la Nación, establece: «Inciso 11. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso. Inciso 12. — Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso. Inciso 21. — No puede ausentarse del territorio de la Capital, sino con permiso del Congreso.» El artículo 92 dispone que pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar; el 94, que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio de la Nación; y el 108, que las provincias no ejercen el poder delegado de la Nación, no pudiendo celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio o navegación exterior e interior, etcétera, sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería.

Aparece de manera clara que en todas las oportunidades el Congreso, salvo los casos en que se refiere expresamente al funcionamiento de la asamblea legislativa para recibir el mensaje y juramento del presidente y efectuar el escrutinio de la elección presidencial, siempre funciona en forma bicameral y que el trámite de las leyes es el conocido.

El señor presidente de la comisión también se refirió al quórum, expresando que hay tres clases de quórum: el referido a la totalidad de los miembros de la Cámara, al que los tratadistas llaman el quórum legal, es decir, el quórum óptimo, el de 158 diputados en este caso; el otro es el de los diputados en ejercicio de su mandato; y finalmente, los dos tercios de los presentes. Se inclina por la última de las fórmulas.

Sostengo, señor presidente, que los dos tercios que exige el artículo 30 de la Constitución, se refieren a la primera hipótesis, o sea, al quórum de la totalidad de 158 diputados.

Ya sé que esta disquisición, como ha señalado el propio diputado Bagnasco, es algo académica, desde que la mayoría dispone de número suficiente para cubrir cualquiera de las hipótesis; pero conviene recalcarla porque estas leyes deben ser sancionadas previendo cualquier imputación de nulidad. Los dos tercios de 158 son 105 y fracción; como para el voto no se admite la fracción, considero que los dos tercios necesarios son 106 votos por la afirmativa, declarando la necesidad de la reforma constitucional. Me fundo en lo siguiente: quórum, según la opinión de Miceli, profesor de derecho público de la Universidad de Perusa, es el número de miembros que en una asamblea se considera necesario para validar sus actos.

La Constitución establece diversos casos o hipótesis de quórum. Yo me referiré a tres: primero, el del artículo 56, en que establece que ninguna de las dos Cámaras del Congreso entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Se ha interpretado invariablemente en el Congreso argentino que la mayoría absoluta es la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara, aun como en la actualidad en que existen ausencias por fallecimiento, renuncia o exclusión.

El año pasado —recordarán algunos señores diputados— se produjeron, desdichadamente, algunos fallecimientos de miembros de esta Honorable Cámara, con lo cual el número resultó inferior a 150. En una sesión en que de común acuerdo nos encontrábamos trabajando, el cartel indicador señaló que en las bancas se hallaban 78 señores diputados. En ese instante pregunté al presidente del cuerpo, doctor Guardo, si existía número suficiente para sesionar, quien me contestó negativamente, ya que el número suficiente y necesario en el recinto era de 80. Le hice la siguiente pregunta concreta, porque tuve interés de que la contestación a la misma quedara registrada en el Diario de Sesiones: A los efectos de la mayoría de los miembros del cuerpo, ¿se computan también los diputados fallecidos? Concretamente contestó que sí: que también se computaban los fallecidos.

En síntesis, podemos afirmar que nunca la Cámara se ha reunido —cualquiera fuera el número requerido para el quórum real— con menos de 80 señores diputados en el recinto. Esta es la hipótesis a que se refiere el artículo 56 de la Constitución.

El artículo 58, aplicado hace pocos días por la mayoría, establece que la Cámara podrá corregir a sus miembros y hasta excluirlos de su seno con dos tercios de votos. Concretamente se refiere a los dos tercios de los votos presentes. Esto es indudable. Observen los señores diputados que los constituyentes cambian aquí la calificación al referirse a los dos tercios de votos de los diputados que están formando el quórum de la reunión.

El artículo 71, a los efectos de la insistencia en una sanción que ha sido objeto de una reforma por rechazo de la otra Cámara, se refiere a los miembros presentes. Esta interpretación del artículo a que me estoy refiriendo dió margen a un debate interesante en este recinto, del que se ocuparan especialmente los diputados Ravignani y Cooke en sesiones del año 1946.

Por último, veamos la interpretación que los constituyentes quisieron dar al artículo 30. Es indudable que ellos, sin establecer una constitución de tipo rígido, se propusieron determinar dificultades especiales para trabar la re-

forma fácil de la Constitución. Es por ello que en el artículo 30 establece que la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso por el voto de las dos terceras partes al menos de sus miembros. Obsérvese que utiliza la misma terminología del artículo 56. Este dice que ninguna Cámara entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, y el artículo 30 establece «con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros».

En la Asamblea Francesa del año 1871 se discutió este asunto, presentándose este ejemplo ilustrativo en el sentido de que podía haber ocurrido una catástrofe ferroviaria, un terremoto o el derrumbamiento de un local donde se realizara una asamblea de carácter popular o artística con la concurrencia de gran cantidad de diputados, y que durante el siniestro muchos de ellos fallecieran. Se planteó en esa oportunidad la siguiente situación: ¿podría una parte pequeña de la asamblea de representantes asumir el carácter representativo del pueblo francés? Se resolvió negativamente.

Podría ocurrir que en una Cámara apasionada y política, con espíritu de mando, no se aceptarían los diplomas de numerosos diputados, o se postergara su consideración, con lo cual se podrían lograr fácilmente los dos tercios de los diputados presentes, quebrantando y mutilando la posibilidad de que una parte del pueblo quisiera frustrar esos dos tercios y evitar la reforma constitucional.

De manera, pues, que nosotros creemos que la sanción válida de una ley en esta Cámara, para declarar la calificación de la necesidad de reformar la Constitución, debe obtenerse solamente con 106 votos, que son los dos tercios de los 158 miembros que integran el quórum legal de este cuerpo.

En cuanto a la reforma en sí de la Constitución, el argumento de fondo para justificarla no existe. Realmente es desolador observar la carencia de argumentos en los diputados de la mayoría que propugnan la reforma integral de nuestra Carta Magna.

Yo sé que no es fácil sostener hoy, súbitamente, la necesidad de reformar la Constitución. Era más claro, más directo, más valiente, decir: tal artículo de la Constitución no nos gusta, es anacrónico, es inconveniente, es impopular o injusto, o falta en la Constitución tal o cual institución que el progreso social, económico y político del país aconseja. Por eso los proyectos de los señores diputados Colom, Visca, Cooke y otros miembros de la mayoría, tenían esa virtud. La Cámara y el pueblo sabían sobre qué cosa debían pronunciarse. Observe el señor presidente —y lo destacó en forma magnífica el presidente de nuestro sector— que el pueblo votará por la reforma de la Constitución.

Es una doctrina original pero infundada la que sostuvo hace un momento el diputado por la Capital, señor Colom, en el sentido de que los convencionales leerán este debate y se guiarán por las ideas expuestas en el mismo para condicionar sus votos respecto de la nueva Constitución. Niego esa afirmación. La Convención es un cuerpo que tiene personalidad propia y nuestra intervención concluye poniéndola en movimiento, desaparece de una manera completa; no se leerá el Diario de Sesiones, como en las leyes obscuras, para conocer el pensamiento del legislador. El pensamiento del legislador es uno solo: declarar la necesidad de la reforma; pero la Convención, cuerpo soberano, representa al pueblo en su voluntad constituyente, mientras que nosotros somos simplemente la voluntad legislativa de la Nación, dentro de una Constitución que la mayoría está dispuesta a derogar para sancionar otra.

Bryce, en su famoso libro *The American Commonwealth*, dice: «El poder de reformar la Constitución es uno de aquellos que no pueden emplearse prudentemente para terminar con las controversias políticas corrientes, puesto que si así se hiciera ninguna constitución podría ser rígida o razonablemente permanente; es deseable cierta latitud de interpretación.»

Un método fácil y rápido de reformar la Constitución, no solamente debilitaría el sentido de seguridad que actualmente da una Constitución rígida, sino que aumentaría las perturbaciones de la política corriente, estimulando los cambios de la Constitución. El hábito de reformar se convertiría en el hábito de remendar; habría muy poca distinción entre los cambios de las leyes ordinarias, que requieren el acuerdo de la mayoría de las dos Cámaras y del presidente, y los cambios en la ley fundamental más solemnemente sancionada. Y los derechos de los Estados y de las provincias, que no pueden ser avasallados directamente por la legislación del Congreso, estarían en peligro. Los atributos más vitales de una ley fundamental son su solidez y su seguridad.

«El genio de los juristas permite que la Constitución se adapte a las necesidades más o menos permanentes, más o menos transitorias de todos los días; y los políticos y estadistas realmente diestros, tienen a su alcance gran variedad de medios, en virtud de los cuales pueden conseguir los fines deseados por medio de la legislación; y en muchas materias aun el uso puede modificar las disposiciones expresas de un instrumento que aparentemente se considere demasiado inmutable y rígido.

«El tiempo y el hábito —ha dicho Wáshington— son por lo menos tan necesarios para fijar el verdadero carácter de los gobiernos, así como también el de otras instituciones huma-

nas.» Es evidente que el hábito fija y que el tiempo remodela otras cosas y otros conceptos.

En nuestro país, como lo ha dicho el señor diputado Vítolo, el primer programa actual es cumplir la Constitución, defenderla, crear, vigorizar el ambiente de respeto a la ley. Nosotros incurrimos en la inocente y candorosa ilusión latinoamericana de querer arreglar nuestras cosas cambiando el ropaje constitucional que, como la ropa común, tiene modas, es atrayente o se desecha.

Este «continente de repúblicas y de constituciones», como nos define Hudson en su *Allá lejos y hace tiempo*, presenta una lista formidable de reformas constitucionales. Todos los países de latinoamérica, o la gran mayoría de ellos, presentan iniciativas de toda clase para asegurar la felicidad en la tierra mediante la varita mágica de la ley o de la nueva constitución. Nosotros, desde hace un siglo, nos hemos visto libres de ello; pero sabemos que la Constitución ha sido violada reiteradamente. Gran parte de nuestra lucha, de nuestra vocación, de nuestro ingreso a la política, deriva de las protestas permanentes por la violación de la letra y del espíritu de nuestra Constitución.

¿Para qué se va a reformar la Constitución? ¿Es exacto que la revolución del 4 de junio pensó en reformar la Constitución? ¿Acaso ese movimiento violento de los militares que se apoderaron del gobierno exteriorizó en alguna parte el propósito de reformar la Constitución porque era mala? Si la propia proclama del 4 de junio expresa de manera intergiversable que las leyes no son malas, sino los hombres que no las cumplen.

El señor diputado Colom ha dicho que es necesaria, entre otras cosas, la reforma de la Constitución para adecuar el concepto de propiedad a los nuevos reclamos de la justicia, queriendo expresar que el concepto sobre la propiedad en nuestra Constitución es antisocial.

Sr. Colom. — El concepto individualista, que respeta la propiedad como algo intocable.

Sr. Uranga. — No es así. El concepto de la propiedad se ajusta, como todos los conceptos humanos, al desarrollo y progreso científico, y si fuera una propiedad férrea, individualista, y ustedes hombres cumplidores de la Constitución, es evidente que no estaría en vigor esa legislación por decretos leyes, sancionada desde antes y después del 4 de junio.

Se ha afirmado que la cartilla de los trabajadores es necesario que sea incluida en las disposiciones constitucionales. Es interesante que una constitución moderna contenga algunas disposiciones expresas y solemnes sobre los trabajadores, desde que el problema industrial y obrero se ha agudizado en los últimos años; pero, para garantizar esos anhelos, contenidos en la cartilla de los trabajadores, no es indis-

pensable reformar la Constitución. No estarán más defendidos los trabajadores porque esos postulados o ideales se hallen expresos en la Constitución. La actual Constitución no impide que esos derechos de los trabajadores sean defendidos, pues basta para ello un código o una ley especial al respecto. Pero, lo importante es que se cumpla la ley, que se cumplan las promesas de que esas aspiraciones sean concretadas en un régimen de justicia que contemple el moderno problema obrero, a la luz de los modernos conceptos de justicia.

Afirmaba el señor diputado por Corrientes, que se refirió especialmente a la Constitución de los Estados Unidos y a sus antecedentes, y en escasa medida a la Constitución argentina, que aquella constitución y la nuestra representaban solamente a un sector de la población. No es exacto; los hombres del 53 no sancionaron una Constitución para un solo sector de la población, sino para todo el pueblo argentino. No estaríamos aquí sentados los diputados que integramos los dos sectores si ésta fuera una Constitución de tipo plutocrático, de oligarquía privilegiada.

Mediante las posibilidades de esta Constitución, se ha integrado esta Cámara y se integraría cualquier otra, porque a la libre voluntad del pueblo de la República, esa Constitución le confiere el dramático derecho de escribir su propio destino.

También mencionó el señor diputado Colom que es necesario hacer la reforma para afirmar conceptos sobre impuesto a las herencias y a las ganancias excesivas.

No impide la actual Constitución una legislación impositiva que frustre el enriquecimiento insolente de determinados grupos; no impide que se legisle para impedir la concentración de capitales y los fenómenos morbosos y patológicos del régimen liberal económico.

Sr. Colom. — La Corte ha resuelto que es confiscatorio el impuesto a las herencias cuando pasa del 50 por ciento. Y tenemos que en Inglaterra ese impuesto es del 90 por ciento y en Estados Unidos llega al 94 por ciento.

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa el señor diputado por la Capital al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Uranga. — En cuanto a los latifundios, el concepto de nuestra Constitución es que se indemnice en forma justa en caso de expropiación. Reformemos la ley de expropiación, definiendo el concepto de justicia; y si la Corte Suprema no acata ese concepto moderno, volteenla con más fundamento que a la anterior.

Se han mencionado los numerosos antecedentes de las reformas o enmiendas de la Constitución norteamericana. Es cierto que ella ha sido reformada numerosas veces, mediante un trámite más expeditivo que el nuestro, pero

siempre fué reformada sobre puntos concretos, definidos, públicamente discutidos. No ha sido objeto de una reforma integral, extendiéndose un cheque en blanco, como se dijo con acierto en una interrupción.

Creemos que nuestra Constitución merece una defensa. Todos tenemos concepto sobre aspectos en que puede ser mejorada. Creemos que nuestra Carta Fundamental debe ser defendida.

Leo en *Bases*, de Alberdi: «El grande arte del gobierno, como decía Platón, es el arte de hacer amar de los pueblos la Constitución y las leyes. Para que los pueblos la amen, es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor.

«El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Estas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública más o menos grave. Son lo que las amputaciones al cuerpo humano; necesarias a veces, pero terribles siempre. Deben evitarse todo lo posible, o retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. Remedios sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación.

«Ese es todo el secreto que han tenido los ingleses para hacer vivir siglos su Constitución benemérita de la humanidad entera.

«Las «cartas» o leyes fundamentales que forman el derecho constitucional de Inglaterra, tienen seis y ocho siglos de existencia muchas de ellas. Del siglo XI (1071) es la primera carta de Guillermo, el Conquistador; y la Magna Carta o Gran Carta, debió su sanción al rey Juan, a principios del siglo XIII (19 de junio de 1215). Entre los siglos XI y XIV, diéronse las leyes que hasta hoy son base del derecho público británico.

«No se crea que esas leyes han regido inviolablemente desde su sanción. En los primeros tiempos fueron violadas a cada paso por los reyes y sus agentes. Violadas han sido también posteriormente y no han llegado a ser una verdadera práctica, sino con el transcurso de la edad.

«Pero los ingleses no remediaban las violaciones, substituyendo unas constituciones con otras, sino confirmando las anteriormente dadas.»

Nosotros queremos que en nuestro país no se mate la libertad. Fundamentalmente aceptamos los fracasos del liberalismo económico, pero como ha dicho en una conferencia magistral nuestro querido compañero Luis Dellepiane, no aceptamos que se generalice el concepto del fracaso parcial del liberalismo económico con el fracaso del liberalismo filosófico.

Queremos un país en que los ciudadanos visitan la libre túnica de los hombres libres; no queremos un país de robots manejados a golpes de mano. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cooke. — En el curso del corriente año presenté a la Honorable Cámara un proyecto de reforma constitucional en el que concreté las modificaciones fundamentales que entendí debían hacerse a nuestro texto supremo.

La resolución del consejo superior, máxima autoridad de mi partido, y la que adoptara nuestro bloque parlamentario, al dejar librado al criterio de la convención constituyente los puntos que debe abarcar la reforma, hacen que mi exposición abandone el detalle de la crítica a las cláusulas constitucionales, para tomar un aspecto más general del problema.

Hagamos un balance de la Constitución. Yo opino que la Constitución nacional es una buena Constitución; opino que en algunos de sus aspectos, en sus fundamentales aspectos, la Constitución nacional es una sabia Constitución. Pero también afirmo, señor presidente, que la nuestra es una Constitución fracasada.

Parte de su texto ha caducado por el tiempo, por los acontecimientos, por la historia.

Los fenómenos, imprevisibles en la época de su sanción, y que se nos presentan en el momento actual, hacen que pierdan su validez, presuntamente permanente, algunas formas que van siendo substituídas por nuevas imágenes, cuyos contornos avizoramos pero sin que alcancemos todavía a limitar sus formas con precisión.

Esta Constitución, que tiene tanto de fracaso, tiene mucho de triunfo. En esta Constitución está incorporado lo que tiene de permanente el espíritu argentino, aquella parte del alma nacional que no está afectada por lo contingente del devenir histórico: el sentido democrático e igualitario y el respeto del hombre como valor humano.

Hay que hacer aquí un balance, no una liquidación, de esa Constitución. Hay que distinguir entre el fracaso de una parte de la Constitución como instrumento básico de la ordenación jurídica argentina y el fracaso total de la Constitución a causa del apoderamiento —por la oligarquía— de los comandos de la maquinaria del país, desde los que vició, continuada y permanentemente, todos los principios que afirmaba defender en su vocinglería declamatoria.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Roberto Dri.

No hay que hacer recaer sobre la Constitución lo que es culpa de los hombres.

Lo que la Constitución tuvo de social, de espíritu, de solidaridad humana, de sentido igualitario del hijo de nuestra tierra, no podía ser entendido por las clases dirigentes que desco-

nocieron los valores morales, porque ellos se regían a través de una axiología crudamente materialista.

Yo no podría hacer en el curso de esta exposición, el análisis que hubiese deseado del proceso histórico argentino, de una interpretación de ese proceso, legítima en cuanto está basada en un sistema de razonamiento perfectamente válido y en una documentación incontestable.

Sr. Rojas (N.). — Está en los fundamentos de su proyecto.

Sr. Cooke. — Sí, señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Lamentablemente.

Sr. Cooke. — No es obligación que todos lean mi proyecto, pero me alegro de que el señor diputado lo haya leído.

Sr. Rojas (N.). — Lo he leído, y lo lamento.

Sr. Cooke. — Me lleva una ventaja el señor diputado: que me lee cuando quiere, y yo le debo escuchar aunque no quiera. (*Risas.*)

Despertado el país de su larga siesta colonial, ya se advierte en la Primera Junta de gobierno, al llamar a su seno a los diputados del interior, que se va creando una continuidad histórica que arranca desde los albores de la raza y va configurando la integración moral argentina.

Cuando la oligarquía, de Buenos Aires, encandilada con los mitos de todas las teorías foráneas, por momentos llegó a pensar seriamente en la importación de un monarca extranjero y abandonar este cauce nacional, las muchedumbres argentinas se levantaron al conjuro de consignas primarias que encerraban el ensueño de la voluntad instintiva de patria.

Llega el año 26. La minoría directorial, repetidamente derrotada, juega su última carta y sanciona la Constitución reaccionaria, la Constitución rivadaviana que privaba del derecho de votar a los domésticos, a los jornaleros y sobre todo a los soldados, que estaban dando su sangre por la Independencia nacional. De nuevo las multitudes gauchas se hacen presentes e impiden la consagración de la ignominia.

Los jefes de esas muchedumbres pactan los acuerdos generadores del año 20, del 22, del 29, del 31; y poco a poco el país se va vertebrando en forma de unidad geográfica, política y sobre todo, moral.

Llega Caseros. De ahí nace nuestra Constitución que fuera sancionada cuando todavía resonaban dianas de victoria y no se habían acallado los estruendos de la batalla.

Sr. Rojas (N.). — ¿Por qué saltea a Rosas, que en su proyecto es el motivo de su mayor elogio?

Sr. Cooke. — El señor diputado quiere llevarme a un debate sobre rosismo, porque de ahí va a sacar la conclusión de que somos nazis o falangistas, epítetos que usa el señor diputado con frecuencia.

Sr. Rojas (A.). — El señor diputado dice algo que es extraordinario...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Cooke. — Deliberadamente he eludido el tema del rosismo porque en estos momentos podría retrotraernos al pasado y hacernos perder un poco la ilación de este debate. Saben los señores diputados que no es por falta de convicción ni deseos, pero en este momento hablo en nombre del bloque peronista y en él hay hombres que no comulgan con mi interpretación de la historia argentina.

Sr. Rojas (A.). — Creo que serán la mayoría.

Sr. Cooke. — No lo sé. No me interesa el aspecto plebiscitario de la cuestión ni he buscado dividiendo político en esta materia.

La Constitución del 53 tenía muchos errores. Estaba inspirada en el proyecto de Alberdi y, a través de éste, en fuentes secundarias como el proyecto de Rossi para Lucerna, la Constitución suiza, la Constitución chilena del 33, inspirada, a su vez, en la nuestra del 26, y la de California de 1849; tenía como base principal la Constitución de Estados Unidos, que Alberdi había tomado de la traducción de un militar venezolano, García del Sena, que estaba plagada de errores, porque este buen señor ignoraba algunos rudimentos del idioma inglés y carecía de conocimientos jurídicos, como él mismo después lo reconoció. Tanto es así, que en nuestro texto perciben quienes hacen su exégesis, errores de traducción, que han pasado de la traducción de García del Sena a través de las Bases.

Pero eso no tiene importancia. Hay otras cosas que son más graves. Por ejemplo, la cláusula del artículo 26, que proclama la libre navegación de nuestros ríos. Es el caso de preguntarse si alguna vez han pensado los argentinos qué —como dijo alguien— los ríos los hemos libertado de nosotros mismos, porque eran nuestros.

Sr. Rojas (A.). — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Cooke. — No, señor diputado.

Sr. Rojas (A.). — Es la oportunidad...

—Suena la campana.

Sr. Presidente (Dri). — El orador no permite la interrupción.

Sr. Cooke. — Por razón de tiempo. Además, como lo veo tan ansioso, calculo que tiene una buena interrupción, no creo que histórica, pero por lo menos humorística.

El problema de la libre navegación de los ríos, que significa una entrega de soberanía, tal vez no fué mayormente culpa de los argen-

tinios. Los imperialismos extranjeros que, una vez conquistada el Africa, habían dirigido sus proas hacia América, eran muy hábiles y codiciosos. La libre navegación de nuestros ríos por vía de pactos internacionales y de la cláusula constitucional, es el dividendo que la rapacidad europea y norteamericana sacó del desenlace del drama argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Rojas (A.). — Insisto en pedirle que me conceda una interrupción.

Sr. Cooke. — Lamento negarla nuevamente, pero ya es prácticamente imposible en razón del tiempo.

A pesar de mi punto de vista revisionista, nunca he buscado el sentido destructivo en la revisión del pasado. Substituir estatuas por otras estatuas, no tiene valor alguno, y por eso, casi nunca hago críticas porque sí a hombres del pasado que cometieron errores funestos. De la revisión me interesa desentrañar la línea de la verdadera continuidad nacional.

Es evidente que aquellos Constituyentes, algunos de los cuales no eran muy letrados, se tenían que ver un poco encandilados cuando leían frases como éstas: «En Chiloé y en el Paraguay saben leer todos los hombres del pueblo; sin embargo son incultos y selváticos al lado de un obrero inglés o francés que muchas veces no conoce ni la «o».

«Con tres millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaréis la república.

«La libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas ingleses de origen. Sin la cooperación de esa raza es imposible aclimatar la libertad en parte alguna de la tierra.»

Pero nuestros Constituyentes, inteligentes o no, como en su mayoría eran auténticos argentinos, tenían el sentido de la protección de la raza y, por eso, no fueron tan lejos como los teorizadores de la Constitución. Así y todo, esos conceptos trascienden en alguna que otra cláusula.

Mi tesis es la siguiente: lo que la Constitución tiene de permanente, lo que la Constitución tiene de representativa, lo que de la Constitución no tocará ni esta Convención ni ninguna otra convención elegida libremente, no había que irlo a buscar en fuentes tan remotas. Había que mirar en el interior del país, como han de mirar estos constituyentes de 1948 y por encima de los ideólogos, de la teología y de los ejemplos extranjeros, extraer el sentido de libertad que anda en el fondo del alma de la raza. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

A mi juicio, le faltó confianza en lo nacional, en lo nativo, en la capacidad del hijo de la tierra. Creyeron que había que adaptar nuestro país a la Constitución perfecta que ellos creían dictar, cuando lo que debió haberse hecho era

lo inverso: hacer la Constitución ajustándola a la realidad del país.

Si no estuvieran en la esencia del alma argentina los principios fundamentales de la libertad, fuera vano, señor presidente, intentar crearla por medio de instrumentos jurídicos, que caducan cuando, en vez de ser representación de una realidad social, pretenden encuadrar a ésta en sus esquemas apriorísticos.

No digo esto con ánimo de hacer una crítica. Esos hombres —repito— hicieron lo que su capacidad y sus medios les permitían. Pero hay que prevenir este tipo de errores. Ya la «organización» nos demostraría que no era el hombre rudimentario, bárbaro y muchas veces despreciado, quien carecía de las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades que la Constitución consagra, sino que era la clase dirigente, la que buscó inmediatamente apoderarse de todos los resortes de la Constitución. Vemos una vez más que es en los humildes donde arraiga más hondamente el sentido de la solidaridad humana.

Noventa y cinco años de vigencia constitucional nos han enseñado que poco a poco va perimiendo todo aquello que es injerto, que es foráneo, y solamente va quedando y perdurando en nuestra Constitución aquello que está consubstanciado con la idiosincrasia criolla.

El régimen democrático ¿dónde lo iban a buscar nuestros Constituyentes? ¿En Europa, donde no existía más voto que el calificado? ¿A Inglaterra, el paradigma, la cuna de la libertad y de la democracia, donde no votaban sino los propietarios y sólo algunos de ellos? ¿Donde en el año 1865, muchos años después de sancionada nuestra Constitución, votaba un solo inglés de cada seis? ¿Donde en el año 1885 recién se concede el voto más o menos universal, pero con restricciones tales que casi dos millones de ingleses quedan al margen? ¿Podían acaso acudir a Francia, donde ni siquiera su Convención Constituyente, revolucionaria y contraria a los privilegios, se atrevió a establecer el sufragio universal, que contó sólo con el voto de cinco diputados? En plena época de vigencia de los principios de la Convención revolucionaria francesa, las tres quintas partes de los varones estaban privados del sufragio. ¿Podían tener en vista a Francia, donde en el año 1830, poco antes de nuestra Constitución, sobre 25.000.000 ó 30.000.000 de habitantes, lo que se llamaba el «cuerpo legal», es decir, la masa votante, no alcanzaba a 100.000 individuos?

¿Podían acudir a Estados Unidos? No, señor presidente. El sufragio universal, contra lo que se ha sostenido, nunca tuvo popularidad en el seno de la Convención de Filadelfia. Cualquiera sea la teoría que se sustente con respecto a la filiación histórica de los derechos de la Declaración de Independencia norteamericana, ya se

crea que deriva del pensamiento inglés a través de Locke y otros autores, ya se crea que deriva del *Contrato Social* de Rousseau, lo que es evidente es que esa Convención era recelosa del voto de las grandes multitudes desposeídas. Estados Unidos en el año 1830 teóricamente tenía el voto popular, pero es necesario llegar hasta 1869 para que la Constitución, en la enmienda XV, declare que no se puede privar a nadie de su derecho electoral «por razones de raza, color o condición anterior de servidumbre». No es este el lugar para observar procesos internos de otros países, pero el problema racial en el voto persiste, agudizado. Así, una parte importante del problema americano gira en este momento en torno a saber si los negros son tan ciudadanos como los blancos.

Los principios de democracia, de soberanía popular, había que buscarlos aquí, aunque se revelaran en forma inorgánica. Un hombre que no opina como yo con respecto a la actualidad política argentina, pero a quien yo siempre cito con gran respeto, sintetiza esto así: «Correlativamente a la descomposición del orden virreinal, crepita en sangrienta hornalla la guerra civil, de donde se sacan candentes formas crudas y primeras del verdadero orden constituyente del nuevo Estado. Sus jefes se federan; una patria sin Europa; igualdad: cada jefe lo es por voluntad, de los suyos. ¿Qué se va a hacer!; una lanza, un voto, y éste es así montaraz, el comenzar del genuino elegir y legislar, causa de las causas nacionales.»

Sr. Mercader. — Son palabras de nuestro colega Gabriel del Mazo.

Sr. Cooke. — Sí, señor diputado; él ha analizado con gran hondura muchos procesos argentinos.

La libertad de cultos, que es el orgullo de nuestra Constitución, la tolerancia confesional, ¿la íbamos a encontrar en Inglaterra, donde recién en el año 1829 se dió a los católicos el derecho de votar y ser elegidos miembros del Parlamento, no obstante lo cual durante muchos años permanecieron en situación de inferioridad? ¿En ese país, que recién en 1848 levantó las incapacidades de los judíos?

En materia social, ¿a dónde mirar? ¿A Inglaterra, donde Marx y Engels tomaron los ejemplos que dieron base a sus teorías sobre la situación del proletariado? ¿Donde en 1815 todavía se estaba discutiendo si se reformaban las leyes penales, que aplicaban la marca, la picota, el látigo, es decir, los instrumentos de tortura que nosotros ya habíamos quemado en la plaza pública en 1813? ¿Donde la pena de muerte se aplicaba para más de doscientos delitos, tales como cazar un conejo, cortar un árbol que perteneciese a otro o robar del escaparate de una tienda objetos por valor de más de seis chelines?

¿O en Francia, donde a cada movimiento revolucionario del siglo XIX siguió una represión violenta y sanguinaria contra el proletariado, represiones en las que se unían capitalismo y burguesía? ¿En Estados Unidos, donde muchos años después de la sanción de nuestra Constitución, la ley Sherman se aplicaba a los sindicatos gremiales obreros, equiparándolos a trusts capitalistas?

¿Y la esclavitud? En Inglaterra subsistió hasta 1863, en que se abolió lentamente, previas inmensas indemnizaciones a los dueños de esclavos; en Francia recién se suprimió en la Constitución de 1848; en Estados Unidos recién pudo desaparecer después de la sangrienta guerra de secesión, cuando la fuerza industrial del Norte necesitó de mano de obra.

Yo podría seguir ofreciendo ejemplos muy ilustrativos, tendientes a demostrar esta tesis de que lo básico, lo perdurable de nuestra Constitución, se encontraba identificado en forma inorgánica y primaria en la modalidad del hombre argentino.

En síntesis, opino que la Constitución, tal cual fué sancionada, pudo haber sido la base del ordenamiento jurídico argentino: desgraciadamente la «organización nacional», con la oligarquía en los comandos, se encargó de desmentir los pronósticos optimistas. Las clases dirigentes endosaron al pueblo la minoría de edad, estableciendo que no estaba capacitado para el manejo de la cosa pública. La oligarquía que había tratado al paisano en forma zalamera porque era un arma de guerra y lo había adulado en su jerga por medio de Ascasubi, una vez que cayó Rosas y se eliminó Urquiza, proclamó la necesidad de exterminar al gaucho porque era enemigo de la «civilización».

Años más tarde, cuando la primera generación de los hijos de inmigrantes se hizo presente con toda la fuerza que la tierra le transmitía por encima de los orígenes de su nacimiento, entonces la clase dirigente vino a descubrir que el pueblo no estaba suficientemente educado; que había que educar al «soberano» y esa generación fué a formar la «chusma».

Llegó el año 90 con su gran estallar de pasiones: «Estamos ante los bárbaros de la civilización; ante la familia bastarda de los enriquecidos», dijo ese año un argentino desde una alta tribuna. El pueblo fué vencido por las armas, y a pesar de que Alem proclamó la derrota del gobierno, el hecho es que cayó un hombre pero el régimen perduró.

Sr. Mercader. — No fué Alem quien dijo eso; él no proclamó la derrota del gobierno, sino el senador Pizarro.

Sr. Cooke. — Se proclamó en un manifiesto la derrota del gobierno, según consta en la historia de Barroetaveña.

Sr. Mercader. — A Alem hubo que ir a buscarle a la cárcel el día que cayó el gobierno.

Sr. Cooke. — Sí, señor. Dijeron que la revolución estaba vencida pero que el gobierno estaba muerto.

Sr. Presidente (Dri). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Dri). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Mercader. — La alusión que ha hecho con respecto a la identidad del proyecto de Alberdi con la mala traducción inglesa debe ser aclarada, porque el proyecto en realidad no se le parece en nada. En eso el señor diputado da a entender que ha leído la mala traducción inglesa al referirse a la versión de las palabras «in orden» que Alberdi incorporó a su proyecto como «en orden».

Sr. Cooke. — ¿Y, por ejemplo, la cláusula que se refiere a la «entrada de personas», que Alberdi consagró?...

Sr. Mercader. — Si se me dijera que se tomó aquello de la mala traducción por los propios Constituyentes del 53...

Sr. Cooke. — El señor diputado está discutiendo una cosa que no tiene razón de ser.

Sr. Mercader. — El señor diputado ha tomado ese dato de un folleto de Aldao.

Quiero significarle que la mala traducción fué mejor interpretada por los Constituyentes del 53 que por el mismo Alberdi.

Sr. Cooke. — ¿Y para decirme eso, que no contradice lo que estoy afirmando, me interrumpe?

Por fin la Constitución obtiene su primer triunfo.

En el año 1916 las masas populares, a través de Yrigoyen, llegan por primera vez al gobierno. Y este triunfo ha de repetirse treinta años más tarde, cuando de nuevo las multitudes argentinas llevan a un caudillo, con pensamiento de trayectoria histórica a ocupar la primera magistratura: el entonces coronel Perón.

Hace unos instantes los señores diputados Vítolo y Balbin se formulaban y nos formulaban angustiosos interrogantes: «¿qué es lo que se pretende cambiar?», «¿cuál es la doctrina de la reforma?» Creo que la exposición que he hecho puede considerarse una interpretación honrada de las limitaciones que tiene esta reforma.

Lo esencial, lo que un autor ha llamado la «parte imponente» de la Constitución, ha de mantenerse, como así también todo lo que sea de la esencia de lo nacional. El sistema representativo, republicano y democrático no ha de tocarse. No necesitamos decirlo en la ley, porque nos estaríamos agravando nosotros mismos si

creyésemos, a esta altura de la vida argentina y en cumplimiento de los postulados de una revolución de carácter democrático, que es necesario establecer en el artículo 1º de un proyecto que no debe cambiarse dicho sistema.

Y el respeto a los derechos individuales, sobre la base de que este movimiento revolucionario sostiene la concepción cristiana de que el hombre es el valor final en la tierra.

La Convención Constituyente, democráticamente elegida, no tiene trazados puntos concretos, pero sus deliberaciones han de estar inspiradas por derroteros de patriotismo que caracterizan todas las grandes decisiones nacionales. No tengan miedo los señores diputados: la reforma constitucional argentina será realizada por argentinos. Los grandes errores que fueron cometidos en este país, los errores que significaron desviaciones en la trayectoria histórica, jamás fueron realizados por representantes auténticamente elegidos por el pueblo. Ese es un hecho que se observa a través de toda nuestra historia.

A pesar de que la Convención Constituyente no tiene mandato limitado, yo que soy un simple representante del pueblo, yo que tengo la honra de ser un representante de esa soberanía, quiero dejar apuntadas algunas reformas que creo son necesarias.

El artículo 26, sobre libre navegación de los ríos, es una vergüenza nacional.

La prohibición de otorgar ventajas a un puerto respecto de otro debe derogarse para que toda esta corriente de tráfico marítimo que converge a Buenos Aires pueda ir derivando hacia otros puertos del litoral argentino que merecen mejor suerte.

Hay que modificar las cláusulas del sistema rentístico, que son anticuadas, y que están basadas en disposiciones impositivas ya superadas.

Hay que modificar el artículo 25, sobre inmigración europea, que aparte de ser un disparate, no se aplica.

Igualmente, hay que modificar el artículo 20, por el cual solamente con dos años de residencia un extranjero obtiene naturalización; y la parte del artículo 21 que autoriza a un ciudadano extranjero naturalizado a no prestar servicios militares. Estas son cláusulas que encierran principios de indefensión para el país.

Hay que solucionar el problema de los territorios nacionales, al que se ha referido el señor diputado Colom.

Hay que establecer la elección directa del presidente, del vicepresidente y de senadores nacionales.

Hay que derogar la prohibición de reelegir al presidente, cláusula que no es de la esencia del sistema republicano, sino que es una simple garantía, que no ha funcionado, porque el fraude

no presupone que un hombre lo haga en su propio beneficio. El hacer o no hacer fraude es una cuestión de calidad moral. Quien hace fraude, lo hace lo mismo para sí que para el sistema de que forma parte o la clase que se interesa en defender.

Hay que dejar librado a leyes del Congreso el número de los ministros del Poder Ejecutivo, quebrando la rigidez constitucional.

Hay que declarar la protección constitucional de los «derechos intelectuales», para que todos los hombres que viven de la creación del espíritu tengan reconocida la legitimidad de su derecho. Al efecto, hay que substituir la cláusula 17 actual, que equipara los derechos derivados de la creación intelectual con los de la propiedad, de acuerdo con doctrinas hace mucho tiempo superadas.

Hay que reglamentar constitucionalmente el derecho de hábeas corpus y de amparo a los derechos y a las personas, porque nosotros —lo podemos decir— somos partidarios de la intervención estatal en todos los órdenes de la vida argentina, menos en lo que atañe a la personalidad íntima del individuo. Creemos que el Estado debe intervenir en las cuestiones económicas y que debe regular todo tipo de relación entre capital y trabajo, que debe ejercer el control de todo lo económico; pero, al mismo tiempo, necesitamos reglamentar en forma más completa de lo que establece el actual texto, el amparo de los derechos individuales.

Hay que incorporar los derechos del trabajador, que posiblemente sean una simple declaración de anhelos, que en sí solos no significan nada, pero que tienen mucho valor porque cristalizan en el texto constitucional la voluntad de los argentinos de distribuir equitativamente la riqueza de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Hay que crear un tribunal de casación para evitar el desorden jurisprudencial de que pueden existir tantas leyes como jueces, a fin de que pueda fijarse una interpretación única de todas las leyes de la República.

Y no puedo seguir proponiendo otras reformas, por falta de tiempo.

El señor diputado Vítolo, al oponerse a este proyecto, hizo la exégesis de la revolución peronista, y la presentó como contradictoria consigo misma, descalificándola como revolución. Dijo que no es una revolución, porque no cambió los moldes jurídicos. De acuerdo con su propia teoría, nosotros únicamente podríamos ser una revolución cometiendo los atropellos constitucionales e institucionales que el señor diputado teme. El señor diputado Vítolo estuvo elocuente, pero me voy a permitir rectificar sus conceptos.

Nosotros sabemos perfectamente que la revolución del 4 de junio tuvo diversos avatares;

sabemos que a través de esos avatares no mantuvo una rígida línea de conducta. Lo podemos decir, porque es la verdad. No hay que esconder la verdad; «una verdad que se esconde se vuelve venenosa», ha dicho alguien. Pero el hecho es que la revolución del 4 de junio fué esencialmente una revolución contra un estado de cosas, contra un proceso de subversión moral del país. Los señores diputados podrán discrepar totalmente con el juicio que nosotros tenemos del saldo que ha dejado la revolución del 4 de junio, podrán enjuiciarla, pero hay un hecho innegable: el propósito fundamental de la revolución del 4 de junio estaba en su proclama, y también lo declaró el coronel Perón más adelante: «La era del fraude ha terminado.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Vino la revolución, terminó con el fraude y el Ejército Argentino volvió a sus cuarteles con honor. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Cualesquiera hayan sido los errores que cometieron sus hombres, el hecho es que salió de los cuarteles para devolver las libertades cívicas, y volvió a ellos cuando cumplió con su misión. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Mercader. — Pero se quedaron en el gobierno...

Sr. Cooke. — Sí, pero luego de la revolución del 4 de junio...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Santander. — Imponiendo su voluntad...

Sr. Cooke. — Es cierto que la revolución se quedó en el gobierno, pero no se quedó como hecho de fuerza, porque cuando el ejército salió de los cuarteles, lo hizo para devolver las libertades cívicas, y no para obligar a que ganase determinado partido, sino el que el pueblo quisiese. No fué su culpa si ganó el coronel Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Este movimiento trasciende de lo político y contempla los aspectos sociales y económicos. Refirmado el 17 de octubre a través de la masa trabajadora que impuso su voluntad en una expresión multitudinaria sin precedentes en el país, buscó inmediatamente el cauce de lo nacional y la destrucción de lo que no era de su esencia, de lo que era foráneo, de lo que no era lo nuestro, de lo que se nos había impuesto artificiosa o violentamente. Buscó la eliminación de todo aquello que estaba distorsionando nuestro movimiento económico y que estaba distorsionando nuestros valores espirituales en un escamoteo permanente que nos había deparado largas y bochornosas jornadas de sumisión.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Esto es una revolución, aunque no trastrueque valores jurídicos, aunque no arrase con las instituciones argentinas. Con que hiciese cumplir la Constitución, ya hubiese sido una revolución; pero no podía detenerse ahí, porque tenía el impulso necesario para ir hacia los grandes planteos nacionales.

Esta revolución es típicamente americana; fuera de esa tipicidad americana, no hubiese sido una revolución. Es revolución, en cuanto expresa valores nacionales, en cuanto radica en los deseos y esperanzas de la masa argentina, en cuanto tiene como consignas no los conceptos europeos del siglo XVIII ni los sofismas del siglo XIX, sino que sigue las premisas rigurosas de todo movimiento liberador en Iberoamérica: la reconquista económica, la liberación nacional, el afianzamiento de sus propios valores espirituales y morales.

Fuera de esta interpretación, que es fatal y es precisa, cualquier otro análisis es un poco juego artificioso de retórica, con frases que a veces conservan su relumbrón, pero que siguen marginando la realidad.

En el actual panorama universal, donde dos generaciones han sufrido la tragedia de dos grandes guerras en el curso de pocos años y que admiten la posibilidad de una tercera; en esta época en que la primacía del imperialismo internacional es factor decisivo, esta revolución, con sus errores e imperfecciones, es un símbolo para otras nacionalidades. Lo es para todos aquellos que siguen oprimidos por la codicia y las contradicciones de la exacerbación capitalista, que busca desesperadamente sobrevivir.

Se había creado en nuestro país una serie de mitos que se ha ido destruyendo después de la revolución. En lo económico nos habían adscrito a teorías liberales pretendidamente universales, que se suponía tenían vigencia en todas partes del mundo. A su amparo, los derviches fanáticos del librecambio convirtieron a nuestro país en una especie de sociedad anónima con asiento en lejanos países y con empresarios que representaban al mítico capital extranjero. También se nos sostuvo la falacia de que la libertad individual suponía la absoluta libertad económica, creando el absurdo de que democracia política y capitalismo fueran términos de un silogismo falsa y maliciosamente difundido.

Contra estos vientos doctrinales que nos azotaron muchos años nuestra patria tuvo que presentar un frente unido, con un pueblo dispuesto a afrontar el deber de la hora y tuvo que tener al hombre que nuclease las voluntades y aprovechara las condiciones que en ese momento existían, para que un país colonial consiguiese su liberación.

Hemos concretado esos planteos teóricos en muchas realizaciones que no enumeraré, que

todos los señores diputados conocen, que son fundamentales. Tanto en lo espiritual como en lo económico y social, se ha realizado una extraordinaria transformación y nos asombra, señor presidente, que ello haya sido hecho sin el tributo de dos cosas que son inexorables en los movimientos transformadores: tiempo y sangre. Tiempo, ahorrado en generaciones; y sangre que es el hilo rojo con que todas las nacionalidades necesitan integrar la trama del tejido de su destino.

El tiempo está trabajando a nuestro favor. Estamos construyendo para el futuro. Algunos creen que el tiempo nos va a derribar. Ya verán que están muy equivocados.

Ese es el sentido de esta revolución auténtica. Se nos podrá decir que es imperfecta, pero es una revolución nuestra. Esa autenticidad nos da los títulos suficientes como para encarar la responsabilidad histórica de presentarnos a pedir la reforma de la Constitución.

Sé que el pensar en la reforma de la Constitución del 53, hará que algunos se desgarran sus túnicas, se cubran sus rostros horrorizados y llenen sus cabezas de ceniza.

Nosotros no creemos que los males del país fueran fruto de la Constitución. Sabemos que ella no pudo evitarlos. El hecho es que esa Constitución, bien o mal interpretada, sirvió siempre para justificar las grandes entregas de la soberanía, porque lo mismo se la invocaba para malvender un ferrocarril construido por el esfuerzo de los argentinos que para regalar a un ferrocarril extranjero una legua a ambos costados de la vía. (*Aplausos.*)

Las causas son otras: el espíritu antinacional, a veces por servilismo, a veces por deshonestidad, muchas veces por falta de discriminación de lo nacional frente a lo extranjero; el predominio de las doctrinas económicas universales; los intérpretes nativos del imperialismo que, a propósito o sin querer, se prestaban a esa entrega permanente, que era la más terrible, porque era entrega ideológica; el espejismo que durante mucho tiempo existió en ciertas clases argentinas, de la superioridad de lo europeo sobre lo nativo, y de lo americano del Norte sobre lo indoamericano. Esos conceptos exacerbaban la protección a ciertos derechos y dejaban desprovistos a otros no menos importantes.

Tal es nuestro balance. El balance de una generación que se niega a vivir en adulterio mental con lo extranjero. Estamos, bien o mal, haciendo; estamos en una especie de voluntarismo que nos está colocando en el puño hacer, por encima de todo pesimismo. Hacer, como dijera un filósofo, es el antinihilismo; hacer es la rebelión contra la nada.

Si existe una némesis histórica es ésta, en que un pasado intenta devorar a un presente a través de los férreos sistemas que la razón

extrae. Pero surge eso que Bergson llamaba *élan vital*, que se desarrolla como una melodía imprevisible, como el ánimo de un dios que activamente va mostrando su progresivo esplendor y que se manifiesta ante nuestra razón a veces a través de máscaras estáticas, pero tras las cuales intuimos el rostro, —inefable, cruel, pero auténtico— que improvisa los gestos novedosos que terminan por quebrar la inmovilidad, en busca de un nuevo equilibrio. De pronto, una fuerza creadora impulsa al hombre a una nueva expresión de su ser, a afirmarse, como quería Unamuno, trágicamente en la vida.

Y ese tránsito, ese salto hacia la integración, es pasión milagrosa que exalta sus cualidades hasta la muerte y arrastra a los individuos y a los pueblos en un intento revolucionario de creación, que es lo que está viviendo el pueblo de la República.

Nosotros somos la vida en el proceso histórico argentino y estamos plantados tranquilamente frente al porvenir, extrayendo enseñanzas del pasado que sabemos que condiciona nuestro presente, que sabemos que nos crea obligaciones para el porvenir. Pero creemos que ha llegado el momento de plasmar la realidad social argentina de un país económicamente libre, políticamente soberano, socialmente justo.

Cuando hagamos eso, la Convención Constituyente ha de adaptar la máxima ordenación jurídica de nuestra realidad. Ordenación que no podrá dejar de ser ni representativa, ni republicana, ni democrática, ni desconocer los derechos individuales, ni podrá romper lo que ha sido la esencia, la médula de la nacionalidad; no lo podrá hacer porque esta reforma constitucional va a ser la reforma de una revolución argentina que está dispuesta a cumplir su destino histórico como generación argentina y americana. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sobral. — Está viviendo el Parlamento argentino una de sus horas más trascendentales y la República una de sus horas más profundamente inquietantes.

Se ha abierto, por decisión de la mayoría, la revisión de la Constitución. Se está tratando, señor presidente, un proyecto de reforma total de la Constitución nacional, presentado inopinadamente, inesperadamente.

No voy a repetir los argumentos sobre este aspecto del asunto que tan brillantemente han sido expuestos por mis compañeros de sector. Tampoco voy a repetir el estado espiritual en que vive el país por falta de sus garantías fundamentales, lo que también ha sido expuesto en tono elocuente, con acento cargado de argentinidad y con palabras definidas por parte

mis compañeros de sector. Simplemente voy a anotar la forma, el procedimiento, la intención, la manera de enunciarlo y de plantearlo, así, inopinadamente, repentinamente, encubriendo su verdadero sentido.

Hombre formado en un partido de magnífica tradición de lucha en favor de las ideas y de la libertad del hombre; hombre formado en una agrupación que según palabras de Yrigoyen, es una religión de civismo para cada uno de los miembros que la componemos; hombre formado en una concepción de la vida y en una concepción del hombre cargado de dignidad moral, claro está que debo decir algunas palabras frente a esta forma de abrir el debate sobre reformas a la Constitución nacional.

Bien se ha apuntado por mis compañeros de sector que a la Unión Cívica Radical no le asombra ni tampoco le teme a una reforma de la Constitución. Bien se ha dicho aquí, y debo reafirmarlo, que a la Unión Cívica Radical no le llena de inquietud, ni tiembla de miedo, ni se sofoca de angustia su corazón cuando se dice que se va a reformar la Constitución para hacer efectiva la revolución social del país.

No nos llenan de miedo ni de zozobra esas palabras así pronunciadas porque estamos totalmente seguros que la única revolución en profundidad y con auténtico sentido argentino ha sido iniciada ya por la Unión Cívica Radical, por eso no nos inquietan palabras sin respaldo, sin tradición.

Estamos juzgando un procedimiento, y dentro de él un sentido, una oculta orientación, estamos juzgando digo, la forma de abrir este debate de trascendental importancia para el país, así de la noche a la mañana, sin un debate previo de esclarecimiento de la conciencia pública en torno de este tema, levantando tribunas y llevando la palabra escrita y oral a todos los ámbitos de la República, sin que los partidos, todos los que intervienen en la vida nacional —especialmente el que gobierna la República por decisión de su mayoría—, se hayan pronunciado sobre los puntos fundamentales en que es menester la reforma de la Constitución. Pero se adopta esa decisión en un instante, sin haberse cumplido esos requisitos previos, para poner al pueblo en el debate, para que pueda participar en él, a fin de que la Constitución que se dicte sea el encuentro de todas sus corrientes espirituales, que sea la elaboración surgida de la propia conciencia popular.

Antes de llegar a esa decisión era menester decir previamente cosas esenciales, fundamentales; era necesario y está obligado a hacerlo, sobre todo el sector mayoritario para definir de una vez por todas su filiación dentro de las ideas humanas y dentro del sistema de las libertades argentinas; era necesario fijar de una vez por todas dentro de qué ámbito, dentro de

qué tipo de ideas, dentro de qué juego de posiciones íbamos a entrar para revisar la Constitución nacional.

Esto lo decimos, señor presidente, porque venimos de un partido, de una agrupación que tiene perfectamente bien establecida su concepción y bien fijada su posición. Por eso recién decía que esta reforma, lanzada así inopinadamente, sin una previa declaración que fijara los puntos fundamentales de esta reforma, llenaba de desasosiego y también de temor porque quienes la precipitan y la lanzan no tienen la trayectoria suficiente en la vida cívica del país, en un proceso de decantación, para decir: lo afirmamos y lo respaldamos en estas doctrinas o en estas ideas o en esta conducta cívica a través de treinta o de cincuenta años de vida en el país.

La Unión Cívica Radical puede decir que no teme, porque puede ofrecer al pueblo el respaldo de su trayectoria y de su tradición. Por eso, antes de entrar a otras consideraciones que hacen a la cuestión planteada, o sea a la forma en que se presenta la redacción del artículo 1º sin determinar los puntos esenciales de los que no podría salir la convención reformadora, quiero decir —afirmando en las palabras de la declaración de fe doctrinaria que tiene incorporada la Unión Cívica Radical que es para cada uno de nosotros nuestro breviario, nuestra razón y que justifica nuestra posición— cuál es la posición de la Unión Cívica Radical en este debate de trascendental importancia.

Es que la Unión Cívica Radical, por razón de sus planteos y de sus bases no puede tener miedo en ningún instante a cualquier reforma constitucional, por más que se diga avanzada; y no puede tenerlo, porque no hay ninguna reforma de tipo revolucionario que quiera e invoque esta palabra y hasta ahora no ha armado, si previamente no parte del hombre, porque la verdadera y la auténtica revolución parte del hombre para la realización de su destino porque la auténtica revolución arranca de él. Hace un momento escuchaba al señor diputado Cooke, que hacía toda la trayectoria de las vicisitudes, angustias y adversidades que sufre la humanidad y el hombre en busca de su liberación; en esto está diciendo que las conquistas que se van ganando es para la libertad del hombre, para hacer efectiva la liberación del hombre.

Esas razones determinan el planteo de fondo de la cuestión y en torno de ello es necesario también dejar fijada una posición. Algunos diputados del sector de la mayoría han querido enjuiciar el sistema del liberalismo, confundiendo aspectos parciales ya superados del mismo, para querer llegar por una forma un tanto equivoca y sospechosa a enjuiciar todo un sistema de ideas que aun mantiene por su *substructum* fundamental, la perennidad de su esencia.

Dije que la revolución debe plantearse —y así lo tiene establecido la Unión Cívica Radical

— por el hombre, porque afirmamos que la personalidad humana es el *abstractum* de un valor espiritual supremo, como bien se ha afirmado y que, por lo tanto, debe reconocerse y garantizarse su plena autonomía. Que constituye esta posición la expresión teórica de una especie de emoción profunda que hallamos, sobre todo, en la cultura cristiana y mucho más todavía en la civilización moderna, consistente de un sentido humano, de un respeto a la personalidad y de una confianza en las posibilidades del espíritu es un respeto absoluto al santuario de la personalidad humana, como instancia ética inviolable.

Ahí encuentra razón de ser, ahí se afirma, de ahí parte; ésa es la raíz de cualquier revolución que se quiera hacer de carácter social, político o económico. Y en este aspecto la mayoría no ha dicho su palabra, no ha fijado su posición.

Creo imprescindible para dejar más clara nuestra posición, leer la declaración de fe doctrinaria de la Unión Cívica Radical. Quien la conoce, puede decir bien que un partido que ostenta esta declaración de fe doctrinaria no puede temer a ninguna revisión constitucional.

Dice esa profesión de fe: «El radicalismo es la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino, de la auténtica realización de su vida plena en el cultivo de sus bienes morales y en la profesión de los grandes ideales surgidos de su entraña. Hunde sus raíces políticas en lo histórico de la nacionalidad y constituye una requisitoria contra toda filosofía material de la vida humana y del destino de la Nación en el mundo. Así el radicalismo se identifica con las más nobles aspiraciones de los pueblos hermanos y lo argentino se articula y adquiere sentido esencial, en la lucha emancipadora sudamericana y en el anhelo universal por la libertad del hombre.

«Desde el fondo de nuestra historia, trae el radicalismo su filiación, que es la del pueblo en su lucha para conquistar su personería. En la tradicional contienda que nutre la historia argentina, el radicalismo es la corriente orgánica y social de lo popular, del federalismo y de la libertad, apegada al suelo e intérprete de nuestra autenticidad emocional y humana, reivindicatoria de las bases morales de la nacionalidad: es el pueblo mismo en su gesta para constituirse como Nación, dueña de su patrimonio y de su espíritu.

«Por lo tanto, la Unión Cívica Radical no es un simple partido, no es una parcialidad de lucha en su beneficio, ni una composición de lugar para tomar asiento en los gobiernos, sino el mandato patriótico de nuestra nativa solidaridad nacional y la intransigencia con que debe ser cumplido, el sentimiento radical indeclinable de la dignidad cívica argentina.

«Esa es la razón por la que el radicalismo es una concepción de vida, de la vida toda del

pueblo; y la revolución radical al plantearse partiendo del hombre y de su libertad, hace de la política una creación ética, indivisible en lo nacional e internacional, que abarca todos los aspectos que al hombre se refieren, desde el religioso hasta el económico. Por eso el radicalismo no se divide según las parcialidades de clases, de razas ni de oficios, sino que atiende al hombre como hombre, con dignidad, como ser sagrado. Por eso para el radicalismo los fines son inalterables: los de la libertad y la democracia para la integración del hombre; así como pueden ser variables los medios, porque son instrumentos, y variables son las condiciones sociales de la realización nacional.

«En el proceso transformador que vive el mundo, transórmase también el Estado, pero el radicalismo, centrado en su preocupación por el hombre, no puede invertir los fines del Estado, cuyo intervencionismo sólo puede referirse a la administración de las cosas y a los derechos patrimoniales, y no a los derechos del espíritu, morada de la libertad humana.

«El mundo entero sufre de un mal profundo proveniente de no adecuar las posibilidades materiales modernas a fines de emancipación del hombre. El radicalismo cree que sólo una cruzada de honda pulsación humana por la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del imperialismo y del absolutismo en todos sus aspectos, podrá salvar al mundo en su grave crisis, así como renueva su fe en el destino de los pueblos de nuestra grande hermandad continental, unidas en sus libres soberanías y luchando por conquistar, junto a los instrumentos de la liberación política, el sistema de garantías sociales contra los privilegios económicos que ahogan la libertad y niegan la justicia.»

Frente a esta magnífica declaración de fe doctrinaria que es nuestro ideario, nuestro respaldo y el fundamento de nuestras posiciones, no podrá haber nadie que en estos instantes de la vida política pueda decir que la Unión Cívica Radical, frente a problemas como éste, niegue su aprobación porque tiene miedo al planteamiento de un llamado sentido revolucionario. Aquí está el planteamiento en toda su total resolución y en toda su reciedumbre moral.

Un partido que así se exhibe podrá decir que no es oportuna, como se ha dicho hoy, la reforma de la Constitución, porque parte de las garantías fundamentales de la República. Un partido que así enuncia sus postulados, decantados después de una larga jornada, para fijar mejor su posición doctrinaria, no puede decirse que esté lanzado en este momento y ante este proyecto en una contrarrevolución o colocado en posiciones reaccionarias.

Es un partido que está en las primeras avanzadas. Pido tiempo al tiempo para que quede demostrado que la única agrupación política que mantiene viva y realizará la revolución popular, es la Unión Cívica Radical.

Tales ideas esenciales no son una exposición de carácter teórico ni enunciados del tipo doctrinario. Están incorporadas en forma de bases precisas, de determinaciones claras y de principios inconfundibles, en perfecta congruencia con su raíz esencialmente filosófica.

Voy a enunciar algunas de las bases de la acción política de la Unión Cívica Radical, para demostrar más acabadamente no solamente en la teoría o doctrina sino en sus planteos prácticos, en sus realizaciones. Así, entre otros aspectos, dice: «Organización de una democracia económica. Control de la economía sobre la base de un planeamiento formado por los órganos representativos de la voluntad popular que coloque a la riqueza natural, la producción, el crédito, las industrias, el consumo y el intercambio internacional, al servicio del pueblo y no de grupos o minorías, para constituir un régimen que subordine la economía a los fines y derechos del hombre y movilice sus recursos no en el limitado beneficio de los poseedores, sino del desarrollo nacional y el bienestar social.»

Cabe ahí la revolución más trascendental en materia económica.

Sr. Rumbo. — ¿De qué fecha es?

Sr. Presidente (Cámpora). — No interrumpa al orador el señor diputado por la Capital.

Sr. Sobral. — Otra base establece: «Nacionalización de servicios públicos, energía, transporte, combustible y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen *cartells* o monopolios, resguardando en tal forma al ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales, provinciales, comunales o cooperativos, con participación de usuarios, productores, técnicos y obreros.»

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Sobral. — Sigo: «Democratización industrial. Participación de técnicos, empleados y obreros en la dirección y utilidades. Libertad sindical y derecho de huelga.» Eso es lo que sostiene la Unión Cívica Radical.

Sr. Rumbo. — ¿Desde cuándo?

Sr. Rudi. — Desde siempre.

Sr. Rabanal. — Desde las primeras horas.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Sobral. — Voy a contestar a esas manifestaciones un tanto estremecidas de la mayoría, que todavía no ha entendido cuál es el contenido ideológico de la Unión Cívica Radical. Este ideal esencial de la Unión Cívica Radical es muy anterior al motín septembrino, que lo ha frustrado en su realización, del cual los señores diputados son continuadores directos.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Sobral. — Continúo: «Reforma agraria inmediata y profunda que coloque la tierra, que no debe ser una mercancía, al servicio de la sociedad y el trabajo.»

Como se desprende de la profesión de fe doctrinaria y de las bases que acabo de leer, la Unión Cívica Radical no puede temerle a ninguna reforma constitucional.

La diferencia está en la forma de enunciarla y en el oculto propósito que ella está denunciando. Para nosotros la declaración de la necesidad de la reforma debe fijar cuatro o cinco direcciones fundamentales que señalen la continuidad histórica de nuestro sistema de ideas, de nuestra vocación por la libertad. Es que la auténtica y verdadera revolución está en el destino del hombre para el cumplimiento de sus fines.

En esta hora de confusión, en que las mentes están perturbadas, en que el mundo parece lanzado a la violencia, en que parece que el hombre hubiera llegado ya a crearse él mismo un sistema de esclavitud, queremos declarar que no podrá haber ni habrá una tentativa de reforma que vaya contra esos principios fundamentales. Por eso nosotros hacemos el planteamiento de la continuidad del sistema de ideas liberales, liberalismo que no es el que quiere presentar equívoca y confusamente la mayoría.

Nosotros queremos, como hombres de este tiempo llegar a la superación de esos principios. Por eso, voy a citar, para terminar, porque se vence el plazo reglamentario, las palabras de un tratadista que ha dejado perfectamente establecido ese concepto. Dice: «En cambio, podría decirse que la esencia perenne de la concepción liberal basada en la dignidad ética y en las necesidades del espíritu, esencia que sobrevive incólume a través de las fallas que tuvo el liberalismo moderno e infectada por éstas, consiste en proclamar que en todo caso y sea cual fuere la estructura que se vaya a dar al Estado y las finalidades concretas que se asignen al derecho, éste debe respetar y garantizar las libertades fundamentales del espíritu y de la autonomía individual, para cumplir los fines personales propios, mediante la elección por propia cuenta de los medios que el

sujeto humano considere adecuados. Esta idea no es privativa del liberalismo moderno, sino que es esencial a toda concepción personalista o humanista. Postula, no como el liberalismo moderno la organización social a base de un máximo de libertad individual sino la defensa inexpugnable de aquel mínimo de libertad, que es proyección de la dignidad ética del individuo y de la autonomía del espíritu. Conforme con esa idea, se puede admitir la limitación múltiple de la libertad en diversos órdenes, de acuerdo con lo que reclamen la necesidad de la coordinación social, la garantía de las convicciones para que pueda ser un hecho efectivo la libertad fundamental del sujeto, las urgencias del bien común en determinado momento pero, en cualquier caso y sea cual fuere el régimen que se adopte, se exige el respeto y la garantía de la libertad personal del individuo.»

Estos principios esenciales, señor presidente, no los tiene ni los consagra en ningún aspecto, el proyecto de reforma constitucional ni está demostrado como ideario del sector mayoritario. De ahí nuestra preocupación y nuestro temor. Pero la Unión Cívica Radical a su hora dirá su palabra definitiva.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). —Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. García. —Confieso, señor presidente, que me toca intervenir en el debate cuando prácticamente está concluido. Hemos escuchado esta tarde brillantes exposiciones: las del sector que integro, expresando la necesidad de la reforma de la Constitución y las del sector opositor haciendo un problema de procedimiento; pero el planteo en sí, debiera concretarse en una sola pregunta: ¿es necesaria o no la reforma de la Constitución? Entonces observaríamos que existe unanimidad en la Cámara, en cuanto a que es necesaria la reforma de la Constitución. Pero surge el planteo del bloque radical que, por razones circunstanciales, eminentemente políticas, calcula que éste no es el momento propicio para discutirla.

Yo he de decir, contestando el argumento más fuertemente esgrimido, que el país se va a enterar con sorpresa de la discusión de fondo del problema: que la opinión pública argentina no tiene juicio respecto a la reforma de la Constitución. Yo contesto a la bancada radical que ella fué bandera en su programa electoral en los años 1931 y 1937. ¿O es que el pueblo argentino ha vuelto hacia atrás y esas masas radicales, que hoy ya no responden a las antiguas directivas, han variado de juicio en cuanto al proceso histórico de la Constitución?

¿Cómo es posible que se exprese que el problema se ignora si en este mismo instante la convención nacional del radicalismo estaba discutiendo los distintos proyectos de reformas a la Constitución?

Se sigue un criterio eminentemente político. Basta que la bancada mayoritaria afirme «a» para que el sector opositor diga «zeta». Nosotros cargamos con la responsabilidad histórica porque comprendemos la magnitud de esta hora, porque sostenemos la trascendencia de nuestras resoluciones sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros, con el juicio de las generaciones futuras, porque generación que no avanza, es generación que se detiene, y como dice Goethe «detenerse es morir». Y ésta, la nuestra, la que interpreta el peronismo en la Argentina, es una generación de encrucijada. Nació en el fragor de la primera guerra, vivió azoradamente el desarrollo de la segunda y con ojos atónitos ve que un mundo loco quiere desangrarse en la tercera. Nosotros queremos construir el aparato jurídico para que nuestros hijos tengan instituciones libres dentro de la paz, del progreso y la solidaridad humana. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Por eso, señor presidente, el planteo se hace en una forma indirectamente interesada. Se dice que no se puede afrontar el debate por razones de libertad de prensa, de libertad de radio, de libertad parlamentaria, argumentos que ya fueron rebatidos.

Sr. Rojas (A.). —Nadie los ha rebatido.

Sr. García. —Pero hay otros argumentos, señor presidente, que expresó el bloque minoritario a través de su presidente, el doctor Balbin, de que está en peligro el sentido federalista, agregando —que ya era una expresión sentida de nuestra parte— que la nueva Constitución iba a ser centralista y para expresar su opinión tomó como base la suposición de que la Policía Federal y la Secretaría de Trabajo iban a desarrollar una acción que impondría un nuevo ejemplo dentro de la Constitución.

Nosotros tenemos un juicio distinto: sabemos que todo lo que tenga raíz histórica, que todo lo que tenga sentido de continuidad, que todo lo que tenga sentido del pasado, no podrá ser negado ni por el peronismo ni por ninguna fuerza futura de opinión política en la Argentina; no somos tan torpes los peronistas, no somos tan incapaces intelectualmente, aunque no hayamos pasado por la universidad para comprender que en la Argentina hay que tener alma y sentido argentinos para subsistir como expresión partidista dentro de su genio. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Nosotros no podemos aceptar en silencio esa expresión dicha y repetida de que dentro de unos años el peronismo va a tener un cartel, de que fué la contrarrevolución en la Argentina.

la Cuando apareció esta fuerza aglutinadora de la opinión argentina, no había ninguna otra fuerza orgánica ni ningún proceso revolucionario en el país, a no ser que la bancada opositora entienda por revolución la creación del Instituto Movilizador, del Banco Central, de las juntas reguladoras, el dominio de Bunge y Born y de Dreyfus. Frente a eso el peronismo sigue fuerte como una revolución; frente a esas maniobras del capitalismo internacional y de sus adherentes internos, el peronismo fué fuerza de negación. Fué fuerza de afirmación en el sentido positivo y revolucionario de la palabra, cuando logró levantar a las masas proletarias colocándolas a la vanguardia de esta Argentina que es ejemplo de la América hispana, y que ya empieza a ser realidad ante el mundo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Ese sentido de la revolución ha permitido desarraigar la creencia del pueblo en cuanto a que no podía desarrollarse la Argentina, pasando del estado agrícolaganadero hacia la etapa de la industrialización, que es el paso más positivo de las concreciones del peronismo, emprendidas con sentido de ejecución y de mando, pero concluida sobre todo por la voluntad de un pueblo que quiere cumplir con sus destinos, al mismo tiempo que satisfacer sus anhelos e inquietudes a través de una fuerza política que tiene el nombre de Partido Peronista.

Entendemos que nuestra revolución no sería integral si el aparato jurídico subsistiera. Como bien lo dijo el señor diputado Cooke, no creemos que la Constitución fué totalmente negada; no creemos que la Constitución fué íntegramente nula; creemos que tuvo en su seno valores positivos y que durante un largo período de la vida argentina representó un valor tangible; pero entendemos que los hechos la han superado, que el país en su progreso la ha vencido plenamente. No es lo mismo la Argentina del 53, con poco más de 1.200.000 habitantes, cuando en la Capital Federal existían 2.300 jornaleros, que la Argentina de esta hora con 16.000.000 de habitantes, con pan abundante para todos, en circunstancias en que el mundo vive bajo el régimen de racionamiento, que cada día cobra características más severas, principalmente para los elementos débiles de la sociedad humana: los niños y los ancianos. En síntesis, la Constitución del 53 es la carreta y nosotros necesitamos hoy valernos del motor diesel.

De todas las reformas que han sido enunciadas en los distintos proyectos, la oposición parlamentaria y política ha tomado como base principalmente dos de ellas; la incorporación a la Constitución del Decálogo del Trabajador y la reelección del presidente.

De la primera ya estamos en cierto modo eximidos de opinar los argentinos, pues en las Naciones Unidas, que no es precisamente el me-

jor campo operativo para la Argentina, se ha resuelto recomendar a todos los países del mundo su adopción. Nosotros no hacemos alarde de clamor de la incorporación de los Derechos del Trabajador, y hasta diría que llegan un poco tarde, porque todos ellos se gozan desde hace años en el país, gracias al movimiento revolucionario peronista y a su conductor, el general Perón.

En cuanto a la reforma del artículo 77 me he planteado muchas veces la siguiente pregunta: si en 1922 no hubiera existido el actual artículo 77 y el radicalismo hubiera reelegido a Yrigoyen ¿cuántos males se hubieran evitado? No hubiéramos vivido la época del peculado, del fraude y de la violencia. Sin embargo dicha cláusula constitucional torció el destino histórico, porque en aquella oportunidad se reemplazó a una figura nacional por otra resistida dentro del propio partido.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. García. — Cuando un movimiento encuentra un conductor que interpreta el sentir de la mayoría, que aglutina su pensamiento, sería torpe torcer la ruta señalada por su propio conductor, cediendo a prejuicios negativos.

Dado que en la política americana es fundamentalmente necesaria la presencia de hombres que tengan valores de excepción; que los movimientos se conduzcan con ese sentido originario del caudillo, así como el radicalismo tuvo en Yrigoyen su bandera y los radicales tenían el orgullo de decir que eran soldados de Yrigoyen, nosotros proclamamos a Perón; y queremos que continúe como jefe del partido y mediante ello pueda cumplirse el destino de la nacionalidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Nosotros deseamos lisa y llanamente la reforma del artículo 77.

La comisión ha suscrito el despacho que ha traído a la consideración de la Honorable Cámara facultando a la constituyente para que ésta resuelva las reformas parciales o totales que convenga hacer, porque interpretamos que el proceso ambiente —como bien dijo Bagnasco— es definitivo para poder producir una reforma trascendental como la que va a realizar la constituyente de 1948. Decimos esto para que el país escuche, y porque estamos seguros de que ella, en cuyo seno tendrá mayoría el movimiento peronista, será intérprete fiel del espíritu popular y democrático que anima sus filas; será intérprete fiel del sentido de justicia social que mueve a los asalariados; y será intérprete de la bandera nacional como emble-

ma de defensa de la soberanía y de defensa de los pueblos hermanos del continente. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — La plataforma de la Unión Cívica Radical, como ya se ha dicho esta noche, siempre ha previsto la necesidad de introducir reformas a la Constitución nacional, porque nuestro partido, desde su alborada, presentó a la ciudadanía argentina, como su mejor programa de gobierno, el cumplimiento de esa Constitución. Así lo preconizó en el llano y trató de hacerlo efectivo en el gobierno. Y mientras tanto, han ido madurando en el seno de la Unión Cívica Radical las corrientes que propician introducir reformas a nuestra Carta Fundamental.

Aquella Constitución del 53, que fuera promulgada en los momentos en que en el territorio de la República habitaba 1.000.000 de personas y cuando en esta Capital Federal solamente trabajaban alrededor de 2.000 obreros presenta, indudablemente, lagunas y exige reformas porque el país ha crecido hasta presentar una población de 16.000.000 de habitantes y una masa trabajadora que, en esta Capital, alcanza casi a un millón.

Pero ya mis compañeros de representación, los diputados Vítolo, Uranga, Balbin y Sobral, han dicho por qué esta representación de la Unión Cívica Radical, surgida de un partido que preconiza en su plataforma la reforma de la Constitución, y que ha postulado desde el llano y desde el gobierno el cumplimiento de la Carta Fundamental, hoy se opone unánimemente, lo mismo que sus altos organismos directivos, al proyecto en discusión, por entender que no existe clima propicio en el país, ya que la situación política del momento no garantiza una auténtica consulta de la voluntad ciudadana.

Ya se ha hablado del clima inapropiado que este oficialismo actual ha creado en el país; ya se ha hablado del cercenamiento del uso de los radios, de la prensa, del derecho de reunión, de la falta de discusión posible, de los atentados contra el federalismo, del exceso de autoridad entregada al presidente de la República, del avance del poder central mediante las intervenciones federales de la caducidad, en algunos casos, del régimen municipal, del manejo discrecional de nuestra economía. Todo ello crea un clima enrarecido para poder respirar el aire limpio de la libertad necesaria en estos instantes y hace que se pueda entregar al poder central todos los recursos, para que él, identificado con el desempeño de la jefatura del partido político que lo ungió, ponga todos los recursos y toda la fuerza al servicio de sus empresas electorales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Desde 1930 la ciudadanía ha sido objeto de tantos excesos por parte de los poderes nacionales y provinciales, ha visto como se ha atentado impunemente contra los preceptos de nuestra Carta Fundamental, que en ella ha ido ganando terreno un profundo descreimiento sobre el valor de la letra constitucional. Desde esa fecha ha visto realizar permanentes atentados a la Constitución, que han originado descreimiento y despreocupación por las cosas que hacen a la letra de la misma, y falta de confianza en este poder central para garantizarle una libre y honesta consulta de la voluntad ciudadana respecto de un asunto tan importante como el de elegir los constituyentes que entrarán a reformar nuestra Constitución nacional.

No tengo tiempo para hacer un análisis prolijo, como habría deseado, de cuáles son los motivos y las razones que me llevan a afirmar que este poder central —con el que está absolutamente solidarizada esta mayoría del Congreso— no cuenta con la confianza popular, ni puede ser el instrumento capaz de asegurar una consulta honesta de la ciudadanía. Ha dicho algún compañero de sector que es indispensable que este oficialismo adquiera la estatura necesaria para plantear este problema de reformar la Constitución vigente, aplicando todos los preceptos y no violando ninguno.

Y recorriendo el articulado de la Constitución, nos alarmamos ante sus reiteradas violaciones. ¿Qué ha quedado de lo del «gobierno representativo, republicano y federal», de que habla el artículo 1º? ¿Qué ha quedado, señor presidente, del artículo 4º, cuando habla de que el gobierno «provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional», mientras todos sabemos que en cuanta campaña electoral se realiza en la República, los fondos del Tesoro nacional son puestos al servicio del partido político que responde al presidente de la Nación?

¿Qué ha quedado del artículo 5º de la Constitución nacional que esta mayoría fusilará dentro de unos instantes, que dice que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el régimen representativo republicano», y que más adelante expresa que «bajo esas condiciones del gobierno federal garante a cada una de ellas el goce y ejercicio de sus instituciones», cuando hemos visto que se han arrasado las autonomías provinciales, exclusivamente porque han chocado distintos grupos políticos del peronismo que gobernaban en las provincias, o porque los gobernadores de dichos Estados no eran de la confianza del señor presidente de la República? ¿Qué ha quedado del artículo 6º de la Constitución, que establece las causas por las cuales el gobierno federal puede intervenir las provincias?

¿Qué ha quedado del artículo 8º de esta Constitución nacional, cuya destrucción se iniciará dentro de unos momentos, cuando establece que los ciudadanos de cada provincia gozan de «todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadanos en las demás», cuando los derechos, privilegios e inmunidades en algunos aspectos de la vida ciudadana y política son respetados por el gobierno, según se trate de militantes de la oposición o del oficialismo? Si se trata de los primeros, han de recibir de boca de los hombres del gobierno hasta las maldiciones que se propalan por la prensa y por la radio; si se trata de los segundos, han de merecer —sin reparar en la idoneidad— su exaltación a las más altas funciones y las más grandes representaciones honoríficas.

¿Qué ha quedado del artículo 9º, cuando dice que «en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales», mientras el gobierno de la Nación, estableciendo las normas del comercio, da autorización a unos y la niega a otros para la exportación y traslado de los artículos, concediendo preferencias a aquellos lugares que gozan de la simpatía o de la tutela del gobierno central?

¿Qué ha quedado del artículo 14, que garantiza a todos los habitantes el derecho «de trabajar y ejercer toda industria lícita», mientras el Banco de Crédito Industrial regula la concesión de créditos, según los pretendientes gocen de la simpatía y del color político del oficialismo que gobierna al país?

¿Qué ha quedado de aquello de «navegar y comercial libremente por el territorio de la República, si se extreman a cada rato las persecuciones de corte político y cuando se ha hecho también de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a que se refirió el señor diputado Balbin hace unos momentos, una empresa de persecución a los comerciantes y a los industriales que no se ponen bajo las disciplinas y las normas que establece este oficialismo?

¿Qué se ha hecho de la garantía de «peticionar a las autoridades», si a cada momento los grupos de ciudadanos que se congregan para hacer llegar a los poderes públicos alguna petición encuentran impedidos sus propósitos por la Policía Federal, como ha ocurrido no hace muchos días en la puerta de este Palacio Legislativo? En esa oportunidad mujeres indefensas, convocadas por el bloque a que pertenezco para recibir de ellas algunas indicaciones o sugerencias, fueron disueltas violentamente por los agentes del gobierno nacional, por su Policía Federal.

¿Qué ha quedado de la garantía de entrar «libremente al territorio argentino» cuando se regula en forma que ya hemos de aclarar den-

tro de pocos días en este recinto la entrada de los inmigrantes, de modo no siempre correcto y limpio?

¿Qué ha quedado de aquello «de publicar sus ideas sin censura previa», «de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender», cuando los obreros se ven perseguidos por el solo intento de agremiarse libremente; cuando los profesores con dignidad y valor civil se ven expulsados de los claustros universitarios?

¿Qué ha quedado de aquello de que «no hay prerrogativa de sangre» ni títulos de nobleza, ni honores, que establece el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, cuando frecuentemente esta misma Cámara está deteniéndose en su labor para distraer la atención acordando honores, favores y beneficios honoríficos en algunos casos hasta a sus propios integrantes?

¿Qué ha quedado del artículo 18, en cuanto establece que nadie puede ser obligado a «declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente», cuando el gobierno nacional tolera y ampara a una Policía Federal que tiene su sección especial —ofensa a la cultura argentina—, que persigue, castiga, veja y tortura, mientras el gobierno nacional, a pesar de nuestras denuncias se mantiene sordo y ciego ante las cosas que ve y escucha, como las ven y escuchan los hombres libres del país?

¿Qué ha quedado de aquello de que nadie «será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe», cuando a cada instante sabemos que el gobierno obliga a los empleados públicos a concurrir a las funciones espectaculares que con uno u otro pretexto realiza en las plazas públicas. Y mientras los jefes de las reparticiones están en los lugares de las concentraciones pasando lista de los empleados asistentes, para la publicidad, mediante las crónicas periodísticas, aparecen como concurrentes espontáneos a estos actos que siempre se realizan en honor o al servicio del oficialismo?

¿Qué ha quedado del artículo 29 cuando determina que el Congreso no puede conceder facultades extraordinarias cuando esta Cámara, por decisión de la mayoría oficialista, aprobó un día la ley del Plan Quinquenal, que ya denunciamos en su momento que no constituía otra cosa que entregar al presidente de la República las facultades extraordinarias, expresamente prohibidas por el artículo 29 de la Constitución nacional?

¿Qué ha quedado de la efectividad de la elección directa de los diputados y de los gobernadores de provincia, y la de los senadores nacionales por voluntad exclusiva de las legislaturas provinciales, cuando en este país no es secreto para nadie que diputados, gobernadores de provincia y senadores son elegidos res-

pondiendo a las indicaciones que formule el jefe del peronismo y a la vez presidente de la República? No pasan de ser una mera ficción las convenciones partidarias frente a la voluntad omnímoda e indiscutida del presidente de la República.

¿Qué ha quedado del artículo 63 de la Constitución nacional, que dice que los diputados de la Nación podemos solicitar a los ministros del Poder Ejecutivo que concurran a esta Cámara para responder a las preguntas que les formulemos? ¿No sabemos, acaso, que sólo vienen —como en este instante el señor ministro del Interior— para contestar, en forma incidental, aspectos de un asunto que interesa a la mayoría, mientras duermen en el archivo o en el seno de las comisiones, para no ser despatchados jamás, pedidos de interpelación presentados por los diputados que integramos este sector de la Unión Cívica Radical, haciendo burla impávidamente de las disposiciones del artículo 63 de la Constitución nacional?

¿En qué ha quedado el artículo 64, que establece que ningún miembro del Congreso podrá recibir comisión alguna del Poder Ejecutivo sin autorización legislativa, si recientemente se han acordado autorizaciones cuando no sólo ya los había designado el Poder Ejecutivo para cumplir misiones oficiales sino que hasta ya habían regresado del exterior?

¿En qué ha quedado la limitación que establece el artículo 87 respecto del número de ministros, si frecuentemente nos encontramos, al leer los diarios, que el presidente de la República ha designado un nuevo secretario con categoría de ministro, convirtiendo su gabinete en un verdadero Parlamento, que nos hace pensar si no llegará el día en que nosotros debamos trasladarnos a la casa de gobierno, en tanto que los miembros de ese gabinete, dado su número, tendrían que venir a instalarse en este recinto para deliberar?

Debería seguir analizando los otros artículos de la Constitución a fin de documentar integralmente el incumplimiento de todos esos preceptos por parte del actual Poder Ejecutivo de la Nación. Pero la tiranía del tiempo, como decía el señor diputado Cooke, impide desarrollar ampliamente este análisis sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Este estado de cosas —violaciones reiteradas de la Constitución nacional—, ha acentuado en los últimos tiempos el descreimiento de nuestra ciudadanía respecto de la Ley Fundamental. Y en este clima de falta de libertad, para la amplia discusión con este oficialismo que restringe las libertades públicas y que vulnera la Constitución nacional, el pueblo, la ciudadanía honesta de la República, no puede tener ninguna seguridad de afrontar con entera libertad los actos previos a la elección de los constituyentes

que han de integrar la convención que introducirá las reformas.

Este despacho, además, rompe con la tradición constitucional argentina. El artículo 30 establece con sabiduría y previsión —lamento no poder desarrollar los antecedentes respectivos— la doble instancia para la reforma de la Constitución: el Congreso declara procedente determinada reforma y la convención la acepta o la rechaza.

Por el despacho presentado a este cuerpo, se declara que toda la Constitución puede ser reformada. No se cumple con la obligación de decir con claridad que se autoriza la reforma de determinada disposición. Se entrega un documento en blanco para ser llenado como el oficialismo quiera.

Por otra parte, esta noche se ha hablado de la necesidad de incorporar a la Constitución el conjunto de disposiciones que llaman «declaración de los derechos del trabajador». Y les recuerdo a los señores diputados de la mayoría, tan enamorados de ella, que hace veinte años, al pasar por la Facultad de Derecho y estudiar los elementos fundamentales de la legislación obrera, aprendí como todos los que estudiaron la materia, precisamente eso que hace recién un año el presidente de la República, desde el teatro Colón expresara, queriendo asombrar al país y al mundo con un gran descubrimiento de orden social.

Más aún; les recuerdo que en las constituciones de Francia, Yugoslavia, Italia, Brasil y China, figuran disposiciones de esa naturaleza desde hace mucho tiempo y en algunas de ellas son más avanzadas y más prolijas que las de la tan pregonada declaración.

Y lamento que en ese decálogo no figure, por ejemplo, la igualdad de tratamiento para trabajadores hombres y mujeres y que por el contrario, mientras alguien, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, promete a las obreras textiles igual salario para igual trabajo, la Confederación General de Empleados de Comercio, que responde a las directivas del señor ministro del Interior, acaba de formalizar un convenio para los trabajadores y empleados del comercio, en cuyo artículo 2º determina que las mujeres sólo percibirán el 85 % de la retribución de los varones.

Sr. Ministro del Interior. — Eso es lo que más quisieron dar los capitalistas amigos de ustedes.

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

Sr. López Serrot. — Señor presidente, señores diputados: la suerte del país está echada. Cada uno de nosotros nos encontramos en este instante histórico ocupando un lugar en la lucha. Mis palabras documentan mi posición personal y las de mis compañeros de bloque.

Ha dicho el señor diputado Cooke que el tiempo será el que resolverá muchas cosas en la República. Nosotros confiamos en lo que el tiempo hará y en lo que de estas horas dirá la historia del país. Lo cierto es que pretendiendo desconocer el clima de la República, ciegos por la adhesión al señor presidente de la República, los señores diputados de la mayoría dentro de un momento van a fusilar sin juicio previo a la Constitución de 1853. Pero cuando se escriba la historia de estos días tendrá que decirse que este bloque parlamentario radical, este modesto grupo de ciudadanos argentinos profundamente patriótico, con la mirada puesta en los destinos de la patria y con las raíces clavadas en el origen mismo de la Unión Cívica Radical, ha bregado en la medida de sus fuerzas para que la mayoría de este cuerpo no disponga que en breve pase a ser Constitución de la República la carta política de un grupo que ni representa a todos los argentinos ni prepara a la gran Argentina del futuro que todos deseamos! (Aplausos.)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Lema. — Señor presidente: pocas y sencillas van a ser mis palabras. No soy hombre de leyes ni conocedor de teorías jurídicas, y no porque yo no hubiera querido serlo. No he podido. La vida me planteó otros problemas y mis ansias de superación fueron satisfechas robando horas y minutos a urgencias inmediatas.

Pero una vida de trabajo honrado es el mejor título para intervenir en este histórico debate.

Junto con el país he vivido mi trayectoria dentro de una República organizada por la Constitución vigente. Yo creo que es buena, en general, y que sus autores quisieron darnos una patria grande. Pero no es a mí a quien hará falta explicar que es defectuosa. Nosotros los obreros y nuestro movimiento una vez nacido, sabemos de los vaivenes de los gobiernos, de las libertades y de los derechos. Sabemos de leyes obreras que no se dictan y de leyes obreras que no se cumplen o no se respetan.

Sabemos, sí, que los derechos del propietario se encuentran bien protegidos contra el atropello, que el patrono tiene garantizado el libre goce de su plusvalía.

Sabemos también que nosotros los obreros como parte del pueblo tenemos reconocidos y declarados nuestros derechos políticos, pero que, recorriendo línea a línea, letra a letra los artículos de nuestra Constitución, no encontramos los que se refieren a nosotros, a los obreros expresamente como obreros.

Yo sé que aquellos hombres no pudieron adivinar el futuro y que creyeron plenamente tener en cuenta todo. Yo como argentino estoy orgulloso de que en mi tierra hace noventa y

cinco años se reconociese el derecho de trabajar libremente, asociarse, aprender, mientras que naciones que se dicen más adelantadas mantienen la esclavitud y la servidumbre.

Pero la verdad sea dicha, señor presidente: no podemos menos que considerar la Constitución como la miraría un hombre de la clase media si lo autorizaran a ser propietario y no le garantizaran el goce y uso de su propiedad.

Nosotros somos hombres del pueblo. Hay muchos intereses mezclados en esa palabra. Nosotros formamos una clase; nosotros hemos sido durante muchos años una clase considerada agresiva y se nos ha acusado de perturbadores y disolventes. Esto no es cierto.

Mucho de lo que es el país se debe a nosotros y no se nos ha pagado. Nosotros no queremos destruir ni perturbar. Queremos algo que nos parece sencillo: que en la Constitución, que es para todos, se contemplen nuestros problemas y nuestros intereses, así como se tienen en cuenta los de cada fuerza social y económica del país.

Los obreros argentinos tenemos un líder argentino que recogiendo nuestras ansias ha formulado un decálogo que resume nuestras aspiraciones. Es muy cierto que de ese decálogo se ha hecho bandera para esta reforma de la Constitución. Es necesario, entonces, que sea incluido en la Constitución; no puede quedar fuera después de haber hecho punta en el movimiento nacional.

Entendemos como un reclamo imperioso de la hora, como una impostergable necesidad, que hay que admitir la reelección del presidente de la República.

Sabemos que esta reforma no es solamente para la hora actual. Constituye ella nuestra más firme aspiración. La acción tesonera y patriótica del primer magistrado nos ha reconciliado a muchos de nosotros con la vida al ver que los trabajadores disfrutaban de una vida mejor, son respetados y considerados como seres humanos y no como hez de la sociedad.

Los obreros queremos que la reelección sea permitida por nuestra Carta Magna, seguros de que la ciudadanía argentina ha de mantenerlo en su alto sitio para satisfacer una suprema aspiración de la clase desposeída que ve alborrear mejores momentos para la argentinidad. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Mercader. — Es el más sincero de los discursos.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rojas (N.). — El señor presidente Perón ha dicho ayer que la humanidad ha fracasado; hace un instante uno de sus hombres nos ha dicho que la Constitución ha fracasado.

Doble fracaso. Pero el peronismo, con su jefe al frente, y con la modestia que lo caracteriza, busca reparar eso para salvar a la humanidad

y la Argentina. Este movimiento anuncia una vida celestial para este pueblo. La ingenuidad de la mayoría hace que hasta ahora lo siga enceguecido. Frente a ello, la Unión Cívica Radical está como siempre de pie en contra de todo lo que es adverso a la verdadera Argentina.

Asistimos a las exequias de la Constitución. El peronismo la ha muerto lentamente. Ya sienten la necesidad de enterrarla. Eso es lo que significa este debate. Queden ellos con su función de pompas fúnebres. Nosotros esperamos que la Constitución, a pesar de todas las adversidades y de las calumnias, ha de salvar a la Nación.

La Argentina se ha hecho bajo el amparo de esa Constitución que hoy quieren destruir en nombre de una supuesta revolución. En nombre de ésta declaman todos los días, en discursos enfáticos, en actos escolares y en las efemérides patrias y se pierden en palabras. El pueblo vive en un estado de perturbación y el tema de mi discurso será mi interpretación del peronismo.

En 1931, el general Uriburu, ya claudicante y fracasado en sus intenciones de tiranuelo, depositó en manos del presidente Justo un misterioso sobre cerrado que contenía una reforma de la Constitución, seguramente de tipo totalitario o semitotalitario. Aquello fracasó. La gloria del peronismo es que hoy nos exhuma aquella iniciativa que se frustró con el otro dictador.

Todo esto prueba una vez más que el 4 de junio es un producto del 6 de septiembre. La crisis argentina empezó el 6 de septiembre, cuando un grupo de militares, revólver en mano, entró en la Casa Rosada. Desde ese momento el país se desvió de la ruta constitucional. Ese fué el primer ataque a la Constitución.

Sr. Visca. — «La Prensa», «La Nación», «Crítica», «La Vanguardia», no decían eso.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Rojas (N.). — El señor presidente, que es tan celoso del reglamento, ¿por qué no hace callar a esos diputados que interrumpen?

Si creen que con gritos van a acallarme, están equivocados.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Rojas (N.). — He dicho que el movimiento de junio es la continuación del movimiento de septiembre.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rojas (N.). — He afirmado que el movimiento de junio es una continuación y el producto del movimiento de septiembre.

El peronismo sostiene que la vida argentina empieza ahora con ellos una nueva etapa. Consideramos que el peronismo es el último episodio de la crisis argentina que empezó en septiembre. Ahí termina esta crisis de todo orden; incluso la crisis moral del país, es la prueba de que termina una etapa histórica de la Argentina.

Sr. Astorgano. — Terminó el 24 de febrero.

Sr. Rojas (N.). — Y la prueba de la continuidad de ese movimiento iniciado en septiembre y terminado ahora es la de que el propio general Perón fué uno de los militares que conspiró entonces contra el presidente Yrigoyen.

Sr. Lareo. — Está equivocado, señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — No estoy equivocado.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Rojas (N.). — Estamos de acuerdo con la resolución de la convención nacional del partido en contra de esta reforma, no solamente porque el clima del país es antidemocrático y no hay garantías, sino por la forma sorpresiva en que ha venido esta cuestión y por la amplitud en que está redactado el despacho.

Sr. Visca. — Los señores diputados son los que han regresado sorpresivamente.

Sr. Rojas (N.). — Vale decir que este asunto se considera en momentos en que los expositores y dirigentes oficialistas de dentro y fuera de esta Cámara no han encontrado aún la manera de concretar un pensamiento con relación a la reforma.

Sr. Colom. — Hay varios proyectos de ley presentados.

Sr. Rojas (N.). — Hay varias causas que explican lo que afirmo. Una de ellas es que no han coincidido aún en lo que debe reformarse, quizá porque quien decide estas cuestiones no lo ha resuelto. Además, al concretarse las reformas se tendría que discutir en este recinto y durante la campaña electoral el artículo neurálgico en este asunto: el relacionado con la reelección del actual presidente de la República.

Y como el presidente ha dicho que él no quiere la reelección, se encontrará con que sus adictos le imponen el sacrificio de aceptarla; cuando llegue el momento tendrá que resignarse y aceptar, en holocausto del país.

Sr. Colom. — Por suerte para la República.

Sr. Rojas (N.). — Esta es una reforma que, como ha dicho el diputado Balbin, será peronista hasta por los métodos con que se ha de realizar.

Sr. Colom. — ¿Y si ustedes ganan las elecciones?

Sr. Rojas (N.). — Señor presidente: ¡después se enojan cuando los califico!

El procedimiento de esta reforma y el contenido que se le ha de dar será la expresión de lo que el peronismo es como pensamiento o como falta de pensamiento, como concepción totalitaria de gobierno. Los hechos lo demuestran. ¿Qué es lo que impide que conceda libertades este gobierno, que se siente la expresión de toda la Argentina, que dispone de una mayoría imponente que nos domina con su número, que organiza multitudes que llenan las calles en cada aniversario?

Cuando un gobierno no da libertad es por una de estas dos causas: o porque no se siente seguro y teme la discusión, o porque sus convicciones políticas lo llevan a creer que sus opiniones no deben ser discutidas, es decir, cuando carece de espíritu republicano y democrático.

Yo digo al señor ministro del Interior, aquí presente y que va a hablar, según se anuncia —que hace un instante ha tenido una intervención poco lucida, con motivo del asunto de las radios— que si quiere conteste, cuando hable, a la pregunta que le quería hacer, y que la severidad del presidente de la Cámara me impidió formular. Es evidente, señor ministro, que hoy no hay libertad en el país, y usted es el primero en saberlo; que ha sido sensacional el asunto de la radio, y que representantes extranjeros han venido y han dicho la verdad; la que nosotros los argentinos sabemos, la que todo el mundo sabe. ¿Y qué fué lo que se contestó?

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Rojas (N.). — En primer término se contestó por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores quien llamó a su despacho al encargado de negocios de Cuba y al presidente de esa Corporación Internacional de Radio. A éste, primero pretendió amonestarle...

Sr. Visca. — ¡No! ¡Lo retó!

Sr. Rojas (N.). — Previamente, el encargado de negocios de Cuba tuvo que informarle que en su país ese hombre era ciudadano digno, y que como funcionario de tal carácter no aceptaría que se le maltratara. ¿Qué sucedió después, señor ministro del Interior? Acaeció que ese extranjero tuvo que salir del país, en avión y precipitadamente, porque carecía de garantías.

Sr. Visca. — El señor diputado no está en la cuestión. Está hablando de radiotelefonía.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ruega al señor diputado que se concrete a la cuestión.

Sr. Rojas (N.). — Estoy hablando de la falta de libertad. No me la coarte.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Rojas (N.). — Desearía que el señor ministro aclarara estas preguntas. Es evidente que las comunicaciones telefónicas están interferidas, y en especial las de los diputados de nuestro sector. Sé que mis comunicaciones telefónicas son registradas en copias, lo cual me consta por datos que no puedo revelar porque comprometería a quienes me han informado. Gente bien informada me ha referido varias conversaciones que yo mantuve telefónicamente, preguntándome si eran exactas. He contestado que sí, porque esa gestapo...

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por la Capital: Si no se concreta al asunto, tendré que poner a consideración de la Cámara si está o no en la cuestión.

Sr. Balbin. — Parece que el señor presidente fuera quien controlara las comunicaciones telefónicas.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia controla el cumplimiento del reglamento, señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Estoy desarrollando los argumentos por los cuales...

Sr. Presidente (Cámpora). La Presidencia cumple el reglamento. Los señores diputados son quienes plantean la cuestión, y no la Presidencia. Si el señor diputado por la Capital no se concreta a la cuestión, la Cámara deberá resolver.

Sr. Rojas (N.). — Continúo, señor presidente.

Yo, que soy adversario del peronismo, tengo amigos peronistas (*risas*); muy buenos amigos peronistas.

Repito que suelo conversar con esas personas para cambiar ideas. He buscado interpretar y entender este movimiento, cuyo valor no niego, porque se trata de un fenómeno histórico, lo reconozco; es un fenómeno social que responde a causas y a factores. Una curiosidad de estudio me ha hecho forzar mi análisis...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Rojas (N.). — No sé si los diputados de la mayoría se van a aquietar, pero les ruego que me escuchen.

Sr. Visca. — Los otros días ya nos trató de pingüinos; después, de avestruces. (*Risas.*)

Sr. Rojas (N.). — He buscado y he utilizado los resortes de mi conocimiento...

Sr. Balbin. — Es un diagnóstico gratis.

Sr. Rojas (N.). — Yo he buscado también una interpretación histórica, y he buscado una interpretación psicosocial.

Yo he querido hacer un esfuerzo psicológico y he tratado, por hábito, porque respecto de

los adversarios siempre busco explicarme, aunque no los justifique, y he tratado de penetrar en sus espíritus y para ello hasta me he considerado un peronista... (risas)

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Rojas (N.). — ...hipotéticamente (risas), para ver de entenderles, y he encontrado que hay peronistas que han sido radicales, otros que han sido luchadores obreros, otros que han sido socialistas, y hay peronistas que han llegado a la política sin pensarlo.

Yo he buscado cuál es su conciencia por dentro, he visto que hay peronistas que no quieren pensar; aunque son capaces de hacerlo. Son los peronistas que en privado nos hablan mal de este gobierno. (Risas.)

Sr. Visca. — ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución?

Sr. Rojas (N.). — Ya le voy a aclarar al señor diputado Visca. Como ustedes no han concretado la reforma, busco sospechar o descubrir hacia dónde van.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señores diputados: no interrumpen al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rojas (N.). — Hay otros peronistas que no piensan, algunos no porque no sean capaces de pensar, sino porque han resuelto evitarse el trabajo y han encontrado la manera de tener ideas sin pensarlas, ateniéndose a lo que el jefe dice, quien les da la solución de los problemas.

Sr. Beretta. — Pido la palabra para una cuestión de orden.

Evidentemente el señor diputado Rojas, en forma encubierta, está injuriando y agravando a los diputados de este sector: ya no se trata de chistes; y por ello planteo la cuestión. En este sector no hay ningún diputado que por comodidad material deje de pensar.

Sr. Rojas (N.). — No es por comodidad material, señor diputado.

Sr. Beretta. — ¡Planteo la cuestión, señor presidente!

Sr. Rojas (N.). — Ruego al señor diputado que acepte que uno de los motivos por los cuales no expongo con tranquilidad o con método, es el de que constantemente me interrumpen y hay una algarabía de distinto tono en ese sector. Déjenme desarrollar mis ideas, que ya habrá tiempo para contestar.

Es lamentable que esta reforma nos venga sin concretar un programa. Uno de los señores diputados decía que la reforma de la Constitución se atenderá a la doctrina peronista: pero

nosotros creemos que no hay doctrina peronista, ya que la contradicción es permanente. El presidente de la República ha dicho cosas tan distintas en diversas ocasiones en sus múltiples discursos, que es muy difícil seguir una línea doctrinaria en sus pensamientos.

Sr. Beretta. — La unidad mental y espiritual es característica del jefe de nuestro movimiento revolucionario.

Sr. Rojas (N.). — Es posible; yo no soy peronista, y no estoy en los secretos. Trato de entender.

Además de las contradicciones en las diversas etapas, hay una contradicción entre lo que dice y lo que se hace. Si nosotros nos atenemos a lo que vemos en la realidad, nos encontramos con que la doctrina realizada es muy distinta de la doctrina expuesta. Yo no tengo tiempo para analizar las contradicciones. Alguna vez me he puesto en esa tarea de anotar las contradicciones del presidente de la República, pero me cansé porque había que dedicarle mucho tiempo, y la abandoné por innecesaria.

En el poco tiempo de que dispongo para concluir mi exposición, deseo proseguir por lo menos tratando de entroncar el peronismo en la historia argentina. Desgraciadamente tengo que decir que en las corrientes históricas de la Argentina hay unas que tienen su raíz en la colonia, otras que se inician con la revolución. La corriente histórica que ha hecho la Argentina, tiene hombres que la representan, y esos hombres son, tomando algunos de ellos a lo largo del tiempo, Moreno, Sarmiento, Yrigoyen. La otra corriente, la que tiene entroncamiento colonial, es la que tiene un héroe en Alzaga, a quien buscan reivindicar algunos peronistas e hispanistas, lo que ningún argentino puede aceptar.

Sr. Haramboure. — Está fuera de la cuestión el señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Esa corriente colonial, por consiguiente antiargentina, tiene otra expresión en Rosas; y en la actualidad el peronismo representa esa misma corriente.

Sr. Visca. — ¡No es cierto!

Sr. Rojas (N.). — Es la regresión a la colonia. Por eso el maridaje con Franco, por eso esta fiesta de la Reconquista, por eso se ha levantado en la Plaza de Mayo el estandarte de Carlos III, por eso ha venido el movimiento de la revisión de la historia argentina, que trata de dar vuelta a nuestros héroes para permitir la entrada de las ideas totalitarias...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Ha vencido el plazo que para su exposición dispone el señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — ...por medio de la hispanidad; y Franco, que representa a eso, es el aliado de Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Habré de esforzarme por restablecer, en los breves minutos de que dispongo según el reglamento, el clima de seriedad y de jerarquía con que había sido abordado este debate, malogrado lamentablemente por la intervención del señor diputado por la Capital.

Comprendo que la ironía es un arma lícita de los debates parlamentarios; comprendo que la ironía es, en general, un testimonio de fineza espiritual. Pero el manejo de la ironía, requiere instrumentos espirituales afinados. De otro modo, puede ocurrir lo que en este debate ha ocurrido: que la ironía caiga en el ridículo. En la ironía, como en todas las manifestaciones del espíritu, caben estos dos extremos: lo sublime y lo ridículo.

El señor diputado por la Capital, a quien en otras oportunidades hemos escuchado gustosamente, no ha estado feliz...

Sr. Rojas (N.). — No me han dejado desarrollar mi pensamiento.

Sr. Bustos Fierro. — ...y me veo obligado por ello a comenzar por esforzarme en restablecer, en el breve tiempo de que dispongo, el clima de seriedad y de jerarquía que hasta este momento ha tenido el debate.

Habría deseado disponer, señor presidente, de la mayor latitud posible, para expresar con toda extensión mis puntos de vista, a propósito de la reforma constitucional, abonándolos con el antecedente de un estudio perseverante que durante más de tres lustros he realizado, abordando la historia y el derecho constitucional, en uno de los institutos de cultura más calificados del país.

Viviendo en esa permanente comunión con las fuentes constitucionales, a través de la ciencia constitucional y de la historia del país, hubiese anhelado comunicar a este debate el acento de mis convicciones e investigaciones personales, como una modesta, pero patriótica contribución al gran tema que se discute.

En esta pugna permanente que significa la lucha parlamentaria, donde no se encuentran hombres, sino ideas, hay siempre al final de cuentas un derrotado y un triunfador. El debate está ganado ampliamente por el sector peronista. El debate ha sido rotundamente llevado al éxito por el sector a que pertenezco, a través de las brillantes exposiciones de los colegas que me han precedido, que han documentado desde plurales puntos de vista el pensamiento que anima a la comunidad argentina, en este momento de superación de su régimen constitucional. Sin restar un ápice los altos

méritos de las exposiciones de todos los colegas de mi sector que me han precedido, quiero que la generosidad de ellos me permita destacar el excepcional relieve de la de nuestro colega diputado Cooke, que en una magnífica pieza parlamentaria ha puesto en claro relieve el espíritu y los perfiles de la iniciativa que animan a esta bancada, al promover la declaración de la reforma constitucional, ensamblándose así con los anhelos del pueblo que la constituyó su mandatario.

Subscribo todos y cada uno de esos conceptos. Sólo me limitaría, en amable discrepancia con mi distinguido colega Cooke, a decir que yo no creo como él que la Constitución del 53 debe ser calificada con el adjetivo de fracasada.

Pienso, señor presidente, que la Constitución del 53 debe superarse con esta reforma constitucional; pienso que la Constitución del 53, hija de su tiempo, nacida al conjuro de las necesidades históricas, políticas e institucionales que vivió la Nación después de Caseros, ha cumplido su ciclo histórico; pienso que esta nueva Constitución nacional, que habrá de darnos la soberanía del pueblo argentino habrá de declararse hija legítima y bella de una madre bella, que fué la Constitución de Santa Fe.

El problema relativo a la necesidad de la reforma constitucional está planteado en todos los círculos del trabajo, del intelecto, académicos y gremiales; en conferencias nacionales de juristas, por los publicistas más eminentes y por los tratadistas más distinguidos de nuestro derecho constitucional. Está documentado como un reclamo de los mandatarios populares en una larga serie de iniciativas que al comienzo del debate destacó nuestro colega, el diputado Colom.

No voy a reincidir, por razones obvias, en la lectura y en el examen prolijo de esa serie extensa de antecedentes que han estado reclamando de este Parlamento la reforma de la Constitución nacional, desde aquel proyecto presentado en el año 1865 por Valentín Alsina hasta los últimos que han sido depositados en este cuerpo por los diputados del sector parlamentario a que pertenezco.

Pero sí quiero agregar, como una información complementaria que destaca y pone de más claro relieve el cumplimiento del deber que este sector efectúa con sus iniciativas, el problema de la reforma constitucional en el campo doctrinario y que ha sido planteado candente y exigentemente por los más eminentes tratadistas de nuestro derecho constitucional.

Me limito a leer en este momento una nómina de obras verdaderamente magistrales, en las cuales el tema fundamental es la exigencia de la reforma constitucional: Rómulo Amadeo, con su tratado *Hacia una nueva Constitución nacional*; Rafael Emiliani, con su tratado *Ba-*

ses para la reforma de la Constitución argentina; Alejandro Gancedo, con su tratado de *Reformas a la Constitución nacional*; Alfredo Hudson, con su tratado de *Reformas a la Constitución argentina*; Juan B. Iturraspe, con su tratado *Reformas a la Constitución*; Moisés Jurado, con su tratado de *Reforma de la Constitución argentina*; Faustino Legón, con su tratado de *Reformas democráticas y auténtica supremacía constitucional*; Juvenal Machado Doncel, con *Reformas constitucionales y revocabilidad de la Ley Fundamental*; Silverio Prota, con su *Reforma de la Constitución*; Rómulo Riveros, con su *Proyecto de Reforma de la Constitución argentina*; Carlos Sánchez Viamonte, con su tratado de *Defectos Sociales de la Constitución de 1853*; José Abel Verzura, con su tratado *La Constitución Argentina debe reformarse*.

Sería larga la nómina que podría traer a este debate para demostrar que el pensamiento de los juristas constitucionalistas argentinos ha venido reclamando, parejamente a las exigencias que en este Parlamento se hacían y parejamente a las exigencias que la voluntad popular manifestaba en formas distintas, la reforma de nuestra Constitución nacional. La han propugnado hombres que en el campo político militaban en los terrenos más opuestos; y las iniciativas nacidas en este Parlamento pertenecen también a hombres de todos los partidos políticos, incluso a hombres y a gobernantes emergidos del Partido Radical que en este momento tiene a estudio una vasta propuesta del señor diputado Sobral sobre reforma básica de la Constitución.

El movimiento de revisión constitucionalista en los países que integran la comunidad civilizada de nuestro tiempo es, de otra parte, reciente y persistente. No me voy a ocupar de todas las reformas constitucionales operadas en los países de América latina, de América sajona y del continente europeo; pero puedo decir que en el último decenio se han realizado esas reformas en casi la totalidad de ellos y que, en Europa, después de la guerra de 1914-1918 se produjo un movimiento revisionista amplísimo que está documentado de manera acabada en el famoso tratado *Les Constitutions de l'Europe Nouvelle*, de Mirkiné Guetzevitch.

Los antecedentes que traigo sirven para justificar al mismo tiempo que la necesidad de la reforma constitucional invocada desde las más distintos puntos de vista, el austero cumplimiento de nuestro mandato popular que damos, cuando en ejecución de lo que ha dispuesto la voluntad argentina que nos trajo a estas bancas nos impuso la consigna de solicitar y de realizar —porque somos gobernantes de realización y no de declamación— la reforma esperada y anhelada; reforma que no va a cru-

cificar a la Constitución del 53 como ha dicho en este recinto la oposición; quiero decir equivocadamente, para no utilizar la expresión de malevolentemente.

Al reformar la Constitución del 53 vamos a rendirle el mejor homenaje; el homenaje de superación de sus propios preceptos que ya los constituyentes del 53 entrevieron cuando dejaron abierta la puerta para la reforma total o parcial que las exigencias de la Nación Argentina reclamara en lo futuro.

Vamos a continuar el gran espíritu de la Constitución nacional en cuanto ella entronca con las tradiciones substantivas del alma argentina que tan magníficamente ha puesto de relieve en su exposición el señor diputado Cooke.

Vamos a propugnar ante la Convención Constituyente, por que ella supere todos aquellos aspectos en los que la Constitución del año 53, penetrada del espíritu individualista que trajo el liberalismo novecentista, exige ser modificada.

Vamos a abrir sus cláusulas para la sistematización técnica y científica que reclama la cultura argentina, incluso en este sentido, porque mirada desde el punto de vista científico-técnico la Constitución argentina es atrasada, es anacrónica. Yo puedo dar el testimonio de las deficiencias técnicas con sólo recordarles a los señores diputados de la oposición el pecado técnico que significa el hecho que puntualizo seguidamente.

La Constitución comienza haciendo en su artículo 1º una declaración de tipo filosófico, jurídico y político. En su artículo 2º hace una declaración de tipo éticorreligioso. En su artículo 4º hace una declaración relativa a la formación rentística del Tesoro nacional. En su artículo 3º, hace una declaración enteramente formal sobre residencia de las autoridades. Vale decir, que hay una manifiesta heterogeneidad que no resiste ante las más elementales exigencias de la crítica sistemática constitucional, como está perfectamente puesto de relieve por todo el pensamiento jurídicoconstitucional comparado.

De otra parte, el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías es manifiestamente obscuro y confuso. No se percibe esencialmente hasta dónde un texto de la Constitución es una declaración, un derecho o una garantía. Están entrecruzados los conceptos, prestándose para una multitud de interpretaciones caprichosas, arbitrarias, que desnaturalizan el espíritu republicano que la anima.

Como ése señalaría muchos otros defectos de tipo técnico. Señalaría disposiciones manifiestamente anacrónicas, como la del juicio por jurados, que después de cien años no se ha cumplido jamás en la República Argentina, porque es una institución totalmente extraña al derecho nacional, simiescamente reproducida de

la Constitución de Filadelfia, y totalmente superada por la ciencia penal.

Hay una multitud de deficiencias técnicas que bastarían por sí solas para justificar el carácter amplio de nuestro proyecto.

No podemos constreñir a la Convención Constituyente a la reforma de tales o cuales artículos, porque caeríamos en el peligro de hacer pegotes dentro de la sistemática requerida por la técnica jurídica constitucional.

Agrego a lo dicho la razón de fondo, la razón substancial. Esta herencia que recogimos de la Constitución del 53, debe ser amplificada. El hombre, dijo Ortega y Gasset, es un heredero. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser herederos de la Constitución que nos legaron nuestros padres, pero nuestro deber es perfeccionarla, es acrecentarla, es mejorarla, para que podamos cumplir la finalidad de la hora que nos ha sido dada para vivir; y para que entreguemos a las generaciones de hoy y de mañana un instrumento que permita la comunión total del pueblo argentino, que el actual instrumento, por su espíritu fundamentalmente individualista y otras razones conexas, no pudo prever ni pudo realizar.

A la razón de técnica jurídica que justifica la declaración y exigencia de amplitud que nosotros pedimos en nuestro proyecto, para que la reforma sea fiel a la razón de fondo que ha quedado perfectamente documentada a través de la exposición de mis colegas, agrego de otra parte una suprema razón: la razón de la soberanía.

En el debate de esta tarde, yo he escuchado sorprendido esta repetición de la «carta libre», de la «carta en blanco» y del «cheque en blanco» que nosotros dábamos al pueblo para que efectuara la reforma. Esos conceptos, señor presidente y señores diputados, solamente pueden caer en la mente de aquellos que, conscientes o inconscientemente, siguen pensando que son las minorías selectas, los propietarios de los destinos del país, que es a su juicio una permanente colonia mental de ellos. Nosotros señores diputados, somos los mandatarios del pueblo; no es el pueblo nuestro mandatario; el pueblo es nuestro mandante!... La razón de su soberanía hace que todos los poderes residan en el pueblo y no en nosotros. En el pueblo reside el Poder Ejecutivo que lo discierne a un ciudadano. En el pueblo reposa y reside el Poder Legislativo que nos constituye a nosotros transitoriamente en sus mandatarios. Y en el pueblo reside el cuarto poder, el poder eleccionario que es otra de las manifestaciones de la soberanía popular. Y en el pueblo reside el poder constituyente que es el más soberano de todos los poderes porque sobre él se edifica la estructura jurídica, en función de la cual marchan la Nación y la Constitución del país. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. del Carril. — Siempre que el pueblo pueda ser informado.

Sr. Conte Grand. — Va a ser informado ampliamente.

Sr. Bustos Fierro. — Recojo también los argumentos con que la oposición parlamentaria se ha opuesto a nuestra tesis de hoy.

Confieso que en muchas oportunidades yo he escuchado razones opuestas a las nuestras que me han hecho meditar, que me han hecho controvertir y encontrar en definitiva, juntamente con los compañeros de mi sector, caminos comunes de mejor realización de las decisiones legislativas. Pero la posición de los opositores en este debate de hoy es tremendamente pobre.

He oído sorprendido una manifestación del señor diputado Vitolo, en quien reconozco un hombre informado y elocuente; pero no he podido encontrar la explicación a la manifestación que hizo de que toda Constitución es «una limitación al poder público». El concepto de que las constituciones son limitaciones al poder, pertenece al siglo XIII. Es el concepto del año 1215, mediante el cual fué obtenida la primera Carta Magna que los barones ingleses arrancaron a Juan sin Tierra.

Sr. Vitolo. — Si me permite el señor diputado...

Quiero aclararle, para su tranquilidad, que mi expresión de que la Constitución es una limitación al poder no es idea mía, ni siquiera antigua. Es la tesis que desarrolla magníficamente Friedrich en uno de los libros modernos sobre teoría y práctica de las democracias.

Sr. Bustos Fierro. — Si el señor diputado alude a Karl J. Friedrich en su tratado *Teoría y Realidad de la Organización Constitucional Democrática*, lamento rectificarlo. No es ésa la tesis que sostiene.

Sr. Vitolo. — Si el señor diputado me permite, en mi banca tengo el antecedente y se lo voy a leer. Sería la segunda vez que el señor diputado hace una cita y afirmaría la negación de ciertas manifestaciones.

Sr. Bustos Fierro. — Bien, señor presidente; yo lamento profundamente discrepar con el señor diputado, y me remito serena y objetivamente al juicio de los hombres que dominan la materia constitucional. Sostengo que ésa no es la tesis de Karl J. Friedrich en su obra *Teoría y Realidad de la Organización Constitucional Democrática*, sino una expresión accidental y secundaria sobre el sentido de las constituciones. Sostengo lo que he dicho hace un momento: que el concepto de que las constituciones son limitaciones al poder público, es el concepto del año 1215, cuando los barones imponían a Juan sin Tierra una limitación a su poder absoluto, para de ese modo gozar de determinadas franquicias y libertades; pero que en la doctrina y en la ciencia constitucional contemporánea no tiene cabida semejante concepción. La estruc-

tura constitucional es objeto, naturalmente, de interpretaciones divergentes, pero todos coinciden en que la Constitución es la racionalización jurídica de la vida y del Estado, vale decir, la manifestación del Estado-Derecho, del Estado-Organización, del Estado-Justicia, que es precisamente la tesis substantiva que Perón ha remarcado en su concepción políticosocial.

Contesto también al argumento, que por cierto es manido, ya que se repite en todos los debates constitucionales, sobre la falta de clima propicio. Estando por vencer el término reglamentario, recordaré rápidamente a los señores diputados nuestro antecedente inmediato: la propia Constitución del 53. La Constitución actual se sancionó cuando todavía se escuchaban los ayes de los vencidos en Caseros y mientras el país se llenaba con las sombras de la secesión nacional. Buenos Aires, separada del resto de las provincias, gestaba en esos momentos la guerra civil que habría de desatarse inmediatamente y Urquiza, levantándose como gran protagonista de ese momento histórico, lanzaba su frase famosa: «Edificar la Constitución porque contamos con las lanzas y las masas», la vigorosa y viril expresión de Justo José de Urquiza, que estaría bien puesta en su pedestal, presidiendo la etapa histórica que ahora superamos.

Sr. Rojas (A.). — De él es también la frase: «No hay vencidos ni vencedores».

Sr. Bustos Fierro. — Mitre, en los debates de la Constituyente del año 60, atacó violentamente la sanción de la Constitución hecha en esas condiciones, y dijo en una de sus famosas sentencias oratorias que la Constitución del año 53 había sido sancionada a la sombra del aduar, bajo las tiendas que habían desgarrado las lanzas afiladas de los caudillos.

Ese, señor presidente, es un testimonio irreplicable; pero cuando un pueblo se pone de pie para superar su marcha en la organización de la vida jurídica y política, para llegar a la consecución de más altos destinos, tiene necesaria y fatalmente que confrontar argumentos y oposiciones de este linaje.

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Terminaré esta deshilvanada exposición recordando aquella pregunta inquietante que se hacían siempre en los dorados salones del siglo XIX las damas y sus poetas, al llegar la hora del crepúsculo: «¿En qué época hubiera usted querido vivir?» Y dábale la fantasía a recorrer todos los ámbitos históricos del pasado y los posibles del futuro, para ubicar el interrogado sus perfiles en la época que complacía sus anhelos. Si a nosotros se nos hiciese la misma pregunta, contestaríamos que en esta época...

(*aplausos*), en esta hora y en este suelo donde vamos a levantar al lado del intérprete y conductor de los más profundos sentimientos de la argentinidad, una nueva estructura jurídica constitucional para una Nación grande, libre y justa, que desde La Quiaca hasta la Antártida argentina rescata la dignidad del ser humano para superar la historia de la patria y la obra común de la humanidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

Sr. Vítolo. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Ministro del Interior. — Con mucho gusto, se la cedo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vítolo. — Lamento tener que demorar la iniciación del discurso del señor ministro, pero quiero usar de la palabra para una aclaración.

El señor diputado por Córdoba dijo que yo había leído a Karl J. Friedrich en chino. Manifiesto que lo he leído a través de una traducción que me parece escrita en buen castellano. La obra se titula *Teoría y Realidad de la Organización Constitucional Democrática*, y la edición pertenece al Fondo de Cultura Económica de Méjico. En la página 133 de dicha obra dice: «Así, pues —y con la lectura de esta conclusión quiero ahorrar a la Cámara la de todo el capítulo— la palabra «Constitución» tiene, para la ciencia política moderna, un significado muy claro y distinto como el proceso mediante el cual se limita efectivamente la acción gubernamental. Pese al hecho de que la palabra constitución tiene varios otros significados —biológico, jurídico, filosófico, etcétera— parece preferible darle este sentido tradicional. Acaso fuese menos ambiguo no denominar constitución a este proceso. Pero mientras se entienda que la palabra «constitución» se refiere a este proceso, puede excusarse la posible ambigüedad, con objeto de conservar el superior valor sugestivo de la palabra constitución. Hay otra razón en apoyo de esta forma de plantear el problema. El complejo total de restricciones efectivas que forma «la constitución» de una determinada comunidad cristalizará necesariamente en pautas verbales más o menos familiares tales como «poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial», «derecho de los Estados», «debido procedimiento jurídico», «libertad de palabra» y así sucesivamente. Estas pautas verbales se convierten gradualmente en símbolo de orden, y de este modo la Constitución se convierte a su vez en fuerza política.»

Como podrá apreciar el señor diputado por Córdoba, constitución, para Friedrich, significa un conjunto de restricciones al poder gubernamental.

Sr. Dellepiane. — Después de esto, que venga Chiang-Kai-Shek.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Le agradezco al señor diputado Vitolo la lectura que ha hecho, por muchos respetos. En primer término, porque la lectura que acaba de hacer demuestra acabadamente que Friedrich se refiere a distintos sentidos que tiene la palabra constitución, y alude incidentalmente, en uno de ellos, al de la limitación.

Por otra parte, ésa es la parte final, la conclusión. Todos los capítulos del citado autor, a quien he leído en su idioma original, terminan con una conclusión de breves palabras, que trata de compilar todo el pensamiento desarrollado en el capítulo. Le invito al señor diputado a la compulsa de todo el contenido del capítulo, para que se dé cuenta de que lo que acaba de decir es un cercenamiento absolutamente inaceptable del pensamiento de este gran maestro del derecho constitucional. Con esto dejo una vez más en pie la afirmación que realicé en el sentido del error de que la Constitución sea substancialmente una limitación del poder público, y no una de las acepciones de la palabra constitución, que es una pervivencia que cualquiera que conoce el proceso de las naciones de Occidente sabe que ha surgido de esa concepción de la época en que los barones federales reclamaban de la monarquía absoluta, concesiones de libertad y de franquicias.

Sr. Dellepiane. — Los justicia de Aragón lo decían en una hermosa frase.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

Sr. Ministro del Interior. — Señor presidente: a la una y treinta de la mañana, después de tan prolongada sesión, con discursos realmente interesantes pronunciados en pro y en contra del despacho que está en consideración, voy a circunscribirme a expresar muy brevemente el pensamiento del Poder Ejecutivo en este asunto, ya que la Honorable Cámara ha tenido la amabilidad de invitarme para exponer esa opinión.

En primer término, me parece esencial declarar que a juicio del Poder Ejecutivo no está en discusión la Constitución del 53; no estamos juzgándola. No es éste el momento de considerar si esa Constitución ha servido eficientemente todo el período de su vigencia o ha tenido algunas fallas. Es posible que pueda sostenerse una y otra cosa.

Lo indiscutible es que estamos viviendo un momento excepcional, un período histórico, que ha de señalarse con rasgos particulares, y es entonces éste el momento en que hay que actualizar la Constitución nacional.

El Poder Ejecutivo entiende que la Constitución actual, con todas sus virtudes, con todo lo útil que ha sido para el progreso del país y sobre todo para la organización y unidad nacionales, debe ser modificada, y debe serlo para ponerla a tono con el espíritu del momento, con el anhelo del pueblo, con las esperanzas de la argentinidad que no están totalmente reflejadas en la Constitución vigente.

Sin duda podría hacer un análisis de los conceptos filosóficos de la Constitución del 53, pero ya lo han hecho con bastante erudición y acierto los señores diputados que se ocuparon del tema. Es indiscutible que una Constitución individualista como la que rige ya no refleja el pensamiento del pueblo argentino, ya no es intérprete de la voluntad nacional, que es la soberana, que es la que en primer término debe privar.

Derechos individuales consagrados en forma absoluta por la Constitución van en detrimento de la colectividad, en menoscabo de los derechos sociales, perjudicando el sentido universal del momento y son una traba para el progreso económico, social y aun político del país.

Se podría hacer alguna incursión acerca del excesivo resguardo del derecho de propiedad que prevé la Constitución del 53; pero bastaría decir, para asegurar a los señores diputados y a la opinión pública, que esta Constitución —que el Poder Ejecutivo piensa que debe reformarse y que se reformará si se aprueba esta ley y triunfa el pensamiento que hasta este momento es mayoría en el país— será renovada con el concepto de terminar con el privilegio de la propiedad privada, para convertir a la economía capitalista en una economía social.

Es premisa esencial de la doctrina peronista —que algunos señores diputados han discutido y otros han manifestado no entender— que la economía capitalista ha terminado su ciclo y debe ceder paso a la economía social. Vale decir, tiene que ponerse al servicio de la colectividad todo el engranaje económico para que pueda aprovecharlo el pueblo que, hasta este momento, ha servido a la economía capitalista.

Sr. Balbin. — Traslado a Miranda.

Sr. Ministro del Interior. — Tampoco puede sostenerse —y, afortunadamente, nadie lo ha hecho— que el liberalismo, que campea en la Constitución del 53, es la doctrina que hoy triunfa en el mundo, y menos aún en la Argentina.

El liberalismo ha sido superado, ha cumplido su ciclo, ha beneficiado a una clase social, ha perjudicado, indiscutiblemente, a otra clase social, a la mayoría del pueblo trabajador y, en la actualidad, tiene también que ceder paso y dar lugar al pueblo, a la masa, a elaborar una auténtica constitución democrática.

El aspecto político está suficientemente garantizado si se dice que el movimiento peronista es un movimiento popular, auténticamente democrático, inclusive con los defectos de la democracia. Pero, indiscutiblemente, es democrático. Sería suicida que un movimiento democrático y popular pretendiera hacer una constitución que no garantizara los derechos del pueblo y no resguardara el régimen democrático. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Vítolo. — Habrá que ver qué entiende por democracia el peronismo.

Sr. Ministro del Interior. — Para tranquilidad de los señores diputados puedo decir que el peronismo, como doctrina, no es totalitario: es esencialmente antitotalitario, es antiindividualista: es peronista. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Rojas (N.). — ¿Cómo quedan las libertades políticas?

Sr. Vítolo. — ¿Me permite una interrupción, señor ministro, con anuencia de la Presidencia?

Sr. Ministro del Interior. — Sí, señor diputado.

Sr. Vítolo. — El señor ministro ha hecho manifestaciones respecto del liberalismo. Supongo que se ha referido tanto al político como al económico.

Ha señalado, asimismo, que el peronismo no es totalitarismo.

Sr. Ministro del Interior. — Así es.

Sr. Vítolo. — Yo quisiera saber —y supongo que el pueblo y los señores diputados también—, ya que el señor ministro desempeña la cartera política del gobierno, en forma concreta, para que todos nos enterásemos, qué es eso de que el peronismo es peronismo.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Cuando se habla de liberalismo, de marxismo o de totalitarismo, los peronistas contestamos que no estamos en pro ni en contra de ninguna doctrina.

El peronismo es una nueva doctrina que no tiene compromisos con ninguna otra, que no tiene por qué preocuparse de si las otras son buenas o malas, porque entiende que han fracasado, que no han dado el resultado que la humanidad esperaba. En consecuencia, la doctrina peronista es distinta: tiende a crear un nuevo derecho, sin suprimir los derechos individuales, que suprime el totalitarismo.

La verdad es que con todas esas doctrinas tan respetadas por muchos señores diputados y comentadas por tratadistas, profesores y hombres de estudio, la humanidad ha ido cayendo en desgracia. La humanidad no es feliz. Es esta una verdad indiscutible. En una sola generación ha

habido dos guerras terribles que fueron resultado de esas políticas, de esos conceptos de la vida que no queremos aceptar, porque tenemos el privilegio de no haber participado de esas guerras y de habernos librado de los intereses en lucha y emancipado ideológicamente de los extremos de izquierda y de derecha para crear un sentimiento argentino que da lugar a esta nueva doctrina que es el peronismo. (*Aplausos.*)

La revolución peronista tiene su doctrina y es una revolución, por más que la hayan discutido esta noche, porque ha cambiado el derecho, los conceptos y sobre todo el estado político y social de la República.

Sr. Rudi. — Y la libertad de prensa.

Sr. Ministro del Interior. — Desearía que no se subalternizara el debate con pequeñas referencias de carácter político circunstanciales y, sobre todo, inexactas.

Sr. López Serrot. — Escuchamos al político, defendiendo la revolución, no al ministro.

Sr. Rumbo. — Es un ministerio esencialmente político.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señores diputados: invitado el señor ministro a concurrir a la Cámara, es lógico que lo respeten en el uso de la palabra.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — No puedo admitir que los señores diputados de la oposición me dicten el discurso que ellos quieren que pronuncie. Yo diré el discurso que corresponde en nombre del Poder Ejecutivo. En todo caso, quien podría discutirlo sería el presidente de la República, pero no los señores diputados. (*Aplausos.*)

No le debo el favor de estar sentado aquí a ningún diputado de la oposición.

Sr. López Serrot. — No está en un comité peronista.

—Hablan simultáneamente varios señores diputados, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Es necesario que yo haga estas referencias, porque se ha negado la revolución, se ha negado la doctrina peronista, y yo formo parte de un gobierno peronista.

Sr. López Serrot. — ¡Del gobierno de la Nación!

Sr. Ministro del Interior. — Del gobierno de la Nación, pero peronista. (*Aplausos.*)

No vengo aquí a hacer un discurso convencional y caballeresco para no enojarme con nadie, sino que vengo a decir la palabra de un gobierno que lo es de todos los argentinos, porque el pensamiento que tiene el gobierno es el que aprobó el pueblo y el que responde al mandato que le dió la ciudadanía. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

He dicho que la revolución era necesaria. Quienes clamaban por una revolución fueron justamente los representantes de la Unión Cívica Radical; clamaban desde estas mismas bancas.

He escuchado que desde esas mismas bancas del sector de la derecha, cuando las ocupaban los conservadores, que éstos desafiaban a los radicales para que conquistaran por sus propios medios la libertad de sufragio y les decían que no eran capaces de hacer una revolución. De modo, entonces, que no tienen derecho ahora a reprochar al ejército y al pueblo; sobre todo al pueblo trabajador, que es el que hizo la revolución, que ustedes no pudieron hacer, para terminar con el fraude. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Rumbo. — Es una tremenda verdad histórica.

Sr. Ministro del Interior. — En pleno triunfo revolucionario, con nuestro solo esfuerzo, sin la colaboración de los que más clamaban por esa revolución, con la oposición de esos mismos sectores...

Sr. Balbin. — Y del señor ministro, que conspiró contra Perón.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Le voy a recomendar especialmente al señor presidente de la Nación, que lea la información tan interesante que le proporciona el señor diputado Balbin, en el sentido de que su ministro del Interior conspiraba contra el coronel Perón.

Sr. Rojas (N.). — Conspiró en la calle Tres Sargentos, con el teniente coronel Pomar.

Sr. Ministro del Interior. — Lo que ocurre, señor diputado, es que ustedes hicieron de la conspiración un oficio que nunca aprendieron. (*Risas.*)

Sr. López Serrot. — Y otros hicieron...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor ministro del Interior.

Sr. Ministro del Interior. — La revolución triunfante por medio del ejército, el 4 de junio...

Sr. López Serrot. — De la que no participó el señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — Sí; yo no participé.

Sr. López Serrot. — Estuvo en contra.

Sr. Ministro del Interior. — Sí; yo estaba en contra de algunos hombres de esa revolución.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia pide al señor diputado por la Capital que respete al señor ministro del Interior, como la Presidencia lo ha hecho respetar al señor diputado por la Capital.

Sr. Ministro del Interior. — Después de esa revolución triunfante vino el 17 de octubre, revolución del pueblo, revolución de los trabajadores, de los descamisados, de los de alpargatas, de los que no han podido leer libros porque la oligarquía no les permitía la instrucción necesaria.

A esa gente que desprecian, a esa gente hay que darle la Constitución que se pide...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — ...una Constitución con los derechos del trabajador.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Es extraordinario el respeto por el uso de la palabra que tienen los señores diputados.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Ahora se quiere negar a este movimiento peronista; que no es un partido, que es un movimiento, que comprende a la Nación misma...

Sr. del Carril. — Es un partido único.

Sr. Ministro del Interior. — No es un partido único; la prueba está en que se hallan aquí los señores diputados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. López Serrot. — Lo será.

Sr. del Carril. — La prueba es que el señor Sammartino no está aquí.

Sr. Ministro del Interior. — Este movimiento peronista tiene derecho a dictar una Constitución, que es la que quiere el pueblo de la República, y que queriéndola la mayoría del pueblo es para todos los argentinos, porque ésa es la verdadera democracia. No se puede pedir la unanimidad para aprobar la reforma de una constitución. (*¡Muy bien!*) Basta con que la mayoría la considere necesaria. Es una constitución para todos los argentinos. De esa reforma, que no tendrá ningún tinte totalitario, pero que despojará a la actual Constitución del excesivo liberalismo e individualismo de que está imbuída, se beneficiarán todos, inclusive los señores diputados de la oposición.

Tendrían que ser un poco más generosos con este movimiento, que los ha reivindicado políticamente, que les ha restituido los derechos electorales y cívicos que habían perdido y que no podían reconquistar por sus propios medios.

El 17 de octubre salieron a la calle los trabajadores para reconquistar a su jefe, al líder de esta revolución, para que luego desde el gobierno pudiera asegurar las libertades que ahora se están discutiendo y al mismo tiempo disfrutando.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Ministro del Interior. — Hay clima en el país para la reforma de la Constitución. Lo hay, porque así lo ha proclamado el propio presidente de la República con el aplauso del pueblo. Así lo ha dicho en este recinto el 1º de mayo, al inaugurar el período de sesiones del Congreso. Así lo ha dicho el movimiento peronista en todo el país, antes de las últimas elecciones del 7 de marzo. El pueblo ha votado al peronismo sabiendo que quería la reforma de la Constitución. En consecuencia, no hay ninguna sorpresa sino un juego limpio y abierto de progreso para las instituciones y para la Carta Magna del país. *(Aplausos.)*

Esta reforma de la Constitución va a colocar a la Nación a la cabeza en esta materia. Va a estar en situación de privilegio con respecto a todos los otros países y ha de servir de orientación a otros pueblos. No queremos inmiscuirnos en la política de otras naciones, pero deseamos a los obreros de otros países la suerte que tienen los trabajadores de la República Argentina. *(Aplausos.)*

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa con la palabra el señor ministro del Interior.

Sr. Ministro del Interior. — Por mal que se piense, esta Constitución será un orgullo para la Nación Argentina. El temor que abrigan los señores diputados es justamente la garantía que se le ofrece al pueblo argentino: que será una Constitución inspirada en la doctrina peronista, que asegurará las libertades individuales, pero no a tal punto que esas libertades afiancen el privilegio de las minorías.

No ha de establecer el privilegio del derecho de propiedad en la forma absoluta actual. Ha de dar a la masa del pueblo todos los derechos que hasta ahora tiene en forma relativa.

Hay que estructurar una Constitución que permita una economía distinta: una economía que no esté dominando al país, sino una economía dominada por los intereses de la Nación.

No queremos que ésta sea una colonia disimulada, de libertad declamatoria, pero de esclavitud efectiva; queremos que éste sea un país económicamente libre, como tenemos el orgullo de decir que es políticamente libre. *(¡Muy bien!)*

(¡Muy bien!) Esto no puede disgustar a nadie; puede haber prevenciones de carácter partidario, puede haber declaraciones de adversarios circunstanciales, pero la verdad es que la historia habrá de juzgar esta Constitución como un avance, como un progreso para la Argentina.

Tenemos que decirlo para orgullo de esta generación: con ello habremos cumplido con nuestro deber, al haber realizado una revolución, al haberla afirmado, al haberla asegurado y, al mismo tiempo, al haberla dejado reflejada en un estatuto jurídico que sirva a las generaciones futuras.

Nada más. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Considero que está suficientemente debatido el problema que ha dedicado esta sesión la Cámara, y hago moción de cerrar el debate.

Sr. Pérez Martín. — Si me permite el señor presidente, quisiera hacer una pregunta.

Sr. Presidente (Cámpora). — Debe votarse la moción de orden del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pérez Martín. — ¿Cuántos oradores hay anotados?

Sr. Presidente (Cámpora). — Catorce señores diputados.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. del Carril. — Formulo indicación de que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar nominalmente la moción de cierre del debate, formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señores diputados: se está votando; el momento de la votación debe ser respetado por todos los señores diputados.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 130 señores diputados han votado 96 por la afirmativa y 34 por la negativa.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Bonazzola, Candioti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley sobre reforma de la Constitución.

Sr. Uranga. — Pido que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 130 señores diputados, votan 96 por la afirmativa y 34 por la negativa. Los dos tercios son 87 señores diputados.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carrera, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Bonazzola, Candioti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Rojas (N.). — Resultó rechazada.

Sr. Uranga. — Pido la palabra para referirme al resultado de la votación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — La Secretaría acaba de proclamar el resultado de la votación manifestando que se han obtenido los dos tercios. Naturalmente, se han obtenido los dos tercios de los votos presentes en este instante de la sesión.

La Constitución, en su artículo 30, para considerar viable la ley que establezca la necesidad de la reforma de la Constitución, exige que el pronunciamiento favorable sea de «los dos tercios de sus miembros».

En mi exposición, que seguramente no repetiré, aclaré perfectamente el concepto «Congreso». Me referí a una gran cantidad de disposiciones de la Constitución donde se menciona al Congreso, especialmente en este país que ha adoptado el régimen bicameral y donde las leyes sufren doble discusión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tampoco he de repetir los argumentos que he dado en el sentido de que son necesarios los dos tercios de

los miembros totales, del quórum legal, del quórum óptimo de la Cámara, es decir referido a 158 señores diputados.

Es evidente que los dos tercios, considerando el quórum legal referido, son 105 y fracción, es decir, 106 señores diputados. Tengo entendido, según lo ha manifestado la Secretaría, que el número de votos por la afirmativa ha sido 96. Evidentemente, no ha sido alcanzado el límite que fija el artículo 30 de la Constitución, ni siquiera ha sido alcanzado el límite de 102, en el caso de que pudiera sostenerse la teoría de que la Constitución se ha referido solamente a los diputados que han jurado y están en el ejercicio de su mandato.

Sostenemos la teoría de que son necesarios 106 votos, destacando que ese número no ha sido alcanzado, ni siquiera el de 102.

Sr. Visca. — Esa es una opinión.

Sr. Uranga. — ¡Naturalmente!, y éste es un lugar en el que se expresan opiniones.

El sector de la Unión Cívica Radical considera que ha sido rechazado el proyecto de ley que declara necesaria la reforma de la Constitución. Además, estimamos que encontrándonos en el momento inicial de un movimiento realmente importante, y disponiendo el sector de la mayoría de la posibilidad de obtener el número de votos necesarios para lograr los dos tercios en la forma que he expresado, es preciso que se deslinden las responsabilidades respecto de lo que está ocurriendo.

En estos instantes no ha obtenido la Cámara de Diputados de la Nación los dos tercios necesarios para reformar la Constitución nacional que lleva 95 años de vigencia. Este es el concepto del sector de la Unión Cívica Radical.

Sr. Rojas (N.). — Se trata de otra violación de la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Señor presidente: ya en este asunto ha sido fijado el criterio con que ha venido actuando el bloque peronista en esta sesión, cuando en mi carácter de miembro informante del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales hice una revisión detallada de las tres teorías existentes en la doctrina, respecto de la interpretación exacta del artículo 30 de la Constitución nacional.

Expresé en aquel entonces que la primera teoría es la que exige que sean dos tercios de los miembros del cuerpo, considerando que el artículo 30, cuando establece que «la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros», se refiere a los miembros del cuerpo.

Sostuve entonces, y lamento tener que repetir los argumentos, que de ninguna manera la Constitución ha pretendido exigir en este artículo que

se refiere a los dos tercios del total, porque de lo contrario lo hubiera dicho expresamente, como lo hace en el artículo 72. Simplemente, los Constituyentes del 53 han dicho «miembros» y como es lógico suponer, se refieren a los miembros presentes.

Además, el artículo 56 establece los requisitos para que la Cámara entre a funcionar en el ejercicio de sus facultades constitucionales, vale decir, con la mayoría absoluta, la que se establece con la mitad más uno de sus miembros.

Sr. Uranga. — De todos los miembros.

Sr. Bagnasco. — Integrándose el quórum legal con la mitad más uno de sus miembros la Cámara entra a funcionar. Es el caso que expuse como ejemplo. La Cámara puede sesionar con setenta y nueve diputados y su presidente y considerar la necesidad de la reforma de la Constitución. ¿Cómo es posible que no pueda llegar, por el hecho de fallecimientos, de exclusiones o de renunciaciones de diputados, al cumplimiento de la función que determina el artículo 30?

Sr. Rojas (A.). — Habrá que integrar el cuerpo.

Sr. Bagnasco. — Es decir, pues, que estando la Cámara con quórum, con los dos tercios de los miembros presentes, sanciona y cumple el requisito del artículo 30 de la Constitución.

Cité también a este respecto la opinión de Hamilton, quien establecía que llegaríamos al absurdo jurídico de que una minoría impidiera a la mayoría el ejercicio de los derechos constitucionales, si pudiéramos sostener, por vía de hipótesis y por un error de interpretación de la Constitución, que ella se refiere en el artículo 30 a los dos tercios de los miembros del cuerpo.

Estas disposiciones son claras y son las que ha sostenido el bloque como fundamento de su actuación de hoy. Por eso no nos hemos preocupado de nuestro número que, como es sabido, supera por cierto la exigencia de esa hipótesis que sostiene la minoría, pero que nosotros desde luego rechazamos en forma absoluta.

Creo que con esto quedan contestados los argumentos de la minoría.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Solicito el cierre del debate sobre este asunto y pido que la Cámara pase a votar. Las opiniones de los señores diputados serán respetables, pero no convencerán.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cerrar el debate, formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 128 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — No dialoguen los señores diputados.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia somete a consideración de la Honorable Cámara la cuestión planteada de si con 96 votos, sobre un quórum de 130 señores diputados, se cumple el requisito exigido por el artículo 30 de la Constitución nacional.

Sr. Uranga. — No puede reformarse la Constitución...

Sr. Balbin. — Si el señor presidente somete a la decisión de la Cámara esa indicación, es porque duda de la seriedad de la votación.

Sr. Presidente (Cámpora). — No, señor diputado. La Presidencia no tiene ninguna duda.

Sr. Balbin. — La Cámara no puede reformar la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado sabe que se ha planteado la cuestión y que la Presidencia no puede resolverla, sino la Cámara.

Sr. Uranga. — La Cámara no interpreta la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — Planteada una cuestión, y ante diversas interpretaciones, la Cámara decide, no la Presidencia.

Sr. Visca. — Así es.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar si con 96 votos, sobre un quórum de 130 señores diputados, se cumple el requisito que exige el artículo 30 de la Constitución nacional.

Sr. Visca. — Solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a practicar la votación nominal.

Sírvanse marcar su voto los señores diputados.

Sr. Gil Flood. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se está votando, señor diputado.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Han votado 96 señores diputados por la afirmativa y 33 por la negativa.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fre-gossi, Garaguso, Garay, García, Giménez

Vargas, Haramboure, Iburguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso, Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Balbin, Bonazzola, Candioti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Vítolo. — Hago indicación de que se inserte en el Diario de Sesiones la versión taquigráfica de la última reunión celebrada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre este asunto.

Sr. Bustos Fierro. — Que se vote.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el pedido que acaba de formular el señor diputado por Mendoza.

Sr. Miel Asquía. — Que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar en forma nominal el pedido de inserción formulado por el señor diputado por Mendoza.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (González). — Han votado 96 señores diputados por la negativa y 33 por la afirmativa.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fer-

nández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi (h.), Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Balbin, Bonazzola, Candioti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Quiero expresar, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, que habiendo votado la mayoría que para aprobar el proyecto de ley bastan los dos tercios de los diputados presentes —con lo que creemos se va a sancionar una ley nula—, no participaremos en la discusión en particular, concretándonos a votar en contra.

Sr. Balbin. — Quiero agregar que nuestro sector se reserva el derecho de hacer valer este hecho en la instancia que considere oportuna.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Ya que la oposición, para cuestionar la nulidad de esta ley, ha hecho referencia al número de diputados que se requiere en la votación, deseo que en el Diario de Sesiones conste, con motivo de este debate, lo siguiente, que tomo de una exposición del señor diputado Cooke: «En cuanto a la reforma de la Constitución, el Honorable Senado insistió en su sanción de reforma el 9 de julio de 1866 por 17 votos contra 3.» El Senado tenía treinta miembros: dos representantes por cada provincia y dos por la Capital Federal. Y continúa: «En una sanción relativa a la materia más importante, como es la reforma de la Constitución, para la insistencia bastaron 17 votos a fin de constituir los dos tercios que requiere el artículo 71. Al hacerse la reforma de 1898 se produce igual situación; votaron por la insistencia 18 senado-

res, siendo 20 los dos tercios de la totalidad del cuerpo.»

He leído un párrafo del discurso del señor diputado Cooke en la exposición con que fundaba su proyecto de reforma de la Constitución.

El antecedente traído es absolutamente exacto. El Senado de la Nación con dos tercios de los senadores presentes insistió en dos sanciones sobre reforma de la Constitución: la de 1866 y la de 1898.

Sr. Vítolo. — Si me permite el señor presidente...

Sr. Presidente (Cámpora). — No hay nada en discusión...

Sr. Vítolo. — Para que no quede duda, quiero aclarar que he leído los diarios de sesiones en los que aparecen los debates sobre las leyes que declararon la necesidad de la reforma constitucional en las dos ocasiones a que acaba de referirse el señor diputado por la Capital. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores las sanciones respectivas contaron con los dos tercios que exige la Constitución. El señor diputado hace referencia a una cuestión distinta y que no está vinculada a la sanción de la ley, sino a un procedimiento procesal interno del cuerpo legislativo, cual es la insistencia en una sanción anterior.

Aclaro que en 1898 en la Cámara de Diputados votaron 61 diputados por la afirmativa y 13 por la negativa; y en el Senado la versión dice simplemente que obtuvo mayoría general.

Los datos que suministra el señor diputado se refieren a la insistencia en la sanción y no a la necesidad de la reforma. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Colom. — La necesidad de la reforma fué establecida en la insistencia de la ley...

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Pérez Martín. — Ratifico lo que acaban de expresar mis colegas de sector los señores diputados Uranga y Balbin.

Quiero añadir que cuando se reformó la Constitución nacional en el año 1897 el constituyente Vedia, refiriéndose a los devaneos reformistas que a veces agitan la vida de los pueblos, relató una anécdota citada por Demóstenes. Este recordaba que en la Grecia clásica existía un pueblo, el de los locrianos, que tenía un gran respeto por las leyes y por las tradiciones de libertad de su nación, y así, cada vez que llegaba a la asamblea del pueblo un representante proponiendo la reforma de la ley, lo hacía entrar a la misma con una soga al cuello. Si la asamblea consideraba que la reforma era buena, el hombre podía salir indemne, pero si consideraba que atentaba contra la libertad del pueblo y era ilegal y arbitraria, los demás representantes tiraban de la soga para ahorcar al autor del proyecto.

No vaya a ser que algún día el pueblo venga a tirar de la sogá que debieron traer los señores diputados de la mayoría y el señor ministro...

Sr. Visca. — Ya que el señor diputado entra en el terreno de las anécdotas, le aclaro que la apelación formulada por el señor diputado se dilucidará en el valle de Josafat.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 1º del proyecto de ley.

Sr. Rumbo. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar nominalmente el artículo 1º.

— Se practica la votación nominal.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernádez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinaldé, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Rouggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urutiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

— Votan por la negativa los señores diputados: Balbin, Bonazzola, Candiotti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vitolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 129 señores diputados, votan 96 señores diputados por la afirmativa y 33 por la negativa; los dos tercios son 86.

Sr. Uranga. — Queda rechazado el artículo 1º del proyecto, por aplicación del artículo 30 de la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Cámara no opina como el señor diputado.

En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 127 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Marini. — He de votar solidario con mi bloque, pero quiero dejar sentada una expresión de deseos, en cumplimiento de un deber y respondiendo a la voluntad del pueblo de mi provincia, que se ha manifestado por intermedio de sus organizaciones culturales y gremiales y por la unidad de la Cámara de Diputados, de que se fijase como sede de la convención la ciudad de Santa Fe.

Funda la aspiración del pueblo de mi provincia la razón histórica de que haya sido la sede en que los Constituyentes del 53 plasmaron la Carta Magna que nos dieron aquellos ilustres varones. Santa Fe reclama en esta hora vivir el momento histórico que vive la República.

Dejo así fundada esta expresión de anhelos.

Sr. Albrieu. — La comisión mantiene su despacho.

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado ha formulado simplemente una expresión de anhelos.

Se va a votar el artículo 3º del proyecto de ley.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que se vote nominalmente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyada la indicación de votación nominal.

— Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar nominalmente el artículo 3º del proyecto de ley.

— Se practica la votación nominal:

Sr. Secretario (González). — Han votado 127 señores diputados: 96 por la afirmativa y 31 por la negativa. Los dos tercios son 85.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernádez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Colom, Conte Grand, Cooke, Cursac, Decker,

Degreef, de la Torre, Díaz (C. A.), Díaz (M. M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N. M.), Rossi, Ruggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Balbin, Bonazzola, Candiotti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

Sr. Miel Asquía. — Pido que se vote nominalmente.

Sr. Balbin. — Con la aclaración de que nuestro bloque vota por la negativa en todos los artículos, es innecesaria la votación nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿Insiste el señor diputado por la Capital?

Sr. Miel Asquía. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyada la indicación de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar nominalmente el artículo 4º del proyecto de ley.

—Se practica la votación nominal:

Sr. Secretario (González). — Sobre 129 señores diputados, votan 96 por la afirmativa y 33 por la negativa. Los dos tercios son 86.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Allub, Astorgano, Atala, Ayala López Torres, Bagnasco, Beretta, Bernárdez, Bonino, Brugnerotto, Bustos Fierro, Butterfield, Camus, Cané, Carreras, Casas Noblega, Cleve, Co-

lom, Conte Grand, Cooke, Cursack, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz (C.), Díaz (M.), Díaz de Vivar, Dri, Erro, Estrada, Fernández, Ferrando, Filippo, Forteza, Fregossi, Garaguso, Garay, García, Giménez Vargas, Haramboure, Ibarguren, Lagraña, Lareo, Lasciar, Leloir, Lema, Letamendi, Lucini, Mariategui, Marini, Marotta, Martínez Luque, Messina, Miel Asquía, Montes, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Novellino, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquali, Pereyra, Pirani, Pontieri, Repetto, Reynés, Ricagno, Roche, Rodríguez (M.), Rodríguez (N.), Rossi, Ruggier, Rumbo, Sánchez, San Millán, Saporiti, Saravia, Sarmiento, Seeber, Silvestre, Tejada, Tilli, Tommasi, Toro, Urtiaga Bilbao, Valdez, Varea, Velloso Colombres, Vergara, Villacorta, Visca, Vischi y Zamudio.

—Votan por la negativa los señores diputados: Balbin, Bonazzola, Candiotti, Cufre, Dávila, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Fajre, Ferrer, Frondizi, Gil Flood, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mántaras, Mercader, Monjardin, Noriega, Pérez Martín, Rabanal, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rudi, Santander, Sobral, Solá, Uranga, Vanasco, Vítolo, Zanoni y Zavala Ortiz.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 5º.

Se va a votar.

Sr. Astorgano. — Hago indicación de que se vote en forma nominal.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—No resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — No ha resultado suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

Se va a votar el artículo 5º del proyecto de ley.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 129 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 6º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 96 votos; votan 129 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 7º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 129 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 8º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 96 votos; votan 129 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 9º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 124 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 10.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 96 votos; votan 127 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 11.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 95 votos; votan 125 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda sancionado el proyecto de ley. (*Aplausos.*)

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Propongo que, como parte integrante de la opinión de este sector, y para conocimiento de los señores diputados y del pueblo de la República, se inserte en el Diario de Sesiones el texto de la doctrina peronista, que voy a entregar a la Secretaría.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gil Flood. — Que se dé lectura...

Sr. Presidente (Cámpora). — Se está votando.

— Resulta afirmativa de 94 votos; votan 113 señores diputados.

Sr. Visca. — Hago indicación de que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la sesión.

— Es la hora 3 del día 14 de agosto de 1948.